

Luis Alfonso Herrera Robles

(1974, Ciudad Juárez, Chih., México)
Doctorado en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona, Maestro en Ciencias Sociales para el Diseño de Políticas Públicas y Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Actualmente es Docente Investigador en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Colaborador del Centro de Trabajadores Agrícolas Fronterizos de El Paso, Texas y miembro del Cuerpo Académico de Investigación 56: Globalización Ciudadanía y Democracia de la UACJ. Ha sido Jefe del Departamento de Ciencias Sociales y ex Coordinador del Programa de Estudios Internacionales e Interculturales de El Colegio de Chihuahua. Desde hace años participa como activista social con el Grupo de ex braceros de Ciudad Juárez.

Entre sus últimos libros destacan: *Memorias de braceros. Olvido y abandono en el norte de México* (2012), *La sociedad del abandono. Ensayo sobre la vigilancia anticipada en las sociedades contemporáneas* (2010) y *El desgobierno de la ciudad y la política de abandono. Miradas desde la frontera norte de México* (2007).



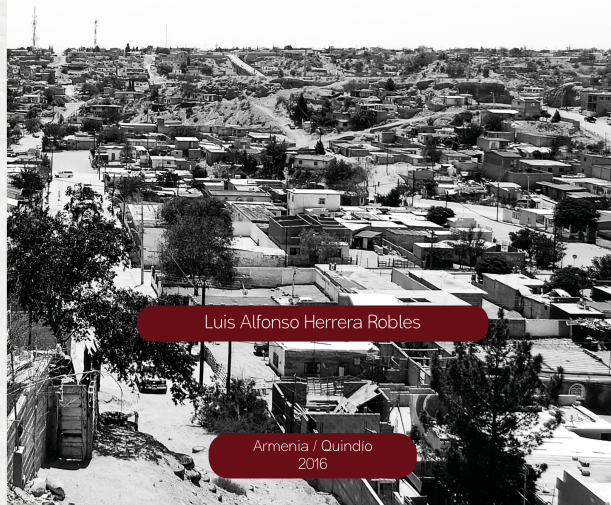
UNIVERSIDAD
DEL QUINDIO

Por una Universidad
PERTINENTE CREATIVA INTEGRADORA

Ciudad Juárez, Chih, México

Descomposición social y degradación urbana

Ensayos sobre la ciudad
en la era de la precarización



Luis Alfonso Herrera Robles

Armenia / Quindío
2016

Facultad de Ciencias Humanas y
Bellas Artes

Universidad del Quindío

Descomposición social y degradación urbana

Ensayos sobre la ciudad
en la era de la precarización

A los pobres urbanos y excluidos sociales, que viven los malestares de las malas urbanizaciones y de las tramas de corrupción de las ciudades latinoamericanas.

A Manuel Robles Flores, humanista, luchador social fronterizo y defensor del medio ambiente en el Valle de Juárez, México.

Herrera Robles, Luis Alfonso.

Descomposición Social y Degradación Urbana: Ensayos Sobre la Ciudad en la Era de la Precarización.
Luis Alfonso Herrera Robles. Armenia, Quindío. Universidad del Quindío. 2016.

130 p; 177, 8 X 215, 9 mm.
Incluye bibliografía.
ISBN: 978-958-8593-69-2

1. Ciudad
2. Degradación
3. Precarización

© Todos los derechos reservados.

© Primera edición, 2016.

Editorial: Universidad del Quindío / 2016

Impreso en Colombia.

Printed in Colombia.

Rector: José Fernando Echeverry Murillo.
Universidad del Quindío.

Vicerrector Académico: Carlos Alfonso Bustamante Gutiérrez.
Universidad del Quindío.

Vicerrectora Administrativa: Luz Estella López de Cadavid.
Universidad del Quindío.

Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo Social: Luis Fernando Polanía Obando.
Universidad del Quindío.

Decano: Pedro Felipe Díaz Arenas.
Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes.

Diagramación y diseño: Jose Hernando Morales Tique.
Diseño de portada: Jose Hernando Morales Tique.
Fotografía de portada: Luis Alfonso Herrera Robles.

Índice

Agradecimientos	9	
Introducción	13	
Parte I		
<i>Una caracterización de las sociedades contemporáneas</i>		
<i>Descomposición, desempleo y degradación social</i>	21	
Descomposición social y degradación urbana	24	
La economía de la pobreza	28	
Precarización como forma de vida urbana	37	
La urbanización de la pobreza	42	
La pobreza urbana en el espacio latinoamericano contemporáneo	47	
Desempleo: las sociedades de abandono	59	
Parte II		
<i>En busca de la política: descontento, desgobiernos</i>		
<i>y democracia deficitaria</i>	70	
Clase política, gobiernos y decrepitud	73	
Desgobierno, descontento y déficit ciudadano	79	
Los jóvenes y los (in) migrantes frente a la ciudadanía	84	
La democracia perfectible: rumores ciudadanos	89	
Parte III		
<i>Urbanismo y fronteras:</i>		
<i>Inseguridad y violencias en el siglo XXI</i>	91	
Ciudad y violencia en el sur global: la inseguridad ciudadana	95	
Amurallamiento de las ciudades y segregación residencial	106	
Parte IV		
<i>Reflexiones finales en un milenio urbano</i>		113
La ciudad no es el problema, es la solución	114	
Pensar para actuar y actuar pensando ¿Sociedad o barbarie?	120	
Bibliografía	124	

Agradecimientos

Este ensayo es producto de las inquietudes que despertaron mis encuentros y charlas de los últimos años, con autores como Jordi Borja, Armando Silva, Fernando Carrión, Enrique Oviedo, Javier Roiz, Antonio Colomer Viadel y Walter Mignolo; mismos a quienes he leído de manera paciente y atenta. En las charlas de café o en los seminarios académicos, donde se comparten ideas y conceptos, además de experiencias que se fincan en la amistad y el respeto a sus largas trayectorias. A todos ellos quiero hacer público mi agradecimiento, por su solidaridad y atenciones a quien desde la frontera de Ciudad Juárez, México, ensaya sobre temas urbanos en un contexto de descomposición social y degradación urbana que es evidenciado por las asimetrías que los Estados Unidos hacen evidentes de manera cotidiana.

En una ciudad fronteriza que desde la mirada del norte, es donde inicia América Latina, o desde los habitantes del sur, aquí termina. Que aún y cuando sostiene diferencias urbanas con el resto de las ciudades latinoamericanas, también conserva enormes parecidos de familia como la violencia, el narcotráfico, la corrupción política y la pobreza urbana. A mis colegas fronterizos Carlos González, Servando Pineda y mi hermano Arturo Herrera, les quiero agradecer las charlas e intercambio de ideas sobre la ciudad y las contradicciones de estas en las últimas décadas.

A mi esposa Alida Bueno e hijas Valeria Alitzel y Anna Montserrat por las horas que este ensayo les quita de convivencia familiar. Por su compañía paciente y comprensiva. A todos los involucrados en conseguirme bibliografía, recomendarme nuevos textos y libros sobre los temas urbanos y de ciudad que son parte de las lecturas obligadas para un proyecto como este breve ensayo. A mis ex becarios Francisco Reyes y Sarai Espinoza que han tomado con entusiasmo los Estudios urbanos y han retroalimentado mis lecturas y textos con sus atinados comentarios y reflexiones.

A manera de prólogo

Para la Universidad del Quindío, su Vicerrectoría de Investigaciones y la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes, son esenciales los procesos de socialización de las diversas actividades que se realizan dentro y fuera del plantel entorno a la investigación y el fomento de la misma. Por tal motivo, desde hace un tiempo el intercambio de docentes adscritos a grupos de investigación, en el marco del convenio con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México), ha incentivado los denominados *Seminarios Internacionales de la Facultad de Ciencias Humanas*. Para el caso que nos convoca, agradecemos al Dr. Luis Alfonso Herrera Robles su participación en nuestro seminario y celebramos este hecho con la presente publicación denominada *Descomposición Social y Degradación Urbana: Ensayos Sobre la Ciudad en la Era de la Precarización*. Libro que compila una serie de textos del Dr. Robles, en los que se indaga de forma crítica y brillante sobre las formas propias de la cotidianidad urbana y la ciudad contemporánea en América Latina, entendida esta última como el espacio de realización del ciudadano en una dimensión simbólico-expresiva, donde todas las prácticas sociales son interpretadas como unidad de pensamiento que es entrecruzado por las políticas públicas, la ciudad física, su economía y los denominados derechos a la ciudad. En otros términos, el enfoque de este libro pretende generar procesos de comprensión de lo urbano desde sus diversas dinámicas y relaciones con la realidad social. Aquí se hacen evidentes fenómenos transversalizantes que tienen lugar dentro de la contemporaneidad de la urbe como la precarización, la pobreza y la violencia; puntos de partida para interpretar y analizar, a la luz del enfoque que el autor plantea, diversas variables y hechos sociales contemporáneos.

Introducción

El mundo se urbaniza y, así sea por fuera de los cascos citadinos, este urbanismo ejerce su dominio sobre el resto de las especies, lo que puede ser el sentido civilizador del planeta (Silva: 2013). Un solo mundo. Caracterizado por la asistencia a una sociedad en descomposición, decadencia, decrepitud, desolación, desempleo, desamparo y desencanto generalizado de las viejas formas de ser moderno (Herrera, 2013).

Una reflexión inicial es pensar en que si algo está caracterizando a las ciudades contemporáneas del sur global, incluidas algunas del Primer Mundo, es su degradación urbana, el descontento ciudadano, la decrepitud e incapacidad de las clases políticas para resolver los asuntos públicos de las ciudades y sus ciudadanos, además de la descomposición social marcada por una precarización generalizada de los trabajadores con ingresos más bajos. Hemos entrado, por enunciarlo de alguna manera a una época marcada por la violencia urbana y social, a la inseguridad ciudadana y a nuevas formas de vida urbana que promueven el amurallamiento de las ciudades y la segregación residencial.

Pero qué tipo de ciudad está caracterizando a las urbes de distintas regiones y territorios, aquellas que en adelante se discuten a partir de este ensayo abreviado que intenta poner en evidencia las problemáticas más comunes para poblaciones —y territorios— tan amplias, diversas y distantes. Se parte del concepto de ciudad otorgado por el pensador contemporáneo catalán Jordi Borja en su libro *La ciudad conquistada*, “la ciudad <<emergente>> es <<difusa>>, de bajas densidades y altas segregaciones, territorialmente despilfarradora, poco sostenible, y social y culturalmente dominada por tendencias perversas de guetización y dualización o exclusión. El territorio no se organiza en redes sustentadas por centralidades urbanas potentes e integradoras, sino que se fragmenta por funciones especializadas y por jerarquías sociales” (Borja: 2003; 30).

Entonces, debemos preguntarnos, cuáles deberán ser los retos de las Ciencias Sociales, el Urbanismo y las Humanidades, y cómo incorporar viejas y

nuevas categorías, políticas y sociales a estos intrigantes devenires históricos y cambios de ciclo epocal que viven las ciudades. Pensamos que nuevas categorías o nociones como degradación, decrepitud, descontento, desorden, descomposición, desencanto, desempleo, desolación y otras más, pueden indicarnos una lectura fiel de las ciudades y sociedades contemporáneas, sobre todo de aquellas que se encuentran geopolíticamente en el sur global, pensando este <<sur>>; como una metáfora de la globalización que incluye ciudades y países del Primer Mundo. El profesor-investigador Antonio Colomer nos dice que:

Las sociedad contemporánea requiere un revulsivo moral ante la anemia ética en las relaciones interpersonales. La ideología de los derechos humanos que tiene un fundamento justo ante desigualdades y discriminaciones está degenerando en una concepción garantista de indemnizaciones por daños a derechos subjetivos que se priorizan sobre cualquier otro interés. (Colomer: 2015, 129)

Algunas de las categorías como degradación, son usadas por autores como Mike Davis para explicar la situación actual de zonas completamente invadidas por la pobreza extrema y el abandono institucional de los gobiernos locales, tal es el caso de su libro: *Planeta de ciudades miseria*, donde describe de manera extensa las condiciones de millones de habitantes del Tercer Mundo que sufren los malestares de las lógicas del capitalismo financiero. Aunado a las malas gestiones y actuación de gobiernos locales en lo que refiere a las políticas sociales.

La degradación hace referencia a las formas en las que las sociedades se van degradando a ritmos acelerados, el *Diccionario de Oxford* en lengua inglesa nos dice que degradar es: “rebajar el carácter o la calidad” ya sea referenciado a áreas o hábitats naturales y en este caso, a sociedades. En otra definición del mismo diccionario se habla de romper o deteriorar químicamente, también aludiendo a reducción, es decir, podemos entender por degradación social a procesos de reducción, rompimiento y deterioro de las sociedades y los individuos que las conforman.

Junto a esta terrible forma de degradación social, aparece la descomposición social y urbana, la descomposición alcanza ciudades, comunidades, pueblos y países enteros en América Latina, África y partes de Asia que después de las arremetidas de desastres naturales poco pueden hacer para impedir tal descom-

posición sanitaria, urbana y de la calidad de vida de los ciudadanos. La descomposición trata de las formas en que las cosas han *dejado de servir* o entender por descomposición, todo aquello que dejando de servir, ya no puede usarse para lo que fue hecho, en este sentido, la sociedad esta des-compuesta.

En un brillante ensayo de Alain Touraine, que apareció como *Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy*, el sociólogo francés nos habla de “El fin de la sociedad”. Donde nos comenta lo que él llamó “la destrucción de la sociedad”, mirada radical de aquello que formó parte de la primera modernidad y que en esta segunda modernidad de corte reflexiva —según Beck y Bauman—, estamos pasando por un momento histórico de desintegración. Hace décadas, Jean Baudrillard, a finales de la década de los 1970, nos ofreció otra mirada sobre este tema, el del supuesto “fin de los social” en su libro *Cultura y simulacro* aparecida en Francia en 1978. Si bien, la idea de la descomposición social no es nueva, la intención es pensarla desde el sur global y lo que ello implica.

Por otro lado, este ensayo, pretende colocar uno de los temas que creemos más urgentes y desafiantes para las Ciencias Sociales del siglo XXI, me refiero a la *urbanización de la pobreza*, como una de las nuevas formas de vida urbana que como lo adelantábamos con el urbanista norteamericano Mike Davis, esta caracterizado por la hiperdegradación de amplias zonas urbanas del planeta. La urbanización de la pobreza, es quizás una de las formas que se puede evidenciar la degradación y desorden urbano de lo que será este milenio de ciudades, donde el campo sigue achicándose y siendo comprimido por el crecimiento urbano que son impulsados como formas de gestión de gobiernos locales prestos a la corrupción y enriquecimiento ilícito.

Los viejos y nuevo pobres urbanos degradan sus vidas, precarizándolas laboral y económicamente, comunidades enteras sin acceso a los servicios, las nuevas tecnologías, el transporte, a la educación y la vivienda se convierten en parte de las estrepitosas estadísticas de una multiplicidad de formas de enunciar y clasificar la pobreza por parte de los Organismos Internacionales y gobiernos, llámense pobreza patrimonial, alimentaria, extrema, por ingresos, y que han dado por rebautizar como pobreza multidimensional moderada y extrema ¹. Reciente-

1 En el caso mexicano, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo social (CONEVAL), indica seis tipos de pobreza respecto al acceso a: la alimentación, seguridad social, a los

mente (julio de 2016), como caso patético, el gobierno mexicano a través de su Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), manipularon la metodología para medir la pobreza y reducir la misma estadísticamente.

Esta trivialización de la pobreza de manera institucional, nos dice las limitaciones de los Estados en la búsqueda de su erradicación, en casi ninguna de estas clasificaciones o tipos de pobreza se habla de instrumentar una política redistributiva de la riqueza nacional. La pobreza se asume por lo general, como uno de los males necesarios o consecuencias del capitalismo financiero, dejando a las fuerzas del mercado su solución. El desorden urbano que ha caracterizado a décadas de crecimiento de las ciudades latinoamericanas y africanas ha generado lo que podemos reconocer como no-ciudades, es decir, ciudades sin servicios, accesos a la centralidad del transporte público, a los centros de trabajo y en términos materiales, espacios y zonas urbanas sin infraestructura a las orillas y periferia de las ciudades.

Además, en esta primera parte del ensayo, haremos *referencia a las sociedades de abandono*, como parte de una reflexión anterior que evidenciaba la presencia del abandono como un componente o elemento que forma parte de las sociedades contemporáneas, la situación de abandono como condición, nos habla de la ausencia de las políticas gubernamentales e intervención social por parte del Estado en los asuntos públicos de las ciudades, de cómo lo referente a la cultura, los derechos sociales y la seguridad es caracterizada por un repliegue y desinterés de las autoridades locales, estatales o provinciales que dejan en situación de abandono a sus ciudadanos. En este tipo de sociedades, el desempleo y la precarización se apoderan de los ciudadanos, se vuelven parte de la vida cotidiana de millones de personas que deben aprender rápidamente a lidiar con la pobreza —en cualquiera de sus formatos— y la precarización de sus vidas donde; los bajos niveles de escolarización, el desempleo estructural, el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, el acceso a los servicios públicos, la vivienda digna y la salud, conforman un combo de malestares ciudadanos que puede llevar al sistema-mundo moderno a su colapso social y económico.

La soberanía alimentaria, la carestía y por otro lado la acumulación desmedida, forman una brecha social que la humanidad se había comprometido a

servicios básicos en la vivienda, la salud, acceso a la educación y por la calidad y espacios de la vivienda.

desaparecer, a los propósitos que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el nuevo milenio pretende frenar y desmontar para las próximas décadas. Pero a los buenos deseos se adelantan las tramas de corrupción, impunidad, nepotismo y enriquecimiento ilícitos de las clases gobernantes y funcionarios públicos que hacen de la función y servicio público una verdadera caja de ahorro. La precarización del sur global, es atravesada por hordas de desempleados, despidos masivos como consecuencia de los procesos de desindustrialización, de la aparición de las villas miseria, pueblos jóvenes, cinturones de pobreza, de las grandes favelas empobrecidas y la chabolización de grandes sectores del sur global.

Una imagen de miseria y degradación, de descomposición ilustra al Tercer Mundo, los avances y esfuerzos de gobiernos locales e incluso de la avanzada latinoamericana en Ecuador, es tirada hacia abajo por las lógicas del mercado y el capitalismo financiero. Millones de seres humanos deben experimentar la ausencia de la intervención del Estado en la disminución de la Urbanización de la pobreza, malestar que pensamos, caracterizará al siglo XXI y significará enormes gastos financieros y que finalmente provocará los efectos multitud que tanto han anunciado Toni Negri y Michael Hardt en sus libros sobre *Imperio*. Los pobres urbanos y los nuevos pobres inmigrantes, campesinos migrados a las ciudades, refugiados y desplazados por las guerras, conflictos interraciales, étnicos, políticos y religiosos se suman a las violencias sociales y urbanas que pululan los barrios marginales de las ciudades.

Por otro lado, en la segunda parte del ensayo, se procura evidenciar la relación estrecha entre la clase política, los gobiernos y la decrepitud que aparece como otro de los malestares de la historia reciente de las democracias latinoamericanas. Pero la decrepitud no solo aparece en el sur global, sino que hace mella en las clases dirigentes de Europa y el mundo angloamericano, los gobernantes pierden la confianza de sus electores y ciudadanos que descontentos salen a las calles y plazas a manifestar su coraje cívico, su ira ciudadana y denuncian la pérdida de la calidad de vida y bienestar alcanzado décadas atrás, las nuevas generaciones de jóvenes europeos miran con extrañeza las altas hipotecas, la falta de acceso a las viviendas y la caída de sus derechos sociales. Ni tanta educación y grados académicos (cuando los tienen) les salvan de tremenda precarización y descomposición social.

Por ello, la clase política y los gobiernos, aparecen en los diarios digitales y escritos con historias de corrupción de tramas urbanas y vinculadas a la impunidad de sus actos. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra decrepitud, aparece como forma de “suma vejez” o “extrema declinación de las facultades físicas, y a veces mentales, por los estragos que causa la vejez” y una tercera acepción nos habla de “decadencia extrema de las cosas” y más que de manera peyorativa criticar la vejez como forma natural de las personas a perder algunas capacidades físicas o mentales, hacemos alusión al envejecimiento de las ideas y las formas de la política por parte de las clases dirigentes que siguen anteriores inercias y recetas que han condenado al fracaso a la economía-mundo del planeta.

La decadencia de las clases políticas es evidenciada en los desgobiernos de muchas ciudades invadidas por el narcotráfico y el crimen organizado, más común en América Latina, pero no exclusivo de esta región, el narcotráfico se ha globalizado, marcando las agendas de decenas de gobiernos y agencias internacionales. Y podemos pensar que ha mayor decrepitud en la clase política, mayores los desgobiernos. Un mundo de abandonos nos rodea, los medios de comunicación nos ofrecen la salida falsa a una esperanza de telenovela que augura un mundo mejor y más próspero, pero fuera de las pantallas, la telerealidad se desordena y acomete en contra de los ciudadanos que cada vez se muestran más descontentos con el paro laboral y arrogancia de los gobernantes que prefieren continuar con la política de “gobiernos ricos, con pueblos pobres”, de “banqueros con casas y ciudadanos sin casas” o de “ciudades ricas, con ciudadanos pobres”.

Los barómetros o entidades encuestadoras que miden a nivel regional e internacional las percepciones de la ciudadanía respecto a sus gobiernos, dan cuenta de las malas evaluaciones. Pensemos que lo que está ocurriendo es un déficit de ciudadanía, donde la participación cada vez está más limitada a ciertos sectores de la población y grupos específicos de la sociedad que gozan de cierta formación profesional o técnica. El déficit ciudadano se traduce rápidamente en un déficit democrático. La debilidad de algunos gobiernos frente a poderes fácticos y las economías transnacionales modifican y merman las redes de acción público y reducen la eficiencia gubernamental en sus “luchas y combates contra

la pobreza”. La democracia, arrinconada en los lobbies de las compañías transnacionales, asegura inversiones en los países más pauperizados a cambio de la subcontratación, subempleo y precarización salarial. No se abona a la democracia, se apuesta al saqueo y la explotación de recursos y personas al corto plazo y sin responsabilidad social.

Por último, en la tercera parte, se analiza y piensa que estamos asistiendo a una era de la precarización (como lo sugiere este ensayo), es decir, como nunca, el mundo contemporáneo y sus habitantes, tiene un devenir incierto y precario. Las evidencias abundan en ciudades intermedias y pequeñas de la región, pero se hacen más evidentes en la metrópolis donde la competencia por los servicios públicos, el empleo y la seguridad es más complicada. El desempleo se convierte en uno de los mejores indicadores económicos para medir la pobreza de las naciones y ciudades. En su forma negativa, es decir, el desempleo, desmantela las viejas estructuras sociales y económicas de millones de familias y comunidades que se enfrentan a uno de los peores males de las sociedades contemporáneas. Basta pensar en la crisis europea y las altas tasas de desempleo desde el año 2008.

Por otro lado, se trata de evidenciar la violencia en el sur global, que puede ser leída desde la inseguridad ciudadana que se vive en muchas ciudades latinoamericanas, sin que esto implique su exclusividad regional. La inseguridad se ha convertido en uno de los ejes nodales de la elaboración de agendas gubernamentales y de las exigencias ciudadanas, incluso las economías de algunos países del Tercer Mundo dependen de los negocios ilícitos que genera el crimen organizado o a la inversa, los gobiernos locales hacen gastos públicos enormes en la compra de equipo táctico, capacitación, transporte moderno para las corporaciones policiacas, incremento de sueldos a los policías, y una serie de medidas que intentan palear la criminalidad que se ve marcada por miles de homicidios y un abanico de delitos que van desde el asalto a transeúntes, hasta homicidios del crimen organizado por ajustes de cuenta. Que decir de los feminicidios en el norte y centro de México, Centroamérica y su aparición en Sudamérica.

Sumado a esto, el miedo social, el pánico comunitario y el desconcierto de la población se traducen en cambios radicales de la fisonomía de las ciudades latinoamericanas, las ciudades modifican sus formas de vida urbana resguardán-

dose de las llamadas “clases peligrosas”, quienes pueden adquisitivamente atrincherarse en sus domicilios, negocios y trabajos invierten en la seguridad generando nuevos gastos a su economía doméstica. Aparecen el amurallamiento de las ciudades (Carrión, 2005) y su consecuente segregación residencial (Caldeira, 2010 y Carrión, 2005). Las clases medias y altas se cuidan de los pobres, los migrantes, y todas aquellas personas que les resulten sospechosos. El miedo al otro, reaparece con la ferocidad que la vieja antropología cultural había narrado de los salvajes y bárbaros que acechaban la civilización y el progreso humano.

Y por si fuera poco, la ilusión de un mundo sin fronteras como la metáfora de la globalización perfecta, se desvanece frente al surgimiento planetario de fronteras imaginarias que separan barrios y comunidades dentro de las ciudades. Es la división del norte y el sur global dentro de cada ciudad con sus fronteras internas entre las clases ostentosas y las “clases peligrosas”. Así, las fronteras imaginarias se convierten en verdaderas prácticas de exclusión del “otro”, el viejo problema del otro no europeo u occidental se transfiere a la sociedad del abandono planetaria.

En fin, este ensayo trata de las formas de descomposición, desencanto, degradación, descontento, desinformación y decrepitud que ésta experimentando el mundo contemporáneo. De los millones de desempleados estructurales que engruesan las filas de nuevos pobres, de marginados, excluidos sociales e inmigrantes que se quedan como parte de la *underclass* (subclase) que está condenada al fracaso y rechazo social. La desolación e incertidumbre de estos malestares está enfilando a las sociedades hacia al abismo, como lo dice Edgar Morin en uno de sus ensayos. Para ello, en la parte IV: *reflexiones finales en un milenio urbano*, se elabora un marco de referencia de cómo leer las sociedades contemporáneas.

Parte I

Una Caracterización de las Sociedades Contemporáneas

Descomposición, desempleo
y degradación social

En esta primera parte, el esfuerzo es realizar una caracterización de las sociedades y ciudades contemporáneas, haciendo uso de lo que creemos está dibujando la realidad social, con situaciones inéditas en la historia reciente del mundo moderno. Lo que dibuja de manera fiel nuestros tiempos es la descomposición social, la degradación urbana, el desempleo estructural y la decadencia de lo social y la política como viejas formas de organización económica de las sociedades modernas. El desplazamiento que el mercado finalmente ha conseguido de la política y la sociedad como categorías centrales de la vida de las personas, está provocando cambios y tensiones estructurales que tienen fatales consecuencias para millones de individuos que quedan atrapados en el desempleo y el desamparo de las instituciones políticas y los gobiernos locales.

Nadie es capaz de hacerse responsable de la degradación urbana de muchas ciudades en el sur global. La falta de servicios públicos, la ausencia de sistemas de salud adecuados a la población, el acceso a sistemas de transporte de calidad para los ciudadanos que se desplazan kilómetros para poder llegar a sus centros de trabajo y la precarización de las ciudades en cuanto a su mobiliario e infraestructura urbana que vulneran a los más pobres y los colocan en una condición de marginalidad y exclusión social alejándolos de cualquier posibilidad de centralidad urbana. Mientras, unos cuantos ciudadanos logran acceder y hacer uso de los espacios seguros en la ciudad y que se tratan de diferenciar y distanciar social y económicamente del resto de la población.

Por otro lado, el desempleo aparece como consecuencia del capitalismo financiero, de la constitución de una economía globalizada que privilegia el mercado por encima de las sociedades. El desempleo se hace estructural en países de África y América Latina condenando a millones a la economía informal, a una economía de la pobreza que precariza vidas y trabajos. El ciudadano pobre, es un pobre ciudadano sin seguridad social y laboral, desafiado socialmente, sin retiro, sin jubilación ni pensión al largo plazo, es el ciudadano que inunda las calles de las ciudades del Tercer Mundo. Con este déficit de ciudadanía, el tejido social se desmorona, las relaciones sociales se hacen conflictivas y complicadas.

“Si la relación social se debilita, si resurgen o se desarrollan fenómenos de anomia, si la falta de cohesión social y de cultura cívica se convierte en lamentaciones

permanentes, si vuelve el miedo a la ciudad y prevalece una visión apocalíptica de ella, entonces algo muy grave está ocurriendo. Los mecanismos de exclusión son diversos [en] las áreas donde se produce el círculo vicioso de la exclusión, donde se acumulan los efectos del desempleo, de la marginalidad territorial y cultural (minorías étnicas), de la pobreza, de la anomia interna, de la falta de reconocimiento social, de la débil presencia de las instituciones y de los servicios públicos y de la dificultad para hacerse oír y escuchar por las administraciones” (Borja: 2003; 224).

En este contexto, emerge la urbanización de la pobreza como fenómeno mundial, muy marcado en América Latina, como lo que será quizás el mayor gasto público de los gobiernos locales y Estados-nacionales del siglo XXI. Donde la pobreza tiende a urbanizarse ampliando su mancha urbana, sus desabastos alimentarios, su degradación urbana, su descomposición social y precarización de las formas de vida urbana. La sociedad del abandono se convierte en la metáfora de estos procesos sociales y urbanos. En las calles y barrios urbanos se agolpan jóvenes empobrecidos sin acceso a la educación y el trabajo, a las carencias de los jóvenes se suma su criminalización y persecución de todo tipo de corporaciones policíacas. La condición de abandono es la marca de millones de los pobres urbanos, los abandona el Estado, sus gobiernos, sindicatos, y autoridades de todo tipo que solo los mira como potenciales votantes electorales.

Así, esta caracterización pretende evidenciar las viejas y nuevas formas de descomposición social y degradación urbana, de sus fatales resultados para las ciudades en un sur que es cada vez más sur y cada vez, menos global. Las intenciones de Organismos Internacionales y políticas redistributivas de algunos Estados no alcanzan a semejante marginación y pobreza, la migración y desplazamientos humanos dan cuenta de ese fracaso de la intervención de los Estados y los buenos deseos de las agencias internacionales de las Naciones Unidas para tratar de frenar la carrera hacia el abismo que hemos tomado como civilización. Veamos entonces, como opera la descomposición y degradación en nuestras sociedades de abandono.

Descomposición, desempleo y degradación social

El juez Richard J. Goldstone, de Sudáfrica, miembro de su Tribunal Constitucional y antiguo fiscal jefe del Tribunal de las Naciones Unidas sobre Crímenes de Guerra, exponía que hay un deber colectivo por parte de la comunidad global para cooperar a fin de conseguir para las generaciones presentes y futuras una existencia humana y segura y libre de amenazas nucleares, guerras de agresión, actos de violencia masiva, graves violaciones de los derechos humanos, desplazamientos de la población en masa, destrucción medioambiental y degradación y pobreza (Colomer: 2015).

¿A qué asistimos en términos sociales y comunitarios? A una época de cambios y tensiones estructurales mediados por la descomposición social y la degradación urbana. Cómo entender y explicar estos tránsitos sociales y pasajes urbanos que dan cuenta de una radicalización de las viejas formas de vida urbana y de la aparición de nuevos malestares debido a las malas urbanizaciones y el poco ordenamiento urbano y social en las ciudades del Tercer Mundo. Atendidos a los tiempos del populismo esperanzador y las democracias representativas que nos gobernaban sin mediación ciudadana, hoy se encienden los focos rojos de las iras y el cólera de las multitudes desesperadas y hambrientas.

Otra respuesta a la pregunta formulada es la referente a la afirmación realizada por el profesor Fernando Carrión de la FLACSO Quito en Ecuador, quien comenta lo siguiente en su libro *Ciudad, memoria y proyecto*:

“...nos interesa formular la hipótesis de que nos encontramos viviendo en una ciudad totalmente diferente a la que teníamos hace poco más de una década o, lo que es lo mismo, que en América Latina se ha entrado en una nueva coyuntura urbana” (Carrión: 2010; 31).

Parecería ser que esta coyuntura urbana mencionada por Carrión, tiene como uno de los rasgos más evidentes de principios del siglo XXI, la descomposición de lo social. Aparecen sociedades individualizadas preocupadas por el

<<yo mismo>>, individuos desconectados de la familia, la comunidad y el centro de trabajo. Jóvenes y adultos que se trasladan en autobús, metro, tren y otros tipos de transporte masivo y semi-masivo que escuchan música y no escuchan al pasajero de al lado. Se desconectan socialmente con sus aparatos electrónicos dentro de casa, la clase, la estación de trabajo o vía pública. No se enteran y muchas veces no se quieren enterar de la realidad de los otros.

Esta auto exclusión y aislamiento individualiza lo público y comunitario, es la disolución de lo societal, de las formas de relacionarse con otros seres humanos, ciudadanos, familiares y vecinos. Esta individualización provoca un desgaste social que al tiempo se convierte en un estado de descomposición de las redes familiares y comunitarias, las redes electrónicas alimentan estas ausencias y suplantando las viejas relaciones sociales. Aunque las tecnologías de la información y el conocimiento provocan este desgaste social, no son todo el problema, también participan otros procesos de desocialización. La llamada crisis de las instituciones políticas y sociales hacen de lo político y lo social algo ajeno a los individuos contemporáneos.

Las sociedades de la modernidad, las que caracterizaron el mundo moderno, sus instituciones y mecanismos de inclusión están perdiendo fuerza ante el mundo de la información. Por otro lado, el trabajo como eje central de la socialización de las sociedades industriales es sustituido por el desempleo en todos sus formatos, en algunas ciudades, la población sin empleo supera a la población con empleo, además de la informalidad del trabajo que lo hace más precario. Tenemos familias donde los hijos mantienen económicamente a los padres en vez de padres manteniendo hijos, o por el contrario, hijos viviendo de las jubilaciones de los padres. Las promesas del desarrollo de la década de los años 1950 del siglo pasado resultaron una ficción para muchas ciudades del Tercer Mundo.

La descomposición deviene en degradación como pérdida de la calidad de vida, como forma de acceso a los servicios públicos y sociales, a la escolarización y el trabajo. Los gobiernos de muchas ciudades no saben cómo lidiar con la degradación de sus poblaciones y habitantes, creando políticas públicas de corto plazo para palear la precarización de millones de individuos. Aparecen más Organizaciones No Gubernamentales y fundaciones internacionales y nacionales para la cooperación y el desarrollo comunitario. Las autoridades pagan asesores,

expertos y especialistas en pobreza, seguridad, gestión del desarrollo, derechos humanos y otros temas que reciben atención especial en las agendas políticas, pero que no se concretan en verdaderas políticas públicas de intervención social.

La degradación social se puede observar en los barrios marginados, las favelas, pueblos jóvenes, cinturones de pobreza, ciudades miseria, en la metáfora de la chabolización de las ciudades del sur global. Donde millones de seres humanos se disputan los recursos, servicios, beneficios y espacios de la comunidad, se pelean lo poco que se puede comerciar, creando pandillas y pequeñas mafias que se apropian del espacio público, de los parques, las calles y plazas, pidiendo derecho de piso, de peaje para los propios vecinos de los barrios. Se vulnera la ciudadanía y el espacio público, en estos tiempos; como dicen algunos vecinos de los barrios marginales de América Latina: “es mejor quedarse en casa”.

La frustración social por tanta descomposición, desempleo e inseguridad se transforma en degradación de la vida urbana. Pocos ganan ante semejante descomposición de las viejas formas de relacionarse y construir ciudadanía a través de la participación en la comunidad y el barrio. Las familias de clase media ven amenazados una serie de privilegios que les permitía una vida sin mayores problemas, se tenía acceso a la educación superior, a trabajos de largo plazo con jubilación y pensión, a la industria del entretenimiento y espacios públicos de calidad, además de barrios que gozaron de cierto nivel de seguridad pública. Hoy día, las clases medias son las primeras en resentir los recortes del gasto público, la pérdida de espacios en las universidades, la sanidad y la vivienda. Todo se descompone, metáfora perfecta para leer el mundo moderno, las sociedades contemporáneas y sus ciudades llenas de ciudadanos empobrecidos y marginados, donde <<la política del abandono>> se impone como la política pública en los asuntos públicos de las ciudades.

Por otro lado, las consecuencias de la descomposición y degradación de lo social impactan de manera negativa en las llamadas clases peligrosas. Los sectores de bajos ingresos, sin acceso a los servicios públicos, la educación y la vivienda, con empleos precarizados muchas veces en la informalidad, son los que sufren los resultados perversos de las malas administraciones de los gobiernos locales, de los ineficientes gobiernos provinciales, departamentales o estatales

(según sea el caso) y de las fallidas tomas de decisión de las políticas en los gobiernos centrales. El llamado combate a la pobreza, termina siendo un combate contra los pobres. La salida del laberinto de la pobreza se hace estructuralmente imposible, el ascenso social y la movilidad de clase se convierten en ficción, en la historia novelada de la degradación y la pobreza.

“Hoy hay más pobres, los pobres son más pobres y más diversos. Sin embargo, lo que más llama la atención es el proceso de diferenciación y, sobre todo, la separación de la pobreza respecto a la riqueza, al extremo que los ricos y los pobres no sólo se distanciaron económicamente sino que ahora no tienen un espacio de encuentro. En otras palabras, el fenómeno del incremento de la pobreza se añadió el de la diferenciación” (Carrión: 2010; 355).

Los estudios de los académicos e intelectuales, además de los grandes centros de investigación que fabrican estadísticas sobre la pobreza y la desigualdad social evidencian la rápida pérdida de calidad de vida y acceso a los derechos sociales. El Estado como entidad, como cuerpo político por excelencia, como aparato benefactor está descompuesto. Este es un indicador del desgaste de las instituciones políticas y sociales que se encargaban de moldear la sociedad. Ahora, el Estado es desplazado por el mercado, sus lógicas e intereses, es decir, la política y la sociedad son debilitados por una economía internacional de mercado que privilegia el consumo y las ganancias a corto plazo.

La economía de la pobreza

Hay otro efecto que tal vez tenga consecuencias más profundas: la anormalidad del fenómeno de la marginalidad “normaliza” el problema de la pobreza. A la clase marginada se la sitúa fuera de las fronteras aceptadas de la sociedad: pero esta clase, recordemos, es solo una fracción de los oficialmente pobre (Bauman: 2005).

En los lugares centrales de la ciudad, donde los pobres pueden residir sólo si logran incrementar el uso del espacio mediante el aumento de la densidad y el hacinamiento; esto es, bajo la modalidad del tugurio, que no es otra cosa que una estrategia de supervivencia de la población de bajos recursos económicos para residir en zonas de alta renta pagando entre muchos esta localización; es decir, una lógica económica donde muchos pocos hacen un mucho. La tugurización, a pesar de la baja calidad de vida que encierra, es un mecanismo de integración de los pobres a la ciudad, justo en un lugar de alto contenido simbólico, como lo es la centralidad (Carrión: 2010).

Desde hace décadas, es común observar en las centralidades urbanas de los ricos y, en las esquinas de los grandes cruceros de las ciudades latinoamericanas a cientos de jóvenes, adultos mayores y en algunos casos indígenas, pidiendo limosna a los automovilistas mientras hacen su alto en los semáforos. Como lo escribe Armando Silva en su libro *Atmósferas ciudadanas. Graffiti, arte público, nichos estéticos*, los lugares favoritos para los indigentes y pobres urbanos son las centralidades urbanas:

“Los sitios privilegiados en la ciudad física son aquellos de amplia circulación, como avenidas y calles, aun y cuando el peligro de ser descubiertos por cualquier vigilancia, hace que esos lugares de alta congestión sean generalmente escogidos” (Silva: 2013).

Actualmente el trabajo informal limpiando parabrisas a los automotores o

haciendo malabares, o simplemente vendiendo cualquier producto o pidiendo ayuda económica es parte de la vida diaria de las ciudades y centros urbanos, es una representación de la <<economía de la pobreza>> de nuestros tiempos de mal-estar. Si bien, la indigencia y los pobres urbanos no es nada nuevo, encontramos en el mundo contemporáneo un recrudecimiento de la pobreza urbana y de las formas de subsistencia por parte de la población marginada social y económicamente.

Anteriormente, durante el auge de los Estados benefactores en el Primer Mundo o de los Estados asistencialistas en el Tercero, se preocupaban por contener la pobreza dentro de los mínimos necesarios. El control sobre las poblaciones siempre ha sido una necesidad de primer orden de los gobiernos, las autoridades más que acabar con la pobreza, buscaban controlarla. Se creaban leyes, ordenanzas públicas y se gestionaba la pobreza para hacerla llevadera y manejable a nivel estatal. La diferencia de la pobreza en términos contemporáneos radica en su acelerado crecimiento estadístico y en la caída de la calidad de vida de los habitantes a niveles de precarización que se creían superados por la modernidad y las democracias representativas.

La asistencia gubernamental ya no es suficiente en los casos del sur global, la función del Estado como contenedor social ha dejado de ser funcional. La pobreza se ha desbordado al grado de que es difícil medirla de manera objetiva, se crean indicadores para su estudio, se tipifica y fragmenta en tipos y subtipos de pobreza. En los Organismos Internacionales como la *Food and Agriculture Organization* (FAO) o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR o UNHCR en sus siglas en inglés) inventan mecanismos para palear la pobreza estructural de decenas de países en África, Asia y América Latina. La fragmentación de la pobreza, según ellos, permite un mejor análisis y ubicación de la pobreza más urgente a intervenir como población objetivo de programas y políticas públicas.

A lo que nos referimos en este ensayo, es las economías que se generan entre las poblaciones que viven de manera cotidiana algún tipo de pobreza. La informalidad es el rasgo característico de estas <<economías de subsistencia>>, que resuelven al corto plazo las necesidades inmediatas de millones de familia que subsisten gracias a prácticas ilegales de comercio y consumo. Pero que alter-

nativas tienen ante los abandonos de sus autoridades y gobiernos. Estas familias no gozan de ningún tipo de prestación, fondo de ahorro o retiro que garantice su futuro al mediano plazo, su acceso a la salud está estructurado de acuerdo a sus posibilidades económicas, acuden a los pequeños consultorios establecidos en las barriadas o clínicas de mala calidad y servicio. Los medicamentos son escasos y encarecen aún más su precaria vida. Existen muchos casos documentados donde infantes y adultos mayores fallecen de enfermedades totalmente tratables y curables, pero que han sido mal cuidadas o diagnosticadas. En una reciente publicación llamada *Comunidades y ciudades, Constituciones y solidaridades*, el profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, Dr. Antonio Colomer nos dice lo siguiente:

“Los proyectos de transformación de la realidad latinoamericana no pueden olvidar que nos encontramos en medio de sociedades profundamente desiguales y en las que esa desigualdad se ha agudizado en los últimos años. ¿Cómo tratar de reformas institucionales o de propuestas de participación ciudadana e ignorar que más del 60% de la población activa de América Latina se encuentra en la economía informal o sumergida?” (Colomer: 2015, 38).

Esta economía de la pobreza provoca en los integrantes de millones de familias una baja escolarización y acceso a los espacios públicos de calidad. La pobreza se hace estructural y estructurante para los individuos que la padecen, un laberinto que dificulta su desarrollo integral como lo proponen los Derechos Humanos. Individuos y familias enteras desestructuradas por la pobreza, la desintegración familiar a causa de la violencia urbana, la migración internacional, los problemas de drogadicción y alcoholismo son parte de las imágenes en las periferias de las ciudades. Solo unos cuantos logran romper el cerco de la pobreza y escapar a ella. La degradación social aparece como una de las primeras consecuencias de tanta marginación.

“Las prácticas predatorias que golpean especialmente a los más pobres, los más vulnerables y los menos privilegiados son incontables, cualquier pequeña factura sin pagar (una licencia o una factura del agua, por ejemplo) puede convertirse en un pretexto para un embargo preventivo sobre el que el propietario de la vivienda

permanece misteriosa (e ilegalmente) desinformado hasta después de que un abogado se ha hecho cargo de él de forma que la factura original por, digamos, 100 dólares, requiere un pago de 1,500 dólares para saldarla. Para la mayoría de los pobres, eso suele significar la pérdida de la propiedad de su domicilio” (Harvey: 2013; 93).

Entonces, como lo cita Harvey, la marginación y exclusión social genera otro problema de gran calado: la desigualdad social. La desigualdad social, al igual que la pobreza no es algo nuevo, pero conocemos que nunca antes la humanidad había experimentado una brecha social tan amplia entre los que no tienen nada y los que tienen todo. La diferencia y distanciamiento social en las ciudades es enorme, la clase social vuelve a ser una categoría central de las sociedades contemporáneas, regresa renovada y con una vigencia descomunal. Curiosamente, ante la disolución de lo social, reaparecen las diferencias de clase marcadas por el consumo ostentoso y la marca. Zygmunt Bauman retomando a Branko Milanović nos comenta lo siguiente en su libro *Daños colaterales. Desigualdades sociales en la era global*:

“La desigualdad social entre los individuos del mundo es abrumadora, dice Branko Milanović, el economista más destacado del departamento de investigaciones del Banco Mundial. A comienzos del siglo XXI, el 5% más rico recibe un tercio del ingreso global total, exactamente igual que el 80% más pobre. Mientras que varios países pobres se están poniendo a la altura del mundo rico, las diferencias entre los individuos más ricos y los más pobres son enormes y tienden a aumentar en todo el globo” (Bauman: 2011; 71).

Por ello, la desigualdad social es el síntoma de la crisis del Estado social en el Primer Mundo y de los asistencialistas en el Tercero. La inclusión social es ahora gestionada por el mercado y no por los gobiernos de las ciudades. Nuevas lógicas de inclusión son incorporadas a los habitantes, la habilitación de los servicios públicos son manejados por empresas privadas y el gobierno se desentiende del acceso como un derecho ciudadano. Se privatizan el agua, el gas, la gasolina y la electricidad dejando en manos del mercado la vida de los ciudadanos. Los gobiernos locales concesionan los servicios de limpieza de la ciudad a particulares,

al igual que la vigilancia de algunos espacios públicos que ponen cobro para su acceso. Los resultados son desastrosos para la población más pobre y los aleja de los espacios culturales y esparcimiento.

La desigualdad provoca frustración social en muchos que ven minadas sus vidas y confeccionadas por el mercado y el consumo de productos inaccesibles, que tienen una corta durabilidad debido a su mala calidad. La piratería y la informalidad inundan los mercadillos y mercados informales improvisados en las aceras de las banquetas o los estacionamientos públicos o los parques. La gente vende y consume de segundo uso, recicla aparatos y objetos, se las arreglan con lo que hay para subsistir. El marco social de convivencia se desvanece, aparecen conflictos vecinales, entre barrios e incluso ciudades que se reprochan los males de la pobreza, se culpan de la delincuencia, la inseguridad y la violencia.

El reciente punto de vista de Bauman que se deja ver en una publicación llamada “¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos?”: la respuesta es obvia, pero el autor lo sustenta de la siguiente manera:

“Todos los estudios coinciden en al menos otro punto: en casi todas partes del mundo la desigualdad está creciendo rápidamente, y esto significa que los ricos, y especialmente los muy ricos, son cada vez más ricos, mientras que los pobres, y especialmente los muy pobres, son cada vez más pobres (en su mayor parte en términos relativos, pero, en cada vez un mayor número de casos, en términos absolutos). Además los ricos se están enriqueciendo sólo porque son ricos. Los pobres se empobrecen sólo porque son pobres. Hoy en día, la desigualdad se agrava siguiendo su propia lógica y su propio ritmo” (Bauman: 2014; 22).

La desigualdad social es parte de la desintegración y descomposición social. Oportunistas de ocasión ofrecen soluciones a corto plazo, por lo general son políticos locales que lucran con la pobreza prometiendo la llegada de la modernidad y el progreso. Nunca regresan. De ello nace la desconfianza ciudadana y el descrédito de las instituciones políticas, los partidos políticos y los sindicatos se devalúan como intermediarios y gestores sociales, la desconfianza social hace mella en los viejos militantes y no logra convencer a los nuevos trabajadores (cuando los hay). Los pobres urbanos se convierten en parte de los paisajes urbanos de ciudades contemporáneas del norte y del sur, en los Estados Unidos es

común mirar a veteranos de guerra pidiendo ayuda económica, desempleados y desamparados por el Estado, muchos de ellos y ellas enfermos ya sea mental o físicamente mostrando las secuelas de las guerras.

Muchos de estos ex combatientes se suicidan o cometen actos de violencia contra la población civil denunciando el abandono gubernamental, se les puede encontrar a las afueras de los centros comerciales, en los gigantescos Malls, comiendo en los *McDonalls*, *Burger King* o cualquier establecimiento de comida rápida viviendo de la limosna de los transeúntes. También se les puede hallar en las principales calles y plazas de las ciudades durmiendo y recogiendo comida de los contenedores. Estos indigentes son lo que la sociología norteamericana acuñó como <<*underclass*¹>>, una parte de la población que de manera estructural está fuera del sistema social y económico, aquellos que no se pueden incorporar de manera funcional a la sociedad, sin casa (*homeless*) y sin trabajo (*workless*). Lo que parte de la sociología llamó, clase marginada.

Existen muchos ejemplos de la economía de la pobreza, de la exclusión y la desigualdad social. Las estadísticas de los países del Tercer Mundo son tajantes y poco halagadoras, cada día habitantes de las ciudades de todo el mundo se incorporan a las filas de la pobreza. La sociedad como espacio de convivencia y de vida se hace conflictiva, desaparecen los rituales como el saludo diario, la solidaridad y confianza vecinal. El individualismo es la forma de salvar lo poco que queda, pero sabemos que no es así, existen extraordinarios ejemplos de autogestión y organización comunitaria que merman la pobreza y facilitan la vida cotidiana. En Valencia, España, desde hace años, académicos se encargan de fomentar estas formas de autogestión comunitaria. Tenemos como ejemplo al entusiasta Dr. Antonio Colomer Viadel, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia que dirige el Instituto Intercultural para la Autogestión y la Acción Comunal y que en la presentación de su Revista Iberoamericana de Autogestión y Acción Comunal nos habla de buenas experiencias que guardan la esperanza de mejores tiempos:

1 “La expresión “clase marginada” [*underclass*] fue utilizada por primera vez por Gunnar Myrdal, en 1963, para señalar los peligros de la desindustrialización que —de acuerdo con los temores de este autor— llevaría, probablemente, a que grandes sectores de la población quedarán desempleados y sin posibilidad alguna de reubicarse en el mercado de trabajo” (Bauman: 2005; 106).

“Lo cierto es que con menos poder y aparatos de control el universo de los libres y los justos es también abundante. Los voluntarios en la lucha contra la pobreza, contra el hambre, contra la falta de agua y la carencia de la sanidad, contra los gobiernos opresores que tiranizan, de formas más o menos sutil, a sus propios ciudadanos, se extiende por todo el mundo. Al mismo tiempo aquellos que se organizan para a través del apoyo mutuo y la cooperación poner en marcha proyectos de convivencia, ya sea productiva, educativa, cultural e incluso de simple comunicación interpersonal. Tantas experiencias comunitarias, cooperativas, mutuales y de múltiples fórmulas de auto organización libre y solidaria se crean y se reproducen y, a pesar de los fracasos ocasionales, no cesan de crecer” (Colomer: 2014; 11 y 12)

Las experiencias comunitarias crecen de manera esperanzadoras en muchas ciudades del sur de Europa y se replican en otros lugares del sur global, recreándose y adaptándose a los contextos e historias locales. Colectivos, Centros Comunitarios, Asociaciones Civiles y otras formas de organización social reconstruyen los barrios, recuperan experiencias y costumbres que tejen lo social e inmunizan a la población del individualismo, además de mandar mensajes alternativos de gestión al mercado y la esfera privada. Es reivindicar el vivir juntos. Protestar contra los intentos del mercado y el capitalismo financiero por romper las lógicas comunitarias y dejar a solas al individuo frente a los bancos, el mercado y las hipotecarias.

Sin embargo, parecería ser que por ahora, la mercadotecnia del consumo desmorona los esfuerzos de estos colectivos y comunitarismos. El aplastante discurso del *consumo, luego existo*, se hace evidente en millones de jóvenes y una clase media que abarrota los supermercados y *Malls* del momento. Las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento facilitan el individualismo de la sociedad, apartan a los niños del juego, del barrio y la familia, entrenándolos como consumidores. Se simulan en videojuegos y dispositivos electrónicos nuevas formas de vida individualizada donde se puede vivir solo, de manera asocial, sin recurrir al otro para sentirse acompañado, se programan las vidas de los trabajadores, se digitaliza la vida cotidiana de las personas usando la biometría y las tecnologías digitales. La clase media está siendo inmunizada frente a la pobreza y la precarización, siendo alejada de los barrios pobres por parte de los

reordenamientos urbanos, porque es mejor que no los vean, la invisibilización de la pobreza es parte de la agenda de los gobiernos locales.

“La lógica de la sociedad de consumo es formar a sus pobres como consumidores frustrados. El estilo de vida de los consumidores es cada vez más inalcanzable para los sectores de bajos ingresos, históricamente definidos por una capacidad fija de compra que les permite asegurar su subsistencia o cubrir sus necesidades básicas. Y, sin embargo, la sociedad de consumo educa a sus miembros, precisamente, para vivir esa incapacidad de acceder a los estilos de vida ideales como la más dolorosa de sus privaciones” (Bauman: 2005; 114).

En realidad nadie quiere mirar a donde irá a parar cuando la pobreza les alcance, a los riesgos sociales y económicos a los que se estará expuesto si se es un consumidor fallido y desplazado. Pero es más fácil caer en la pobreza que convertirse en clase media, es decir, todo está estructurado para no poder abandonar la pobreza. La descomposición es mucha para poder ocultarla en las periferias de la ciudad, la movilidad de los pobres dentro de la ciudad buscando los mejores cruceros para vender o comercializar sus productos los hace observables como un testigo arqueológico, para recordar que existen y son parte de la ciudad.

El estrés, los problemas estomacales, los dolores de cabeza son comunes en las familias de escasos recursos, la dificultad de incorporar a los hijos a la educación básica, el pago o contratación de los servicios básicos, la salud y la alimentación son un tema cotidiano. Miles de niños y niñas desertan de la escuela pública por no tener para el pago de los uniformes y útiles escolares, o porque deben incorporarse al trabajo doméstico-informal o asalariado de manera temprana para completar el gasto de la casa, la compra de la despensa y otras deudas que se deben pagar para evitar los embargos y decomisos de los bancos. Por ello, aparecen en cada país o ciudades, *tiendas departamentales* que ofrecen productos electrodomésticos, ropa, calzado, juguetes, herramientas y una serie de objetos para mitigar la pobreza. Otorgan créditos para las familias de bajos recursos, se adaptan a los bajos salarios de obreros y empleados informales ofreciendo bajos intereses o tasas fijas. Aparece así, un mercado de low cost para los sectores más pobres de la sociedad.

Lo mismo sucede con los bancos, se promueven créditos hipotecarios de

vivienda de interés social. Aparecen sucursales bancarias poco confiables y sin una historia crediticia, que se afincan a las afueras de los barrios y colonias populares atrayendo clientes y otorgando plásticos y tarjetas de crédito. Todo un sistema de crédito para los más pobres que no pueden resistir semejante seducción. Los electrodomésticos se convierten en los preferidos de las familias, entre ellos los televisores de pantalla plana, los hornos de microondas, los aparatos de telefonía celular, tablets y otros, que endeudan a los más pobres, pero les permiten tener acceso a los artículos de “lujo” que en apariencia los introducen a otro nivel de vida. Más tarde, los embargos por la falta de pago no se hacen esperar. No muchos logran cumplir de manera disciplinada con los abonos y mensualidades, eso sí, cubriendo sus respectivos intereses.

Las falacias del bienestar familiar operan bajo la lógica del consumo y el mercado, no bajo los derechos sociales, políticos y civiles. El mercado distrae al ciudadano acercándolo al consumo, motivándolo a la compra de una serie de bienes y servicios de corta duración, de baja calidad y que en vez de resolver una carencia, crea nuevas necesidades. El <<estilo del mundo>> ha entrado en una fase de superficialidad de la vida y banalidad de la felicidad, como lo dice Lipovetsky, la felicidad se ha hecho paradójica. Por todo esto, es difícil aun siendo pobre, escapar al consumo como lógica cultural del capitalismo tardío. Al capitalismo de ficción que denuncia en sus ensayos Vicente Verdú. La economía de la pobreza, con sus elementos de informalización, precarización, consumo de *low cost* e inseguridad laboral y social, cumple con la función vital de la subsistencia de millones de seres humanos.

Precarización como forma de vida urbana

Consecuencia: cuantas más relaciones laborales se <<desregulan>> y <<flexibilizan>> más rápidamente se transforma la sociedad laboral en una sociedad del riesgo... El paro y la desocupación, o, dicho de manera más moderna (y eufemística), el trabajo variado y precario fueron la regla general a lo largo de los siglos (Beck: 2000).

El llamado <<precariado>> ha desplazado al <<proletariado>> tradicional (Harvey: 2012).

“Hoy, como nunca antes, la pobreza en América Latina tiene un vínculo muy estrecho con la situación laboral. Asistimos a un proceso de urbanización de la pobreza, pero además a una precarización del empleo que se expresa en la informalidad y en agravamiento de las tasas de desempleo. Actualmente, hay 19 millones de trabajadores urbanos desocupados” (Carrión: 2010; 363). La precarización en términos genéricos que incluye precarización social y económica, viene de la mano de la precarización del empleo y el trabajo como componente central de las vidas cotidianas de millones de ciudadanos latinoamericanos.

Al parecer, la precarización es una de las características de los trabajadores industriales, empleados de gobierno, funcionarios públicos de los niveles subalternos y todo tipo de trabajadores con bajos ingresos en la ciudad (albañiles, empleados de tiendas departamentales, intendentes, guardias de seguridad, trabajadoras domésticas, jardineros, etc.), que ven medradas sus economías debido a la falta de salarios y prestaciones que estén por encima del costo de vida, los salarios mínimos no se incrementan en relación a la canasta básica. El aumento en el precio de los productos básicos, la gasolina, la vivienda, los automóviles, las medicinas y todo lo que tiene que ver con una vida digna encarece frente a los salarios precarios de millones de trabajadores. Aunado a todo esto, muchos gobiernos estatales recortan el gasto público y aumentan el iva a muchos de los productos de primera necesidad, además de gravar las prestaciones de los trabajadores haciendo que su salario real caiga aún más respecto al costo de vida.

De pronto, el desahucio y el desamparo aparecen como el síntoma del sector social más desprotegido. Las tramas de la precarización se incorporan a millones de familias y vecinos de los barrios populares, en las periferias de las ciudades y centro urbanos. Se deshabilitan así, las capacidades de desarrollo personal y colectivo de las comunidades y barrios. La precarización como degradación y descomposición genera estrés y confusión en los trabajadores asalariados e informales de bajos ingresos. La precarización se está convirtiendo en una forma de vida urbana caracterizada por una serie de malestares que no abonan al sentido de comunidad y de ciudadanía, nadie está conforme con lo que gana y como vive.

Algunos trabajadores que han quedado deshabilitados por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, paro técnico o desempleo estructural, se encuentran en el desamparo gubernamental, sin servicio de desempleo ni salud. La cobertura de las autoridades estatales y locales no siempre es la mejor ni la más barata, la falta de atención a problemas de salud simples y crónicos genera la pérdida de calidad de vida y un gasto para las economías domésticas de familias que no cuentan con atención gubernamental. Las mujeres, niños y adultos mayores, se convierten en los grupos más vulnerables y propensos al abandono social y sus síntomas como la violencia intrafamiliar y social. La pérdida de calidad de vida de amplios sectores sociales los margina del resto de la población y los excluye socialmente de otras formas de participación ciudadana. En sus estudios sobre el trabajo en la era de la globalización, que aparecen sistematizados en el libro: *Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era de la globalización*, el sociólogo alemán Ulrich Beck, nos refiere que efectivamente, las mujeres son las que llevan la peor de las partes en este proceso de precariedad laboral.

“Los trabajos basura son, generalmente, trabajos realizados por mujeres (en Alemania, más del 80%) en las situaciones más diversas: madres soleteras con hijos que sacar adelante y cuya vida gira en torno al cuidado de éstos, o madres casadas a las que se les cae la casa encima y buscan sencillamente salir un poco y ser socialmente reconocidas o quieren comprarse algo pero se gastan lo que les sobra de la paga en las imprescindibles guarderías” (Beck: 2000; 98).

De esta manera, el acceso a la alimentación y los servicios más básicos como el agua, el drenaje, la energía eléctrica y en muchos países el gas, representa la mala gestión de las autoridades locales y el desinterés de las mismas por atender las necesidades de sus ciudadanos. Los costos de los servicios, aunado al burocratismo de las autoridades encargadas de gestionar los servicios de la ciudad frena la incorporación de amplias zonas urbanas a la ciudad y su centralidad. La pobreza se convierte en parte del paisaje urbano y alimenta la corrupción y la impunidad. Entonces, la precariedad no solo es laboral, sino material y social, incluso urbana. Se precariza su economía, y a partir de ello, la precarización se extiende como petróleo en el agua contaminando la totalidad de la vida social de quienes la padecen.

El acaparamiento de los productos por parte de los grandes corporativos y comercializadoras de alimentos genera encarecimiento de los productos de la canasta básica. Las viejas economías de barrio de las tienditas y abarrotes, carnicerías, panaderías, fondas y cafeterías, sucumben frente a la competencia desleal de las grandes compañías y comercializadoras que terminan por quedarse con todo el mercado. La desaparición de estos espacios de intercambio social y convivencia se desmantelan gradualmente, los pequeños propietarios de este tipo de negocios se subemplean y subcontratan en los grandes almacenes como trabajadores con salarios mínimos y ritmos de trabajo muy distintos a la vida y socialización de los barrios.

La precarización como forma y estilo de vida funciona como un distanciador y diferenciador social entre la población. La ciudad se fracciona y segmenta por estratos sociales e ingresos, incluso en muchas ciudades de América Latina, la vida se mide por el número de estrato al que se pertenece. Esa pertenencia media la vida en sociedad y el acceso al bienestar, se convierte en un indicador gubernamental para la estadística oficial de gobiernos locales e instituciones del Estado. En ese sentido, la precarización de la vida no solo es una condición estructural, sino estructurante, condenando a quien la padece a la miseria y la exclusión social. Los intentos estructurales en términos de política pública por parte de algunos gobiernos fracasan frente a lo estructurante de la precarización. De nuevo Ulrich Beck, en su libro: *Un nuevo mundo feliz*, anuncia un escenario decadente respecto a la precariedad laboral y expone:

“Lo que más llama la atención del actual panorama laboral a escala mundial no es sólo el elevado índice de paro en los países europeos, el denominado milagro del empleo en EE.UU. o el paso de la sociedad del trabajo a la sociedad del saber, es decir, qué aspecto tendrán en el futuro el trabajo en el ámbito de la información. Es, más bien, el gran parecido que se advierte en la evolución del trabajo en los denominados primero y tercer mundo. Estamos asistiendo a la irrupción de lo precario, discontinuo, impreciso e informal en ese fortín que es la sociedad del pleno empleo en Occidente. Con otras palabras: la multiplicidad, complejidad e inseguridad en el trabajo, así como el modelo de vida del sur en general, se están extendiendo a los centros neurálgicos del mundo occidental” (Beck: 2000; 9).

Así, el peligro de la naturalización de la precarización como estilo de vida contemporáneo en muchas de las ciudades latinoamericanas pone en riesgo los retos del milenio de las Naciones Unidas. De ambas partes, la población y las autoridades, se asume la pérdida de calidad de vida como parte de un proceso sin retorno, sin solución a corto plazo. Los niños y jóvenes crecen en medio de todo tipo de carencias y estructuran sus vidas a partir de éstas. Las aceptan como parte de su cotidianeidad y forma de socialización en la familia, la escuela y el trabajo. Cada vez, es más difícil escapar de la espiral de la precarización y la pobreza, la indiferencia gubernamental explota la pobreza de manera electoral, al igual que los partidos políticos y en algunas ocasiones los Organismos No Gubernamentales que financian sus proyectos gracias a la existencia de esta población marginada.

Las dadas gubernamentales y ocurrencias de escritorio intentan pallear la mala alimentación, desescolarización y desempleo de cientos de miles de familias en los cinturones de pobreza. Todo un sistema de control de la pobreza es instrumentado por servidores públicos y autoridades, se otorgan becas alimentarias, materiales de autoconstrucción, pequeños créditos para las microempresas, becas escolares y un sinnúmero de repartos para cooptar las preferencias electorales de los más pobres en tiempos de elección. Se promete de todo, llevar los servicios públicos de agua, electricidad y gas a las colonias que no lo tienen, centros de atención comunitaria, seguridad pública, escuelas y una larga lista de promesas que una vez en el poder no se cumplen o se cumplen muy poco.

La precarización genera desigualdad social entre la población y crea un

déficit de ciudadanía. La justicia no es igual para todos, existen quienes no pueden pagarla. Se paga mucho por un abogado o un médico, por una atención psicológica o una visita al dentista. La descomposición social y degradación urbana es evidente para quienes no tienen para pagar una mejor forma de vida, las comidas fuera de casa, el cine y las compras de momento (San Valentín, Navidad, Cumpleaños, etc.) se racionalizan según la capacidad de compra. Por otro lado, el despilfarro de las autoridades, el derroche gubernamental y el dispendio de la clase política en sueldos y prestaciones, dietas y gastos de representación crean una brecha social insalvable. Es decir, aparecen gobiernos ricos con pueblos pobres. Los gobiernos se complacen con anunciar políticas urbanas contra la exclusión, es decir “políticas de inclusión” que abarcan la cultura, la seguridad ciudadana, la educación y la cuestión socioeconómica y el urbanismo. En materia urbana el profesor Jordi Borja sugiere algunos pasos para desactivar la exclusión social:

“Desenclavar los guetos, legalizar y regenerar el hábitat marginal, hacer llegar los servicios públicos básicos (red viaria, transportes, agua y saneamiento, etc.) a las áreas <<excluidas>>, promover la cooperación de los habitantes en la cualificación de los espacios públicos y la mejora de la vivienda, introducir la mixtura social, localizar los equipamientos y elementos monumentales que proporcionen visibilidad y dignidad a la zona” (Borja: 2003; 217).

En fin, la precarización de millones de seres humanos en las ciudades latinoamericanas y en general del sur global, esperan ansiosos la llegada del progreso y la modernidad. De estas intervenciones urbanas que mientras llegan, el desarrollo sustentable debe lidiar con la precarización sustentable, con los malos gobiernos, las pésimas gestiones urbanas y la urbanización de la pobreza como anuncio de la condición estructurante de la precarización como forma de vida. Las clases medias luchan por no caer a los estratos más bajos, mantener los mejores empleos y vivir en las zonas urbanas de mayor infraestructura y equipamiento urbano. Los sectores medios de la población saben que es más fácil caer en la pobreza que ascender de nivel de vida, por ello busca distanciarse y diferenciarse socialmente de los más pobres con un consumo y prácticas culturales que los alejen de la pobreza.

La urbanización de la pobreza

La urbanización del Tercer Mundo continuó su desenfundada carrera (3,8 por 100 anual desde 1960 a 1993) por encima de las hambrunas de finales de la década de 1980 y principios de la siguiente, por encima de la caída de los salarios reales y por encima del disparatado crecimiento del empleo urbano. Esta inalterable explosión urbana sorprendió a la mayoría de los expertos, ya que contradecía los modelos económicos ortodoxos que mantenían que la recesión urbana traería como consecuencia la relentización o incluso la reversión del proceso migratorio (Davis, 2007).

En América Latina la pobreza se ha convertido en una problemática fundamentalmente urbana. En la actualidad, el 37 por ciento de los habitantes urbanos es pobre y el 12 por ciento, indigente. A fines de los años noventa, el 61.7 por ciento de los pobres vivía en zonas urbanas, cuando en 1970 era el 36.9 por ciento, lo cual significa que ha habido un proceso acelerado de urbanización de la pobreza que lleva a que en la actualidad haya más de 130 millones de pobres viviendo en nuestras ciudades (Carrión: 2010).

Estamos ante un milenio urbano, según los informes internacionales sobre *El estado de la población mundial 2007. Liberar el potencial del crecimiento urbano*, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (PNUD por sus siglas en inglés), por primera vez, la humanidad ha entrado en un mundo mayormente urbano. Pero al igual que el mundo se urbaniza, también lo hace la pobreza. Es decir, uno de los riesgos planetarios del siglo XXI será el de la urbanización de la pobreza, misma urbanización que no es exclusiva del Tercer Mundo, la pobreza ha salido del sur global para migrar al Norte Global. Aun y cuando la pobreza urbana no es un fenómeno nuevo, sino que ha acompañado a la civilización desde las primeras formas de urbanización en el Mundo Antiguo, la diferencia radica en que la urbanización de la pobreza como fenómeno contemporáneo no incluye solo personas, sino la ciudad en sí misma como forma urbana.

Pensamos que la urbanización de la pobreza será el gran problema del siglo XXI, por ello urbanistas, sociólogos urbanos, arquitectos, planeadores, antropólogos y otros especialistas, están observando con atención este inicio de siglo para conocer cuáles pueden ser los impactos y consecuencias mundiales de dicha urbanización. Hasta ahora se conoce de manera relativa el problema, en realidad las Ciencias Sociales y las Humanidades no han creado las categorías y nociones necesarias para realizar una lectura acertada de semejante fenómeno. Conocemos de esfuerzos recientes como el del urbanista norteamericano Mike Davis y su publicación de *Planeta de ciudades miseria*, donde a partir del concepto de hiperdegradación intenta acercarnos a esta urbanización de la pobreza, aunque el propio autor no la enuncia como tal.

Partimos de la premisa —al igual que Davis— de que la degradación y la miseria son elementos que nos ayudan a pensar el momento urbano por el que atraviesan muchas de las ciudades del sistema-mundo. Sobre todo aquellas ubicadas geopolíticamente al sur del hemisferio. Pero a la degradación, le podemos sumar la decadencia y descomposición como categorías que nos permiten un mejor acercamiento al análisis de las ciudades contemporáneas. Muchas de las viejas formas de vida urbana, y convivencia se han deteriorado, entran en desuso o simplemente ya no sirven para negociar y convivir. Una sociedad individualizada acelera la descomposición social y medra la solidaridad comunitaria.

Algunos urbanistas y sociólogos aseguran que las sociedades contemporáneas se están enfrentando a una serie de malestares que se creían controlados por la modernidad del siglo XX, sabemos de los esfuerzos por parte de los Organismos Internacionales, gobiernos e instituciones de estudio que se inquietaban con las formas renovadas que la pobreza, la marginación y precarización estaban cobrando desde las últimas décadas del siglo XX, pero los especialistas observaron cómo estos fenómenos y problemáticas sociales se agudizaban en el transcurso de la primera década del siglo XXI.

La pobreza cobraba fuerza en el Tercer Mundo, pero incluso se manifestaba en las periferias de las grandes ciudades europeas y de los Estados Unidos. Ya no era un asunto de latinoamericanos, africanos o asiáticos del sur global, la pobreza se reflejaba en lo que poco después llamaron categóricamente: pobreza urbana. Hubiera sido complaciente que la pobreza se quedara solo con

un fragmento de la población de las ciudades, no sucedió así, la pobreza se ha ido urbanizando como parte de un proceso que algunos llaman: el gran desastre económico del siglo XXI. En muchas ciudades del mundo, la pobreza se urbaniza ampliando su mancha y paisaje dentro de las ciudades. Otra forma de ubicar esta urbanización de la pobreza, es la llamada chabolización, donde la pobreza aparece como la regla y no la excepción.

“Lo que se advierte actualmente es un marcado incremento de la pobreza urbana, exacerbado por la creciente desigualdad social; es decir, se han ampliado las distancias sociales entre unas mayorías que deben aceptar niveles de vida mínimos, y los pequeños grupos de clase alta que viven en la opulencia. Esto se expresa claramente en la forma de ocupación del territorio, que ha llevado a caracterizar las ciudades actuales como divididas, fragmentadas o segmentadas, y que da origen a intensos procesos de segregación urbana (Ziccardi; 2008: 12)”.

Entendemos entonces por urbanización de la pobreza; “al proceso abierto, donde la pobreza se va urbanizando como una nueva forma de vida urbana que tiende a su generalización y que en muchos de los casos, es vista como un proceso inevitable. Dadas las condiciones actuales del sistema-mundo en términos de distribución de la riqueza, acaparamiento y explotación de los recursos naturales y capital humano; la urbanización de la pobreza ha sido posibilitada por la existencia de un mundo urbano que ha desplazado por primera vez al campo, como el espacio donde habitan los seres humanos” (Herrera: 204).

En este ensayo, se usará de manera indistinta chabolización y urbanización de la pobreza como parte de un sinónimo que forma parte de las realidades del Tercer Mundo y algunas de sus grandes ciudades. En este momento, mentes brillantes de todo el mundo, analizan y reflexionan en torno a las consecuencias de este nuevo fenómeno que como ya se mencionó, será considerado como el gran desastre económico del siglo XXI. Es uno de los grandes desafíos para los responsables institucionales de los programas mundiales para el combate a la pobreza. En este nuevo fenómeno social intervienen programas como Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (HABITAT-ONU) que tiene como funciones prioritarias el promover ciudades sociales y medioambientalmente sostenibles, prioridades que demostró en su famoso informe *The Challenge of Slums* en 2003.

Por otro lado, la Food and Agriculture Organization (FAO por sus siglas en Inglés) que tiene como propósito internacional erradicar el hambre, ha tenido que evolucionar en los últimos 20 años debido a la radicalización de la pobreza urbana e incluir a la ciudad junto al campo en sus estrategias de combate a la pobreza. Conceptos recientes como soberanía y seguridad alimentaria son parte de estas nuevas necesidades planetarias.

Según un dramático informe de la Organización de Naciones Unidas, elaborado por el Fondo de Población, titulado *Estado de la población mundial 2007. Liberar el potencial del crecimiento urbano, se puede leer que en el 2008, se alcanzaría una mayoría urbana planetaria, desplazando por primera vez en la historia de la humanidad al campo como espacio donde se concentraba la población mundial. Ya hemos llegado a ese momento.*

“En 2008, el mundo alcanzará un hito invisible pero trascendental: por primera vez, más de la mitad de su población humana, 3,300 millones de personas, vivirá en zonas urbanas, se prevé que para 2030, esa cantidad habrá llegado a casi 5.000 millones. De los nuevos habitantes urbanos, muchos serán pobres. Su futuro, el futuro de las ciudades de los países en desarrollo, y el futuro de la propia humanidad, dependen en gran medida de las decisiones que se adopten de inmediato en previsión de dicho crecimiento (Informe del Estado de la Población Mundial: 2007;1).”

Según estos datos, esta mayoría urbana trae consigo nuevos peligros a la larga lista de los malestares contemporáneos, la falta de servicios en las favelas de Brasil, de regulación urbana en los pueblos jóvenes de Perú, la inseguridad urbana de las comunas de Colombia y cinturones de pobreza en México, de los asaltos y crímenes en la capital venezolana, sumada a la precarización y desempleo de los barrios de Guatemala, El Salvador y buena parte del extrarradio de la capital de Argentina llena de villas miseria, son el síntoma de una urbanización de la pobreza que debe de ser estudiada y puesta como uno de los grandes retos de un milenio inevitablemente urbano, en donde América Latina aparece como una de las regiones más urbanizadas del planeta.

Una aclaración de importancia es distinguir entre los estudios de pobreza urbana (los pobres urbanos) que se están realizando por parte del urbanismo, la

economía y la sociología urbana; y la urbanización de la pobreza como un proceso que incluye a los pobres urbanos, pero que tiene implicaciones más amplias. La pobreza urbana, de alguna manera u otra siempre ha estado ahí, desde las grandes civilizaciones egipcia, griega o romana, existe un consenso en la historia del urbanismo en que desde la aparición de las primeras ciudades antiguas hasta las contemporáneas los esclavos, siervos, proletarios siempre han sido los miserables y marginados en el espacio urbano; en la ciudad. Pero la urbanización de la pobreza la estamos ubicando y localizando temporalmente como un fenómeno de los últimos diez años del siglo XX y la primera década del siglo XXI, es decir, es un proceso nuevo donde la pobreza se urbaniza dramáticamente y se coloca como la condición central de las ciudades. Sean estas ciudades pequeñas, intermedias (medianas) o metrópolis.

El reconocido urbanista, Fernando Carrión, siguiendo a Roberts (1978), confirma que el actual proceso de urbanización de la pobreza, tiene como antecedente histórico el pasaje de lo que se reconoció como “ciudades de campesinos” a las llamadas “ciudades de pobres” de las últimas décadas a partir de los años noventa del pasado siglo XX. Como él mismo lo escribe. “Esto daría lugar a pensar que hemos pasado de las “ciudades de campesinos” [...] “a las ciudades de pobres”. Es decir, estamos asistiendo a un proceso de urbanización de la pobreza, del incremento de la exclusión social y de la precarización del empleo, expresado en la informalización y el agravamiento de las tasas de desempleo” (Carrión: 2010; 193-194).

En fin, América Latina debe de ver, observar y localizarse desde estas problemáticas como la pobreza, la precarización, la inseguridad, la inmigración, la desigualdad sin que sus gobiernos las ignoren, donde sus centros de estudio y universidades deben tratarlos como los problemas centrales de una vida democrática e incluyente. La consecuencia directa de la urbanización de la pobreza son millones de marginados, sin empleo. Precarizados, pobres urbanos que ven sus esperanzas de vida acortadas por formas de vida subalternizadas donde su existencia se reduce al ámbito productivo y ahora al consumo. Indiscutiblemente la urbanización de la pobreza representa para América Latina una lección por aprender, en un milenio urbano.

La pobreza urbana en el espacio latinoamericano contemporáneo

En este contexto, el incremento de la pobreza urbana, la desigualdad y la aparición de nuevas formas de exclusión son procesos complejos que se convierten en nuevos retos para las políticas sociales y exigen su redefinición (Ziccardi, 2008).

Son pobres pese a trabajar al límite de sus posibilidades. Son los que han dado en llamar con el nombre de *working poor*, que se han convertido en una triste caricatura del ciudadano trabajador. Son tan flexibles que casi aceptarían cualquier actividad, independientemente de su formación y sus obligaciones familiares (Beck, 2003).

El urbanista norteamericano Mike Davis, en su libro llamado *Planeta de ciudades miseria*, nos relata de manera crítica, la manera en que el planeta entero ha entrado en una degradación urbana que incluye a las ciudades y sus habitantes. No alude a la categoría de pobreza, prefiere hablar de hiperdegradación, donde el estar degradado incluye no solo a la población, sino a la ciudad en sí y con ella: la precarización, marginación y exclusión de millones de seres humanos (que bien podemos llamar no-seres) que forman las enormes capas de una nueva subclase o *underclass* que ni siquiera forma parte ya de los pobres urbanos, es una clase que está totalmente fuera del sistema de las clases sociales. Son una especie de consumidores fallidos de los que habla Zygmunt Bauman en sus textos sobre el *Trabajo, consumismo y nuevos pobres*, pero Davis los enuncia de la siguiente manera;

“Desde 1970, la mayor parte del crecimiento de la población urbana mundial se ha producido en el Tercer Mundo y ha sido absorbido por las comunidades hiperdegradadas de la periferia urbana. El desbordamiento de las ciudades ha dejado de ser un fenómeno característico de América del Norte. El crecimiento horizontal de ciudades pobres es frecuentemente tan sorprendente como el crecimiento de su población... La evolución de esta nueva pobreza urbana no ha sido, como hemos

visto, un proceso histórico lineal. La lenta suma de barrios de chabolas a los degradados barrios límites urbanos se ha visto sacudida por tormentas de pobreza y repentinas explosiones en la construcción de infraviviendas (Davis; 2007: 57 y 203)”.

Los espacios, suelos y ciudades mundiales de las sociedades contemporáneas están siendo ocupados por esta urbanización de la pobreza que incluye a los países del Tercer y Primer Mundo, el campo parece estar dentro de la ciudad, se llegó después de décadas a un empalme entre el campo y la ciudad, donde esta vieja lógica de pensar el mundo moderno debe repensarse. Es decir, pensar que la ciudad ha llegado al campo y el campo se metió dentro de la ciudad. Parece que esta urbanización de la pobreza es uno de los rasgos o elementos constitutivos de la globalización o al menos de sus consecuencias humanas.

Para el caso latinoamericano, la acelerada urbanización que vivió desde mediados del siglo pasado con tasas de urbanización del 4.6 en 1950 y que aunque para el año 2000 se habían reducido a al 2.3, dieron lugar a que los habitantes de ciudades pequeñas e intermedias (en menor medida las metrópolis) vivieran la pérdida de calidad de vida, a la vez que sus vidas se hacían precarias. Unas vidas precarias, como las llama Ulrich Beck que son acompañadas por “trabajos basura” o la informalidad de sus empleos. En uno de los estudios publicados por el urbanista Fernando Carrión en el año 2010, se menciona que esta urbanización de la pobreza forma parte de una nueva coyuntura urbana, caracterizada por la crisis urbana que vive hoy día América Latina:

“La ciudad en América Latina ha cambiado notablemente este último tiempo, al extremos de que se podría decir que estamos viviendo en otra coyuntura urbana. El patrón de urbanización el que ha entrado en un franco proceso de transformación: si desde la década de los años cuarenta la lógica de la urbanización se dirigió hacia la expansión periférica, en la actualidad lo hace hacia la ciudad existente, produciendo una mutación en la tradicional tendencia del desarrollo urbano, exógeno y centrífugo, hacia uno endógeno y centripeta, desde una perspectiva internacional” (Carrión: 2010; 190).

El viejo patrón de urbanización de expansión periférica, nos dejó en las ciu-

dades latinoamericanas, imágenes urbanas que están marcadas por contenidos de degradación y segmentación urbana, donde la exclusión social y la desigualdad, son elementos que constituyen las ciudades del presente. Las imágenes se repiten en el hemisferio conformado un imaginario urbano que uniforma la realidad de millones de habitantes expuestos a la violencia y la pobreza urbana.



Foto: Arturo Herrera,
Colonia Riveras del Bravo,
Ciudad Juárez, México

Por otro lado, la desigualdad social o brecha social es uno de los temas que se ponen en las agendas internacionales de Organismos e Instituciones; según el Atlas de la globalización de la Universidad Politécnica de Valencia, “la evolución de las desigualdades en el mundo ocupa un lugar central y controvertido en el debate sobre la globalización (Durand: 2008; 30)”. “La idea es la de entender que en un mundo cada vez más urbano, los procesos de globalización tienen tendencia a homogenizar los espacios sociales pero también a acentuar en ellos los contrastes (Durand: 2008: 19)”.

Ricos y pobres deben de convivir en un mundo más urbano que es el que pensaron los planeadores y urbanistas, la arquitectura del riesgo, de espacios lúgubres y abandonados al interior de la ciudad se impone como el espacio habitual. Es común observar (como en las fotografías 1 y 3) en las de ciudades cientos de barrios, comunas o villas de miseria con casas abandonadas, espacios deshabitados que forman parte del nuevo paisaje urbano de la ciudad. Un reciente rostro de las ciudades en América Latina es sus innumerables vendedores am-

bulantes que se abarrotan en las esquinas de las grandes avenidas o los centros históricos ofreciendo todo tipo de servicios rápidos y piratas (ilegales). Toda una industria y economía de la pobreza.



Foto: Alida Bueno,
Colonia Felipe Ángeles,
Ciudad Juárez, México

La desesperanza y el abandono en su condición más radical, parece ser uno de los rasgos característicos de la urbanización de la pobreza. El desempleo, la precarización de la vida a partir del trabajo mal pagado y sus consecuencias inmediatas como la desnutrición, el analfabetismo y la degradación en la calidad de vida son el resultado de este proceso urbano que se encuentra abierto y en aumento. El espacio contemporáneo no solo será un espacio urbano, incluye a millones de individuos que quedarán fuera de las sociedades de consumo y del acceso a las sociedades de la información y el conocimiento. La brecha digital y cognitiva se sumarán rápidamente a la brecha social que abre la urbanización de la pobreza en el sur global.

Es común encontrar nombres de ciudades, comunidades y fincas como Bonanza en Colombia, El Porvenir en el norte de México o El Progreso en el sur del mismo país, pero en ninguno de ellos, es posible encontrar lo sugerente de dichos nombres que se dan a los municipios como algo que se queda en el sueño de un mejor mundo. Por lo general, la Bonanza se convierte en precarización, el Porvenir en desesperanza y el Progreso en pobreza. La urbanización de la pobreza está cambiando la lógica en los usos del espacio público como el espacio por excelencia de las ciudades modernas y contemporáneas. Bienvenidos a las villas

de la miseria que parecen ser un síntoma de este proceso de pobreza urbanizada; donde el caso de África parece ser el más severo.

“Ciudades y villas miseria: una bomba de relojería. Sobre un fondo de desórdenes climáticos, el más rural de los continentes ([En África] más de 400 millones de personas de los 965 millones de habitantes en 2007), vive, desde los comienzos de siglo, uno de los más brutales e intensos éxodos del campo a las ciudades. Estas últimas se sitúan mayoritariamente en las costas (litoral del golfo de Guinea y del Océano Índico); los valles de los grandes ríos (Níger, Congo y Senegal); y las tierras del África occidental y austral (de Johannesburgo a Nairobi). El aumento de la población urbana desde el año 2000 es uno de los más rápidos del mundo, con una media de 4,3% al año, frente al 1,2 % en Europa. En su informe anual de 2007, la ONU-Habitat alerta a la opinión pública. En estas zonas de viviendas irregulares, dice, donde se preparan los conflictos del futuro (Atlas de Le Monde diplomatique en español; 2010:178)”.

Entonces, la cambiada fisonomía planetaria con ciudades que nacen, aparecen de la nada o, que siguen creciendo son los rasgos de una realidad urbana que es acompañada de una urbanización de la pobreza en el espacio urbano, las acciones de los gobiernos locales para frenar este proceso acelerado de pobreza, son pocas, y en muchos de los casos poco atinadas, solo se encargan de realizar una serie de intervenciones urbanas en la ciudad, sin acompañar la intervención urbana de una intervención social y comunitaria, es decir, se interviene urbanísticamente sin política social. Esta falta de acompañamiento tiene costos económicos y sociales para los presupuestos de las autoridades locales.

Es fácil observar en algunas ciudades de América Latina el nuevo equipamiento y mobiliario urbano, la infraestructura, edificios destinados a bibliotecas o centros comunitarios, abandonados en poco tiempo, además de vandalizados y usados por las bandas juveniles o ejercidos como picaderos para venta y consumo de droga, debido a que después de la intervención urbana, no se realizó una intervención social que formara en la comunidad un sentido de pertenencia hacia los espacios públicos intervenidos y donde ellos se hicieran cargo de su cuidado físico por parte de los pobladores, sin dejar en la comunidad la responsabilidad de su mantenimiento, limpieza y administración. Una responsabilidad que compete a

los gobiernos. Nuevas urbanizaciones fallidas, abandonadas, se convierten en el verdadero rostro de la ciudad contemporánea.

Véase el caso de Riveras del Bravo en el nororiente de Ciudad Juárez, en el norte de México, el caso típico de una urbanización fallida donde más del 40% de las viviendas unifamiliares han sido abandonadas o deshabitadas. Muchos de sus habitantes huyeron por la crisis de la violencia y económica que golpeó la ciudad en el año 2008, ahora golpeada por la inseguridad y violencia urbana, es un claro ejemplo de esta urbanización de la pobreza que estamos viviendo. La fotografía 3 muestra una parte de la urbanización donde prácticamente toda una cuadra está abandonada. Lo que expone a los habitantes a constantes asaltos, violaciones, y una virulenta inseguridad, son los nuevos pobres de las urbanizaciones fallidas que por desgracia se reproducen por toda América Latina.



Foto: Arturo Herrera,
Colonia Riveras del Bravo,
Ciudad Juárez, México

Por su parte, la urbanización de la pobreza, fue anunciada y denunciada a su vez, por Joan Clos, al momento de asumir la responsabilidad de Hábitat-ONU como nuevo Director Ejecutivo en el año 2010, en Nairobi, Kenia. Se evidenciaba una realidad que muy pocos declaraban como eminente e incluso como inevitable. Se trataba de un proceso que estaba en ciernes desde hacía algunas décadas, pero que, ni los organismos internacionales, ni los gobiernos de los países pobres y ricos asumían la responsabilidad de aceptar una problemática propia de

un milenio que se anunciaba como urbano, Joan Clos lo dejaba claro en su primer discurso al asumir el cargo;

“Con más del 50% de la población mundial viviendo en ciudades y con la proyección de que ese porcentaje llegará a 70% en 2050, la urbanización es uno de los desafíos del siglo 21. Con el aumento de las migraciones en países en desarrollo combatir la urbanización de la pobreza es nuestra principal prioridad. En un momento en el que el cambio climático es un peligro para todo el mundo, el manejo del medio ambiente en las ciudades es clave para el futuro de nuestro planeta. Tengo la expectativa de trabajar con los socios de ONU-HABITAT, la comunidad internacional, gobiernos, autoridades locales, sector privado, ONGs y comunidades para garantizar que vivamos en ciudades social y medioambientalmente sustentables (Clos; 2010)”.

Así, el reconocimiento oficial de la urbanización de la pobreza sirve como punto de partida para tratar de conceptualizar un proceso que está abierto y que, se presenta como un reto para las Ciencias Sociales. La ausencia de libros académicos es notoria al trabajar este tema, pero existe una bibliografía extensa sobre pobreza, pobreza urbana y exclusión social. La concentración urbana de hoy día, ha hecho proliferar enfermedades ya erradicadas y que reaparecen con fuerza demoledora en poblaciones de África, Asia y partes de América Latina. Con la urbanización de la pobreza se han credo “ciudades de pobres”, ciudades enteras de individuos desnutridos y empobrecidos, imágenes donde los niños y los ancianos parecen llevar la peor parte de esta pobreza urbanizada.

La economía de las ciudades, como llamaba Jane Jacobs a uno de sus libros en 1969, ha cambiado drásticamente, ahora, parecería más un Planeta de ciudades miseria, nombre de uno de los libros de Mike Davis, donde dibuja mejor la realidad de las ciudades contemporáneas. En el estudio de Jacobs, se incluía el desarrollo de las grandes empresas en Estados Unidos, “por ejemplo, durante los años en que se desarrollaba la industria automovilística en Detroit, eran muy numerosos los que intentaban fabricar automóviles; nadie sabe el número exacto de ellos, quizás eran más de quinientos, y quizá pasasen de los setecientos” (Jacobs; 1969: 110), al igual que la industria de la construcción se encontraba en auge en Chicago, los Ángeles y otras grandes ciudades como Nueva York no paraban

de crecer. Décadas después, en algunas de estas ciudades aparecen barrios enteros de marginales, pobres urbanos producto de la desindustrialización como un fenómeno que, era parte de una reorganización espacial de la producción, e internacionalización del capital y una nueva división internacional del trabajo renovada de manera racial y étnicamente en los países del Tercer Mundo. Además de ser una división del trabajo muy sexuada y donde el clasismo aun no perdía su fuerza original.

Una de las características de la urbanización de la pobreza es que ya no se ubica solo en el Tercer Mundo, se ha convertido en un proceso global, donde la pobreza va urbanizando y alcanzando a las conocidas sociedades de abundancia o pleno empleo, donde su población tenía altas tasas de trabajadores asalariados acogidos por Estados de bienestar. Ahora estos Estados adelgazados económicamente, bien pueden ser llamados en esta crisis mundial iniciada en 2008, como Estados de mal-estar. La exclusión social, parece ser un elemento importante para explicar esta urbanización-precarización de la pobreza:

“La exclusión social hace referencia, entonces, a procesos y prácticas de las sociedades complejas que se convierten en “factores de riesgo social” compartidos por determinados colectivos sociales —inmigrantes, colonos, mujeres, indígenas, discapacitados—. Estos procesos ocurren en un contexto social caracterizado por el debilitamiento de los cimientos de la llamada sociedad salarial y de los regímenes de seguridad social, lo que obliga a advertir que, en lugar de identificar grupos particulares de excluidos, se crea una situación que afecta cada vez más al conjunto de los trabajadores (Ziccardi; 2008: 13)”.

Sin embargo y pese a los esfuerzos de algunos pocos gobiernos en América Latina, la economía de las ciudades y sus riesgos medioambientales están imponiendo las lógicas urbanas y de desarrollo institucional que se restringe en la mayoría de las ocasiones a políticas de embellecimiento e imagen urbana en las zonas turísticas, comerciales y financieras de las ciudades latinoamericanas. Así, podemos observar cómo se repiten estas intervenciones urbanas en Buenos Aires, Distrito Federal, Bogotá, Lima, Santiago, Caracas, La Paz, entre otras capitales, y que en sus periferias habitan centenares de pobres urbanos. Además de otras capitales más pequeñas como las de Centroamérica donde las cosas

empeoran, como es el caso de Guatemala y San Salvador. Donde la condición de abandono, se hace sentir en sus centros históricos:

“Los centros históricos son los lugares polisémicos por excelencia: atractivos para el exterior, integradores para el interior, multifuncionales y simbólicos. Son la diferencia más relevante de cada ciudad, la parte de ésta que puede proporcionar más sentido a la vida urbana. Excepto cuando se especializan y se homogenizan hasta que todos se parecen o se deterioran y se convierten en áreas marginales. Los unos porque de día se congestionan y de noche se vacían; los otros porque reciben el doble de estigma de la pobreza y la inseguridad (Borja; 2003: 271).”

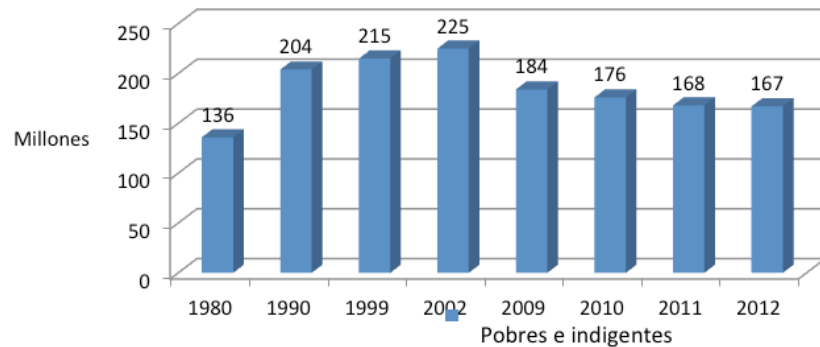
Los centros históricos o primeros cuadros de la ciudad contienen una historia de la cultura material de la comunidad, representan el pasado de un pueblo y su memoria. Por desgracia, muchos de ellos están totalmente abandonados y se consideran como los lugares más lúgubres y peligrosos de las ciudades. Solo en algunas grandes ciudades el centro histórico ha recobrado su vitalidad, vida comercial y belleza estética. El caso más emblemático ha sido el del Distrito Federal, ciudades como Bogotá y Medellín en Colombia le han hecho en los últimos años y Lima y otras metrópolis siguen intentándolo.

Las formas de pobreza urbana complejizan los abordajes conceptuales sobre la cuestión urbana. La urbanización de la pobreza está intentando colocar una forma de nombrar a un proceso en ciernes que aparece como algo inédito en la historia de la humanidad, pero con parecidos de familia a los viejos problemas de las ciudades desde su origen en el mundo antiguo. En términos de tiempo histórico y social es reciente, nunca antes en la historia, la pobreza se había urbanizado a un ritmo tan acelerado, y en un milenio urbano es importante colocar a este proceso, en su justa dimensión para que sea repensada. Damos evidencia estadística, porque afortunadamente esta es de fácil acceso, en los informes de la UNFPA, Hábitat-ONU, FAO, OIT, entre muchas otras organizaciones internacionales que junto a la CEPAL, la OEA y la UNESCO-LA, pueden satisfacer las dudas estadísticas sobre la pobreza y los procesos de urbanización a nivel planetario.

En su publicación Panorama Social de América Latina 2012, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), informa que si bien, la po-

breza disminuyó, aún quedan en la región 167 millones de pobres (28.8% del total de la población), un millón de personas menos que en 2011. La siguiente gráfica evidencia la problemática que enfrentan los gobiernos locales, los Estados nacionales y los Organismos Internacionales:

América Latina: Evolución de la pobreza e indigencia (En millones de personas) 1980-2012



Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL, Panorama Social de América Latina, 2012.

Como se muestra en esta gráfica, la reducción de la pobreza se había controlado desde el año 2002 en su punto más alto para la región latinoamericana llegando a un máximo de 225 millones de personas, a partir de este tope, sufrió una caída considerable llegando a 184 millones en el 2009, y 176 millones para el 2010, es decir, unos 49 millones de personas dejaron la pobreza, visto así, los programas de los distintos Estados latinoamericanos y las políticas de los Organismos Internacionales fueron un rotundo éxito. Sin embargo, a partir del año 2011 con 168 millones de pobres respecto a los 167 del 2012, las cosas cambian drásticamente mostrando una desaceleración en la reducción de la pobreza en América Latina. Por ello, la CEPAL y otras organizaciones han hecho hincapié en reforzar los esfuerzos y recursos económicos, institucionales y humanos para frenar lo que parece otra oleada de pobreza como la de 1980 que pasó en una década de 136 millones de personas pobres a 204 millones en el año 1990. El caso de México es desastroso, en solo los primeros años de la actual administración federal (2012-2018), hay 2 millones de nuevos pobres en el país.

Aunque los datos proporcionados por la CEPAL corresponden a pobreza

rural y urbana, aquí, el esfuerzo se concentra en pensar la pobreza urbana que en muchos casos se concatena con la pobreza extrema, generando políticas sociales de reducción de la pobreza, donde su combate se ha reducido en América Latina, en una política electoral en tiempos de cambio de poderes. Los pobres urbanos como nuevo ejército de reserva han sustituido a los pobres rurales como mayoría a finales de la primera década del siglo XXI. Las políticas sociales urbanas deberán frenar la precarización (laboral y social) y la marginalidad como una consecuencia estructural de la urbanización de la pobreza. Es decir; pobreza, desigualdad urbana y exclusión social, son categorías que se integran en un proceso que muestra una de las peores caras de nuestra contemporaneidad, no es que no existan ricos, sino que son una inmensa minoría frente a una clase media y baja urbana cada vez más desestructurada por las crisis económicas y políticas de América Latina.

“Al viejo Gran Hermano le preocupaba la inclusión, la integración, disciplinar a las personas y mantenerlas ahí. La preocupación del nuevo Gran Hermano es la exclusión: detectar a las personas que <<no encajan>> en el lugar en el que están, desterrarlas de ese lugar y deportarlas <<al sitio al que pertenecen>> o, mejor aún, no permitir que se acerquen los más mínimo (Bauman; 2005: 269)”.

La pobreza urbana también es una consecuencia de las políticas neoliberales que invadieron al continente desde la década de los años de 1970. Después de décadas de este modelo económico neoliberal excluyente, millones de nuevos pobres aparecen agolpados en los barrios de las ciudades grandes y medias del continente. Ya no solo la migración de jornaleros del campo a la ciudad y su llegada a las periferias de las ciudades en los años de 1970 y la década de los 1980, es lo que provoca esta pobreza urbanizada, a ella se añaden nuevas variables e indicadores, trabajadores transmigrantes de diferentes nacionalidades, lenguas y culturas, desindustrialización en ciertas regiones manufactureras, y el impacto de las nuevas tecnologías en la creación de empleo fijo. La baja escolarización deja fuera a millones sin acceso a la educación media y superior, asistimos a una nueva fragmentación-espacial de la ciudad y sus espacios urbanos, una guetización donde los más ricos huyen de las ciudades y construyen sus mansiones y chalets a las afueras o en lo alto de las ciudades, toman distancia del mal endémico de

la pobreza y su estigma como los usuarios de la violencia y el crimen organizado. Una forma de criminalización de la pobreza y la precarización.

Tenemos muchas preguntas, como, ¿pensar cuáles son nuestros saberes y conocimientos sobre esta urbanización de la pobreza, desde donde hablamos y escribimos? ¿Existe una corpo-política del conocimiento que tiene que ver con esta geografía del que habla, y denuncia? Estamos negando el derecho a la ciudad que tanto preocupó a Lefebvre y preocupa a Jordi Borja en sus escritos recientes. Coincidimos con las ideas de Jeremy Rifkin cuando afirma que estamos en la era del acceso, donde la brecha digital y cognitiva se suma a la brecha social. Estamos en un pasaje de sociedades donde los pobres eran el mal necesario del sistema capitalista; a una sociedad donde los pobres son un bien de uso, un capital humano para usar y desechar en el capitalismo salvaje.

A principios del año 2014, Bauman apuntaba en su último libro una preocupación que desde hace ya casi una década le sigue en su pensamiento, y es que, nos enfrentamos como nunca antes, a una profundización en la desigualdad social. “Y entonces, en torno a 1980, se produjo una hiperaceleración de la desigualdad” (Bauman: 2014; 24). Cada vez que contemplamos con seriedad la problemática de la pobreza urbana, se encuentra que todos los malestares que afligen a una inmensa mayoría de la población, son provocados o inducidos por una minoría que promueve la desigualdad, la precarización y la pobreza urbana como una forma de contención de los millones de desafiados y desempleados que se convierten rápidamente en una clase sumamente peligrosa para los ricos y poderosos.

Así, la precarización y la exclusión social son los elementos que caracterizarán a estas sociedades de pobres urbanos, de una América Latina que tiene por delante una gran lección por aprender en un milenio inevitablemente urbano. Los cambios y transformación del mundo moderno dependerán del rumbo y políticas que tomen los grandes organismos y organizaciones internacionales, apoyados por la intervención directa y políticas públicas y sociales de los gobiernos en todos sus niveles y dimensiones. La evidencia es hoy palpable, está a la luz y vista de todos los funcionarios y funcionarias, de legisladores y gobernantes, el no atender los malestares que aquejan a las sociedades presentes sería una omisión imperdonable.

Desempleo: las sociedades de abandono

A fin de cuentas, nos sentimos inseguros porque nuestro empleo, y en consecuencia, nuestros ingresos, posición social y dignidad se hallan bajo amenaza. No estamos asegurados contra la amenaza del despido, la exclusión y el desalojo, es decir, la pérdida de la posición que apreciamos y creemos habernos ganado para siempre (Bauman: 2011).

En suma, 1.000 millones de personas siguen viviendo en la extrema pobreza con un dólar al día como medio de subsistencia y lógicamente, otras capas de población están en la pobreza aunque no sea en la miseria absoluta (Colomer: 2015).

Aunado a los fenómenos de la urbanización de la pobreza, la precarización del trabajo y la exclusión social, aparecen millones de desempleados, que ya sea temporal o de forma permanente, perdieron la forma de sostenimiento cotidiano, sin ingresos fijos, sin prestaciones, y sin acceso a los derechos sociales, rápidamente precarizan sus vidas deteriorando sus relaciones y anulando cualquier forma de participación ciudadana. Las estadísticas de estancias como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), o los ministerios y secretarías del trabajo en los gobiernos confirman estas historias de vida de millones de seres humanos.

Así, el desempleo, ha tomado centralidad entre algunas disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanidades, al igual que Centros de Estudio con financiamiento de Fundaciones Internacionales y organismos como las Naciones Unidas. Las estadísticas más recientes son alarmantes en Europa, si tomamos como ejemplo Grecia, donde el 27% de la Población Económicamente Activa (PEA) está en paro laboral, seguida por España con el 26%. A estos dos países le sigue una lista de países europeos que décadas anteriores, gozaban de un Estado de Bienestar fuerte y sociedades conocidas como “sociedades asalariadas” o de “pleno empleo”, pero de estas nociones ha quedado poco, la misma categoría de trabajo como concepto moderno ha sufrido una serie de nuevas conceptualizaciones en la sociología contemporánea. El periódico El País de España en su sección de economía del día 8 de enero de 2014 destaca lo siguiente:

“En el conjunto de la Unión Europea, la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios (10,9%), con lo que repite nivel por séptimo mes consecutivo, mientras que respecto a noviembre de 2012 el desempleo aumentó una décima. La cifra de desempleados registrada en la eurozona en noviembre alcanzó los 19,241 millones de personas, lo que supone un incremento de 4.000 parados respecto a octubre. En el conjunto de la UE la cifra de personas sin empleo alcanzó los 26,553 millones, un aumento de 19.000 parados respecto al mes anterior.

No obstante, respecto a noviembre de 2012, el número de desempleados de la zona euro se incrementó en 452.000 personas, mientras que entre los 28 aumentó en 278.000 desempleados.

Entre los estados miembros de la UE, las menores tasas de paro se registraron en Austria (4,8%), Alemania (5,2%) y Luxemburgo (6,1%), mientras las más elevadas correspondieron a Grecia (27,4% en septiembre) y España (26,7%).

En el caso de los menores de 25 años, la tasa de paro de la eurozona en noviembre se situó en el 24,2%, en línea con el dato de octubre, hasta un total de 3,57 millones de desempleados, mientras que en el conjunto de la UE subió una décima, hasta el 23,6%, con un total de 5,66 millones de jóvenes sin trabajo. Los datos de Eurostat sitúan de nuevo a España como el país con peores cifras, ya que la tasa de paro subió en noviembre al 57,7%, tres décimas más que en octubre, mientras que en Grecia, cuyo dato corresponde a septiembre, se situó en el 54,8%. De este modo, la cifra de menores de 25 años desempleados en España alcanzó un total de 983.000 personas, frente a las 973.000 de octubre, lo que representa el 27,4% del paro juvenil en la eurozona en noviembre” (El País: 2014).

Se puede resaltar de la cita anterior, la mala situación del desempleo en Europa, destacando el desempleo juvenil que como población vulnerable, recibe la peor de las consecuencias de la crisis económica desde el 2008. En el caso del sur de Europa, sobre todo España y Grecia son contundentes los datos sobre el paro laboral, situación que está llegando a un peligroso límite de efecto multitud desesperada y desamparada por parte de sus gobiernos locales y centrales. El sur global en el caso latinoamericano encuentra en el sur europeo su contraparte, siendo en España y Grecia incluso más agudo y extremo. Dejando claro que ningún país latinoamericano cuenta con el estado social o de bienestar que tiene Europa.

Pensemos que en las viejas sociedades de producción, el trabajo ha sido

desplazado como categoría central, es decir, el trabajo ya no es una garantía de una mejor calidad de vida, debido a que formas como el subempleo y la subcontratación merman las relaciones y condiciones del trabajador dejándolo en una condición de precariedad. Aparecen en las calles y oficinas de parados en Europa y América Latina, miles de ex trabajadores industriales, empleados y otros tipos de trabajadores desplazados solicitando apoyos y trabajo. Las atenciones para los parados no alcanzan a regenerar la calidad de vida perdida por la falta de empleo, los apoyos gubernamentales —cuando estos existen— solo cubren una parte del gasto ordinario de los trabajadores utilizada en despensa, pago de servicios, hipotecas de vivienda, deudas personales y bancarias y otro tipo de egresos como las colegiaturas escolares, la gasolina y el transporte público. Autores como Ulrich Beck, han hablado al respecto de la informalidad en Europa, de una brasileñización de Occidente.

“Es decisivo para la tesis de la brasileñización de Occidente el hecho de que, pese a todos los contrastes y desigualdades culturales, el futuro de lo informal, que se abre paso en Occidente, cuenta con una larga tradición en Sudamérica y, por lo tanto, se pueda estudiar en todas sus contradicciones” (Beck: 2000; 107).

El desempleo en su mayoría urbano, viaja de región en región y somete a las ciudades a una tensión social que genera estrés, desánimo, angustia y depresión de miles de habitantes de las ciudades, sean estas pequeñas, medianas o metrópolis. La ausencia de un trabajo fijo orilla a muchos de los habitantes de los barrios más empobrecidos de toda América Latina a la informalidad, siendo esta, la forma más inmediata de hacerse llegar recursos para las necesidades básicas (alimentación y salud). En América Latina, las estadísticas nos dan cuenta de la problemática a la que se enfrentan millones de familias de los estratos más bajos. Familias donde el trabajo informal se ha convertido en parte de su vida cotidiana como mecanismo de sobrevivencia. En algunos países latinoamericanos, el trabajo informal llega al 60% o más, situación que tiende a agravarse por la falta de una intervención de las autoridades encargadas de regular y controlar el empleo.

“En estos países hay pueblos enteros donde hasta el 75% de la población activa se encuentra en la economía informal, es decir, fuera de las reglas de todo

sistema de contrato legal, de seguridad social. Está manteniendo una actividad económica —porque no renuncian a comer algo de todos los días, por instinto de supervivencia— pero estamos hablando del 75% de la población activa en la economía sumergida, que no cuenta para las estadísticas oficiales del país. Y no es un caso aislado, estamos hablando de magnitudes del 75% en Perú, en Bolivia o del 60% en Argentina, en Brasil, y no son países miserables, incluso Chile, el mayor éxito del modelo neoliberal tiene un 46% de la población en la economía informal; si a eso le sumamos el 7% de paro, resulta que el 53% de toda su población activa está fuera del sistema económico” (Colomer: 2015, 108).

Sin embargo, el problema no solo radica en la informalidad de los trabajadores —en sí misma alarmante— que evaden el fisco (la Hacienda) y no pagan sus impuestos a los gobiernos, sino que, a partir de la práctica de la informalidad, devienen otras consecuencias y malestares nefastos que meten en un ciclo de precariedad a las familias que viven en la informalidad, como un estilo de vida, como nuevas formas de vida urbana que genera la urbanización de la pobreza. Si sabemos que en gran medida, las hoy conocidas <<sociedades de consumo>> están mediadas por la capacidad de compra y consumo de las familias y las personas, entendemos que existe una desventaja estructural para las familias que viven en la informalidad, ya que sus ingresos no le son suficiente para consumir en los mercados formalmente establecidos donde cualquier mercancía tiene un costo mayor.

De esta manera, pocas veces, las familias que viven en la informalidad laboral, consumen en el mercado formal. Así, una buena parte de sus ropas, calzado y todo tipo de accesorios de vestir, provienen de mercados de ropa usada o las llamadas tiendas de segundo uso (en lugares de México se les conoce como las “segundas”). En casi todas las ciudades se pueden observar mercadillos, tianguis o lotes de venta de productos usados que van desde zapatos, juguetes, ropa, accesorios domésticos y de belleza, hasta herramientas, refacciones y aparatos electrodomésticos que de uso, semi nuevos o nuevos, se ofrecen a menor precio que en cualquier negocio establecido en el mercado formal. Las ciudades en Latinoamérica guardan parecidos de familia (como diría José Nun) en su periferias urbanas, una gran movilidad de transeúntes inundan los mercadillos y tianguis del mundo informal. La economía de la pobreza que se mencionó anteriormente,

forma parte de esta informalidad que sobreviene al desempleo y la precarización.

Recientemente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su oficina regional para América Latina y el Caribe, publicó en su Informe 2014: *Panorama Temático Laboral. Transición a la formalidad en América Latina y el Caribe*, la siguiente tabla estadística que evidencia la problemática actual de la informalidad en la región, aún y cuando en algunos países la informalidad ha descendido en los últimos años (de manera insignificativa).

América Latina: tasas de empleo informal no agrícola por sexo y años 2009-2013 (15 años a más) (Porcentajes)												
	Total				Hombres				Mujeres			
	2009	2011	2012	2013	2009	2011	2012	2013	2009	2011	2012	2013
Total países [✓]	50,1	48,0	47,8	46,8	47,2	45,5	45,2	44,5	53,8	51,1	51,0	49,7
Argentina [✓]	49,2	47,1	47,2	46,8	48,5	46,2	46,7	47,0	50,1	48,5	47,9	46,6
Brasil [✓]	41,7	38,0	37,7	36,5	38,7	36,4	36,2	35,3	45,5	40,0	39,5	37,8
Colombia	57,1	56,4	56,0	54,5	54,1	52,8	52,0	50,8	60,6	60,5	60,7	58,7
Costa Rica [✓]	43,6	33,6	32,2	30,7	42,1	29,8	29,2	26,8	45,9	38,8	36,3	36,0
Ecuador [✓]	60,5	52,0	49,9	49,3	58,4	49,4	48,3	48,0	63,4	55,4	52,0	51,2
El Salvador [✓]	66,2	66,2	66,4	65,6	60,1	60,6	60,3	58,9	72,1	72,0	72,4	72,2
Guatemala [✓]	75,1	74,6	76,8	73,6	70,4	70,2	72,0	70,1	80,3	79,9	82,2	77,7
Honduras	73,2	70,2	72,2	72,8	72,3	68,3	69,9	70,6	74,2	72,3	74,7	74,9
México [✓]	53,5	54,0	54,4	53,8	50,6	50,7	50,9	50,3	57,6	58,7	59,2	58,4
Panamá	43,8	39,1	39,1	40,4	41,8	39,5	39,2	40,1	46,5	38,6	39,0	40,8
Paraguay	70,0	65,3	66,0	63,8	67,0	62,7	63,8	61,0	73,9	68,7	68,8	67,3
Perú [✓]	69,7	68,6	64,2	64,0	64,8	64,9	58,6	58,7	75,4	72,8	70,8	70,3
República Dominicana	48,2	49,7	51,2	51,2	46,3	48,2	50,2	49,7	51,2	51,8	52,6	53,2
Uruguay	38,7	35,4	34,1	33,1	39,2	35,0	34,2	33,6	38,2	35,9	33,9	32,5

Fuente: Tomada de Panorama Temático Laboral, OIT 2014, p. 33.

A pesar de que la tabla sólo muestra los datos de 14 países, es suficiente para tener un panorama donde en su conjunto existe una informalidad total del 46.8% en el 2013, pero que en algunos países rebasaba el 70% (Guatemala y Honduras) y otros el 60% (El Salvador, Paraguay y Perú), y algunos otros el 50% como en Colombia y México (este último que para el 2015 subió a un alarmante 58%). La cuestión está en que esta informalidad condiciona a la población a experimentar vidas precarias. Si bien, las estadísticas varían entre investigadores y

organismos internacionales u otras instituciones de investigación, la finalidad es poner en evidencia el fenómeno de la informalidad.

Sin embargo, muchos se benefician de esta informalidad formando toda una subcultura de la economía. Un ejemplo claro de estas formas de subsistencia es la de colonias o barrios completos dedicados a la piratería y la <<fayuca¹>> , en el Distrito Federal capital política y económica de México, los barrios de Tepito y la Merced, son famosos por el mercadeo y comercialización de artículos pirata, donde miles de familias viven de esta subcultura de la economía de la pobreza y la informalidad. Son espacios donde fácilmente cualquier comprador puede conseguir todo tipo de aparatos y artículos, incluidos automóviles, muchas veces de procedencia ilegal o con reporte de robo. Pero más que crítica o peor aún, criminalizar este tipo de experiencias, se trata de evidenciar lo que está generando la precarización laboral y la falta de empleo permanente bien remunerado y con prestaciones para los trabajadores urbanos.

Desgraciadamente, en la informalidad también aparecen ganadores y perdedores, hay quienes organizan y estructuran la informalidad y se benefician de ella. Solo pocas experiencias pueden servir de ejemplo de cómo los ciudadanos ante situaciones de abandono por parte de sus autoridades o de los empleadores como encargados de la generación de empleo, se organizan para abatir la pobreza y descomposición de sus formas de vida urbana. En algunas ocasiones se forman colectivos de corte comunitario, barrial y cooperativo para sortear la escasez y degradación, las familias e individuos se organizan en torno a la solidaridad y la reciprocidad con demandas comunes y soluciones prácticas para afrontar el día a día.

En Perú, durante la hiperinflación que llegó al 2,178.48% durante la década de los años de 1980 durante el gobierno de Alan García (primer mandato) generó en algunas ciudades como su capital Lima, expresiones de organización social conocidas popularmente como la Pollada, que consistía en hacer una cooperación para cubrir los gastos de alguna familia o persona del barrio o comunidad

1 La Fayuca, es el nombre que se le asigna a las mercancías y productos de procedencia norteamericana y que la mayoría de las veces, es ilegal. La mercancía puede ser nueva o usada y se introduce a lo largo de los 3,200km de frontera de México con los Estados Unidos. Por su procedencia es comercializada a costos mucho menores que los del mercado formal.

que padecía alguna desgracia de salud, escolar o de desahucio con los bancos. También se realizaban Polladas para juntar para las celebraciones de bodas, quinceañeras o funerales de vecinos y amigos. Pero que fue lo que suscitó esta brutal inflación en el Perú de finales del siglo pasado:

Los ministros de economía durante la hiperinflación de la década de los 80:

Más de 25 años han pasado y aunque, a la distancia, se suele dar por sentado que el único responsable de tan mal desempeño fue el expresidente Alan García, también se deja en el olvido a quienes condujeron las riendas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante la primera gestión aprista. Corría el año 1985 cuando un delgado Alan García se convertía en uno de los presidentes más jóvenes en la historia del país. Junto a él, Luis Alva Castro se estrenaba como cabeza de la cartera ubicada en el jirón Junín con la herencia dejada por los cuatro ministros de Economía de la gestión anterior: una inflación en tres dígitos, devaluación de la moneda nacional y mora en el pago de la deuda externa. Ante tal escenario, las decisiones no tardaron en llegar. Para empezar, y contrariamente a lo que postulaba el FMI, se impulsó la heterodoxia, y aunque tuvo un buen inicio [la inflación bajó a 3,5% en setiembre de 1985 y crecimos 9,2% en 1986], terminó con resultados catastróficos. En sus dos años de gestión, Alva Castro centró su programa en limitar el pago de la deuda externa, el inti reemplazó al sol y se congelaron los precios básicos, los sueldos y el tipo de cambio. Meses después empezaron los problemas: la capacidad de gasto del Estado se agotó, el inti comenzó a devaluarse y la capacidad productiva de nuestra industria llegó a sus límites. Razones más que suficientes para pensar que la política económica aplicada derrochaba improvisación. Consecuencia final: primer titular del MEF a la baja.

De Saberbein a Salinas

Tras la renuncia de Alva Castro, el entonces viceministro de Economía, Gustavo Saberbein, asumió las riendas del MEF y debutó en el cargo con una de las medidas más controversiales anunciadas por García en su mensaje patrio de 1987: el intento de estatizar la banca para “democratizar” el crédito. Casi a finales de 1987, la inflación ya rondaba las tres cifras [llegó a 114,5%] y la balanza de pagos termi-

nó con un saldo negativo de US\$521 millones, cifra que no se veía desde 1981. Con señales de crisis más que evidentes y con menos de un año en el cargo, el segundo titular del MEF dio un paso al costado. El tercero de la lista fue César Robles Freyre, quien con menos de cuatro meses en el cargo tuvo que darle paso a Abel Salinas, quien recibió una economía con déficits fiscal y comercial. Bajo ese panorama, el 6 de setiembre de 1988, se concretó el llamado paquetazo —conocido también como ‘salinazo’—, que terminó por devaluar nuestra moneda y contribuyó a generar una inflación mucho mayor [los precios subieron más del doble], dando paso a lo que hoy recordamos como hiperinflación. Dos meses después, en noviembre, otro paquetazo vio la luz, pero con costos sociales y económicos mucho más drásticos, que terminaron con la salida de Salinas antes de cumplir tres meses en el cargo, el tiempo más corto de todos. Tras la caída del cuarto titular del MEF, el cargo fue asumido por Carlos Justo Dávila, quien tampoco duró mucho. Casi seis meses después cedió la posta a César Vásquez Bazán —el último ministro de Economía de García—, quien terminó su gestión con una inflación acumulada de 2'178.482%.” (El Comercio, Miércoles 11 de setiembre de 2013).

Este ejemplo, sirve para observar las medidas tomadas por los ciudadanos ante las fallas de los sistemas económicos que encarecen la vida de los habitantes de muchas naciones. La solidaridad, la reciprocidad y la cooperación aparecieron como mecanismo de defensa ante la brutalidad inflacionaria del mercado peruano que puso los precios de los productos básicos en el cielo y deshabilitó a millones de familias para llevar una calidad de vida digna. Otro ejemplo es el de Colombia, donde aparece el concepto de economía solidaria como “el sistema socioeconómico, cultural y medioambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias, solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro, para el desarrollo integral del ser humano como sujeto actor y fin de la economía” (Colomer: 2054, 39).

Según investigaciones de Colomer, desde el 6 de agosto de 1998, con la publicación de la Ley 454 en la República de Colombia, se institucionaliza y crea el consejo Nacional de la Economía Solidaria. Con ello, se da inicio a una nueva economía que pone en la solidaridad, la cooperación y la ayuda mutua, el motor de las transformaciones sociales frente a las crisis recurrentes de los Estados latinoamericanos. Aún y cuando la Ley 454 nunca llegó a ver la luz, se sentaron los precedentes de nuevas formas de economía alternas a la economía de mercado

producto del capitalismo financiero y especulativo. Las crisis económicas tanto de Perú como de Colombia, lograron activar la cooperación y el mutualismo.

Por desgracia, no solo el Perú vivió estas crisis económicas, México vivió una crisis aguda en 1994 y Argentina vivió el famoso “corralito” en el 2001, en ambos países las consecuencias de las crisis económicas fueron la aparición de nuevos pobres y el adelgazamiento de las clases medias que habían ganado terreno desde las décadas anteriores al surgimiento de estas crisis.

Al igual que Argentina, México ha recibido en las últimas tres décadas a población migrante. Bolivianos, paraguayos y peruanos han llegado a instalarse a las afueras de Buenos Aires, se asientan en el extrarradio de la ciudad dando origen y continuidad a las *villas miseria o villas de emergencia* como las llaman los argentinos. Entre basura, cartón, madera y láminas, se asientan cientos de miles de familias que radican en la hiperdegradación urbana y descomposición social. El desempleo y la informalidad son el síntoma de urbanizaciones enteras que bajo las políticas de abandono que los gobiernos locales y departamentales o provinciales han practicado como formas de exclusión y distanciamiento de los pobres y “masas de marginados” como los llamaría José Nun.

Así, en México, la llegada de aproximadamente 500 mil centroamericanos cada año intentando cruzar la frontera norte, genera una gran movilidad humana, cientos de desplazados por las crisis de seguridad y económica buscan llegar a los Estados Unidos, en su intento muchos guatemaltecos, salvadoreños y hondureños —en su mayoría— se quedan a radicar en regiones del centro y norte del país. La expulsión de sus lugares de origen, de estos millones de centroamericanos (generalmente jóvenes varones) según sus respuestas en historias de vida realizadas en los últimos años (2012, 2013 y 2014), se debió a la falta de trabajo estable en el caso de los jóvenes urbanos, y para los migrantes con origen en una comunidad rural, argumentaron que “el campo ya no da para más”. Es decir, para comer. Pero aclarando que en su gran mayoría, los migrantes de origen centroamericano pocas veces deciden quedarse a vivir en México, solo lo usan como lugar de tránsito y residencia temporal hasta lograr su cruce “al otro lado” de la frontera mexicana.

Así, los cinturones de miseria en el Distrito Federal según reportaron desde 2005 y 2008 diversas instituciones como el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), en

la capital, la pobreza creció en los últimos años, destacando la aparición de la pobreza patrimonial, alimentaria y de capacidades. Por su lado, el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Distrito Federal, evidenció la <<alta marginalidad>> y <<exclusión educativa>> de más de 1,200 000 capitalinos. Que sin servicios básicos, viven en el desabasto continuo. De nuevo, el desempleo es uno de los elementos característicos de estos habitantes de los cinturones de miseria en la capital mexicana. Cinturones de miseria poblados producto de migraciones internas de otras ciudades o áreas rurales.

Entonces, entendamos la *política* de abandono como parte de las políticas públicas, urbanas y sociales que se dejan de hacer por parte de los gobiernos e instituciones gubernamentales. Los servicios básicos de electricidad doméstica, alumbrado público, gas, agua potable y pavimentación, son parte de las demandas de los habitantes de estas villas o cinturones de miseria, además, se han añadido a estos problemas, la falta de seguridad y el empleo. La crisis de los años de 1980, dejó como resultado este tipo de urbanizaciones que se han reproducido en toda América Latina, sobre todo en las afueras, incluso dentro de las capitales y metrópolis como el Distrito Federal en México, Lima en Perú, Quito en Ecuador, Bogotá en Colombia, Santiago en Chile y en Caracas en Venezuela. Algunos autores, sobre todo urbanistas y sociólogos urbanos, usan la metáfora de la *favelización* de las ciudades latinoamericanas en alusión a las favelas en el Brasil.

A la idea de una favelización en América Latina, se une el chabolismo como forma de asentamientos humanos irregulares, poco salubres y que viven una marginación y exclusión social en España. Sobre todo a las chabolas a las afueras de Madrid, donde ecuatorianos, magrebíes y europeos del este, se agolpan formando nuevos barrios. Sea cual sea la metáfora (sin dejar de lado los pueblos jóvenes del Perú) que se use para designar este tipo de zonas suburbanas de excluidos sociales, se debe llamar la atención al descuido y *política* de abandono que todas las entidades de gobierno procuran. La segregación residencial y laboral puede convertirse en uno de los rasgos de la América Latina contemporánea del siglo XXI. De nuevo y de manera reiterada se observa que una inmensa parte de estos habitantes se encuentran sin empleo, lo que significa estar desafiados de cualquier tipo de prestación social y atención sanitaria. Y que como consecuencia inmediata los inhabilita para calificar en cualquier tipo de crédito

de vivienda —llámese vivienda de interés social, comunitario o popular— con los bancos o el gobierno.

El empleo formal, como se ha discutido bastante en los organismos internacionales, debe de ser una de las tareas fundamentales de los gobiernos latinoamericanos para permitir el acceso a una serie de beneficios a los ciudadanos de los estratos más desprotegidos y abandonados por las políticas públicas. A ellos, se les debe emplear y dar trabajo de calidad para que logren salir del ciclo de exclusión en el que están metidos (o les metieron de manera estructural), el trabajo, debe recuperar la centralidad de los mejores tiempos de la modernidad, aquella que prometía orden y progreso, además de bienestar social. El desempleo generalizado en muchos países del Tercer Mundo ha conformado lo que podemos llamar <<sociedades de abandono>>. Mismas que se caracterizan por su baja participación ciudadana en los asuntos públicos de la ciudad y que se encuentran al margen de cualquier tipo de beneficio, desarrollo humano y bienestar social. Este ensayo parte de la tesis de que por primera vez en la historia reciente de la región latinoamericana, el trabajo, produce pobreza (González, Herrera y Mignolo: 2015). Cuando se trata de un “trabajo basura” o precario como sucede hoy día en las maquiladoras del norte de México, algunas zonas de Centroamérica y otros países latinoamericanos.

Las sociedades de abandono, aparecen como el resultado de años de política de abandono, que estructuran la vida de millones de personas en las ciudades y zonas urbanas del sur global. Estas sociedades padecen los peores males de la economía global y el capitalismo financiero. Es donde las tensiones estructurales y contradicciones del sistema económico descargan sus crisis y males. La angustia, el temor, el miedo, la depresión y ansiedad se convierten en experiencias y patologías de ciudadanos confundidos y desanimados ante tal panorama de degradación y descomposición, un estado de decadencia se observa y apodera de los barrios, comunidades y urbanizaciones enteras que procuran sobrevivir en la informalidad y el desempleo. La pregunta pertinente pudiera ser ¿dónde quedó la política?

Parte 2

En Busca de la Política

Descontento, desgobiernos
y democracia decifitaria

En esta segunda parte, se hace una reflexión crítica sobre las formas en que las clases políticas y gobernantes están gestionando las ciudades latinoamericanas. Se habla de los gobiernos y la decrepitud en la que han caído gobiernos locales y nacionales respecto a los asuntos públicos de la ciudad y la ciudadanía, se parte de la idea de que la decrepitud es un rasgo característico de las actuales clases dirigentes, mismas que han abandonado su responsabilidad respecto a las agendas sociales y demandas ciudadanas. El clima de inseguridad, precarización, desintegración social, degradación urbana y otros malestares, son en parte, responsabilidad de quienes han estado al frente de las Administraciones de los gobiernos locales y centrales, debido a la práctica sistemática de una política de abandono que ha desplazado de las agendas y políticas públicas de los gobiernos los asuntos prioritarios de la ciudad y la ciudadanía.

También, se desarrolla un apartado sobre las consecuencias de esta política de abandono que ejercen los gobiernos como parte de lo que deberían ser políticas públicas y de intervención social y comunitaria. Los resultados de las malas gestiones y la decrepitud en la que han caído muchas de las clases dirigentes en América Latina, es el descontento de la ciudadanía y un déficit ciudadano que inmediatamente crea un déficit democrático. Además de que encontramos en muchas ciudades de la región, una serie de desgobiernos que son acompañados de violencia urbana y social, de inseguridad ciudadana, precarización, exclusión y marginación social, y otras taras como el desempleo y la degradación social como forma de vida urbana, al menos para millones de latinoamericanos que se encuentran condenados a la pobreza estructural y el abandono institucional-gubernamental.

Por otro lado, la esperanza es pensar que la democracia que tenemos, deficitaria, es perfectible. Que si como la han hecho algunas administraciones y gobiernos locales en Brasil, Ecuador y Colombia, la democracia se puede recuperar y volcarse a la ciudadanía de forma innovadora y creativa. La voluntad política de las clases políticas desde un alcalde, gobernador o presidente, es vital para romper las inercias de las malas administraciones y contrarrestar la inseguridad, la violencia, la degradación, la desintegración y la desigualdad. La apuesta es revisar si la perfectibilidad de la democracia en América Latina puede ser gestionada desde abajo, incluyendo e integrando a la ciudadanía organizada y sobre todo a la desorganizada. Los rumores ciudadanos que revientan las calles

en protestas y manifestaciones son una muestra del hartazgo y desesperación de los ciudadanos inconformes y descontentos de sus gobiernos y políticos, de la pobre gestión y corrupción que empieza a hacer agua en los gobiernos locales y centrales. Hoy día, algunas ciudades de Brasil como Sao Paulo, son un claro ejemplo de ello.

Así, se busca a partir de las nociones como desgobierno, descontento, decrepitud, déficit ciudadano y otros como democracia perfectible y clase política, hacer una reflexión sobre el sentimiento ciudadano respecto a sus gobernantes. Partiendo de la premisa de que se ha entrado en un régimen de democracias deficitarias que quedan debiendo a sus ciudadanos. La intención es la de pensar en la *búsqueda de la política* como fuente de intervención y mediación entre gobiernos y ciudadanos. La política ha perdido centralidad frente a la economía de mercado y los sistemas financieros, es la economía y sus mercados la que está organizando y estructurando la vida en sociedad de los ciudadanos. Una primera reflexión sería la de recuperar la política y desplazar al mercado como forma organizadora y gestionaora de los asuntos públicos de la ciudad. Necesitamos sociedades con mercados, no sociedades de mercado como lo dijera el presidente de Ecuador Rafael Correa en la entrevista que le hiciera Ana Pastor para CNN en español el pasado marzo de 2012.

Clase política, gobiernos y decrepitud

Las ciudades latinoamericanas están cambiando. De la “ciudad frontera”. Con una lógica de urbanización basada en la expansión de las periferias y la metropolización industrial, se ha pasado a una “ciudad en red”, resultado de la globalización, reforma del Estado y los cambios demográficos. En este nuevo contexto, se percibe en la región dos modelos políticos de gobierno de la ciudad: el de la ciudad empresarial privada, que recurre al mercado para inyectarle eficiencia a la gestión urbana, y el de la ciudad inclusiva, basada en una revalorización del espacio público y la promoción de derechos. La exitosa experiencia de algunas fuerzas de izquierda demuestra que es posible una perspectiva distinta de gestión de la ciudad (Carrión: 2010).

La abrumadora actualidad latinoamericana con sus índices de inseguridad, violencia, abandono y pobreza, nos hacen preguntarnos cuáles son los grandes retos de las democracias latinoamericanas al respecto de estos temas, si sabemos que la pobreza y la violencia atentan contra el ejercicio de la ciudadanía y en consecuencia afectan a la estabilidad democrática. La región latinoamericana registra índices alarmantes de pobreza y precarización laboral, lo cual, genera desigualdad social entre los ciudadanos y segmenta a las poblaciones entre ricos y pobres, siendo los últimos una mayoría acorralada por la inseguridad en sus barrios, centros de trabajo y expuestos a niveles extraordinarios de violencia crónica. Entendemos por violencia crónica lo que nos sugiere Marilena Adams en su estudio:

“[La violencia crónica ocurre en] aquellos contextos en que los niveles de violencia se miden en las dimensiones de intensidad, espacio y tiempo. Una definición posible es aquella en que las tasas de muerte violenta al menos duplican la tasa promedio prevaleciente en los países ubicados en la misma categoría de ingreso, en que estos niveles se sostienen a lo largo de un período de cinco años o más y en condiciones en que los actos de violencia que no necesariamente causan la muerte registran altos niveles en diversos espacios de socialización, tales como el hogar, el barrio y la escuela, contribuyendo así a la reproducción de violencia a lo largo del tiempo.” (Pearce en Adams: 2011: 12)

Pero, cuáles son las respuestas, programas y políticas de los gobiernos locales y autoridades encargadas de brindar seguridad y bienestar a la población, en realidad muy pocas, una inmensa mayoría de gobiernos locales no cuentan con políticas públicas de prevención de la criminalidad y por el contrario, apelan a la construcción de esquemas y modelos punitivos para gestionar más cárceles, penas más duras, más policías y mejor armados, entre otras políticas de vigilancia que tienen que ver con nuevos dispositivos de video vigilancia y biometría como formas de control sobre poblaciones y grupos delincuenciales. El problema de estas medidas es su marcada criminalización de la pobreza y la juventud.

A diario, en las ciudades de América Latina, se registran detenciones arbitrarias, revisiones y cateos sin orden judicial, se estigmatiza la pobreza y se etiqueta social y culturalmente a los sectores de la población de ingresos más bajos, por otro lado, los jóvenes se ven hostigados y perseguidos por la policías locales y otros cuerpos de seguridad violentando su derecho al libre tránsito y esparcimiento por la ciudad. En muchas ocasiones, estas detenciones, retenes, cateos y otras formas de vigilancia corporal, termina en abuso policiaco y de autoridad. Los jóvenes o individuos de bajos recursos son retenidos y encarcelados con faltas administrativas condenados a pagar una fianza o en caso de no tener recursos económicos pagar con horas de cárcel.

Los gobiernos locales han cambiado dentro de los cabildos y ayuntamientos las ordenanzas públicas criminalizando a los jóvenes y los pobres, la vigilancia de la ciudad, atraviesa por dispositivos y nuevas tecnologías políticas de vigilancia y control social que atentan contra la ciudadanía. Una serie de nuevas prohibiciones y ordenanzas públicas aparecen para los ciudadanos, los horarios, espacios públicos y edificios son gestionados con lógicas securitarias que no previenen la delincuencia, solo la persiguen y sancionan una vez desplegada y causado el daño al ciudadano. Ante la realidad decadente de los municipios, se cree en que estos, deben de cambiar conceptualmente su fundación.

“Conceptualmente el municipio debe recuperar la condición de cercanía. En este caso la comunicación debe expresarse a través de tres mecanismos: la creación de nuevas formas institucionales de representación, que permitan reducir las distancias; el desarrollo de propuestas de descentralización del aparato de gobierno municipal y la ampliación de las formas de participación de la población en el gobierno local” (Carrión: 2010; 216).

Quizás, una de las nuevas formas en las que se puede reconceptualizar el municipio como figura de gobierno histórica es, en la propuesta de municipio participativo, mismo que prevea y aminore la violencia, desempleo e inseguridad ciudadana. Pero las tasas de desempleo no abonan a la reducción del problema de la violencia y la inseguridad ciudadana, además de que al desempleo se suma el empleo informal del 40% de la Población Económicamente Activa (PEA) a nivel latinoamericano. En algunos países como México, la informalidad ha llegado al 60% de los empleos, solo el 40% de la PEA tiene un empleo formal con prestaciones y beneficios sociales. Lo cual, precariza al trabajador y sus familias, generando con el tiempo, males estructurales como la desigualdad y la exclusión social de zonas urbanas enteras de las ciudades. Los gobiernos locales y sus autoridades no han sido capaces de resolver los desabastos de alimentos, la cobertura de los servicios públicos (electricidad, gas, agua potable, drenaje, alcantarillado) y de salud, los presupuestos anuales de egreso de buena parte de las Administraciones en los ayuntamientos se desvían a los rubros de seguridad pública y pagos de nómina de los servidores públicos que pueden llegar a significar más de la mitad del erario público. Poco queda entonces de recursos para obra social y políticas públicas encaminadas a la gestión de la seguridad ciudadana.

Las autoridades con alta tradición populista o asistencial combaten la pobreza con entrega de despensas o paquetes de alimentos y cobijas y en algunas ocasiones materiales para la autoconstrucción de viviendas. Esos programas de dadiva gubernamental se convierte en dispendio electoral y partidista haciéndose llegar la voluntad y los votos de los ciudadanos. Así, los gobiernos locales gestionan la pobreza y el desabasto de urbanizaciones enteras que han caído en el abandono gubernamental y que viven en la informalidad del día a día rodeados de urbanizaciones inseguras, violentas y marginadas de cualquier centralidad urbana y de servicios. Las redes de la delincuencia organizada hacen de estas villas miseria, pueblos jóvenes, cinturones de pobreza, chabolas y favelas un espacio ideal para instalarse social y económicamente.

Qué podemos esperar si sometemos a los gobiernos locales a una evaluación a partir de los llamados Derechos de 4ta Generación, los Derechos Urbanos que desde la categoría central del Derecho a la ciudad, plantea una idealización muy lejana a la realidad de América Latina. Jordi Borja en un extenso trabajo

sobre el Derecho a la ciudad enuncia lo siguiente para hacer de estos derechos una realidad:

“El <<derecho a la ciudad>> integra derechos relativos al entorno físico como la vivienda, el espacio público, el transporte, el ambiente, etc., que condicionan derechos individuales y colectivos de carácter social o político, es decir la efectividad del estatuto ciudadano. Pero también se integran en el derecho a la ciudad derechos políticos y sociales que a su vez condicionan la inserción en la ciudad como la igualdad político-jurídica, la identidad personal y colectiva de las minorías, el salario ciudadano o renta básica, la formación continuada, etc. El derecho a la ciudad, pues, es un conjunto de derechos formales y materiales que configuran la ciudadanía” (Borja: 2013: 145).

Los ciudadanos del siglo XXI en América Latina enfrentan como nunca antes la inseguridad y la violencia como parte de los paisajes urbanos de una inmensa lista de ciudades latinoamericanas, barrios abandonados por los gobiernos y autoridades se sumergen en la muerte social de toda política que construya ciudadanía. El miedo social invade hogares, barrios y urbanizaciones enteras ante las políticas de abandono de gobiernos y sus clases políticas decrepitas. El abandono aparece como el signo-síntoma de las poblaciones de más bajos ingresos, eso que son caracterizados como pobres (en cualquiera de sus dimensiones de pobreza: alimentaria, patrimonial, de capacidades, extrema, etc). La exclusión, la desigualdad social y el abandono generan contextos sociales y urbanos decadentes, la falta de servicios, equipamiento urbano, transporte público de calidad y centros de trabajo y estudio cercanos a barrios y comunidades con bajos ingresos genera urbanizaciones fallidas.

La gestión de la ciudad en América Latina pasa por distintas experiencias y voluntades políticas, en algunas ciudades de Colombia, Brasil, Ecuador, Nicaragua y Uruguay las clases políticas y dirigentes están intentando otras formas de combate a la inseguridad ciudadana y la violencia urbana. Están reinventando sus autoridades como Municipios Participativos. Por desgracia, el resto de los países no conoce o no desea cambiar sus estrategias o prácticas de políticas públicas. Por aquellas que partan de la inclusión de los ciudadanos en los asuntos públicos de la ciudad, podemos hablar claramente de decrepitud generalizada de

las clases políticas. Encerrados en sus oficinas, de corredores de seguridad en edificios resguardados y video vigilados, no comprenden o invisibilizan las realidades sociales de alta criminalidad y violencia crónica. La forma más efectiva de combate a la criminalidad y la violencia es negarla.

Las clases políticas, los gobiernos locales aparecen poco entusiasmados con nuevas formas de pensar la ciudad y los problemas de la violencia y la inseguridad. Las agendas locales se conforman de otros contenidos alejados de la ciudadanía y de las necesidades de primer orden. Los chismes y los dimes y diretes acaparan la atención de la clase política en los medios tradicionales y digitales, la prensa escrita coadyuva en hacer de la política todo un espectáculo. Los asuntos públicos de la ciudad se ven desplazados a segundo plano o papel secundario para las clases dirigentes que están ocupados preparando su próxima campaña electoral, abandonando la posibilidad de construcción de agendas ciudadanas que tengan como ejes:

- a) Agenda cultural y juvenil
- b) Agenda de seguridad ciudadana
- c) Una agenda de política urbana en zonas marginadas con altos índices de desigualdad y precarización social;
- d) agendas para la atención de la salud y la educación en zonas con alta criminalidad y violencia crónica.

Se privilegian corredores de seguridad para las empresas y centros de trabajo (transnacionales), corredores turísticos y urbanos donde se encuentran las clases de altos ingresos y mejor calidad de vida. Aparecen las policías turísticas y bancarias, descuidando la policía comunitaria y de proximidad. Se endurecen las ordenanzas públicas criminalizando a jóvenes y poblaciones en pobreza urbana, además de condenar a la ciudad a la descomposición y fragmentación social, complaciendo el amurallamiento de las ciudades y propiciando la segregación residencial y social. Los más débiles en términos de economía, enfrentan los peores malestares de la criminalidad y la violencia, los efectos “migración cucaracha” que producen los amurallamientos urbanos dejan al descubierto a las urbanizaciones de las periferias abiertas a la delincuencia de millones de trabajadores urbanos e industriales que dejan solas sus casas durante las largas jornadas de trabajo y enfrentan los robos a casa-habitación por no contar con bardas,

murallas o rejas que las protejan de los delincuentes en su ausencia. No cuentan con vigilantes y video vigilancia que les mantenga alejados a los delincuentes y criminales.

La clase política y empresarial va en decrepitud en su relación de cercanía con los ciudadanos, al igual que los gobiernos locales que toman distancia de sus habitantes, solo se comunican con los ciudadanos para el cobro de los prediales, impuestos y permisos para licencias de conducción de autos o permisos de construcción o para la apertura de alguna pequeña empresa. Los recibos de cobro de los municipios y ayuntamientos, llegan con rapidez y sorprendente celeridad a los domicilios de los ciudadanos, cargados de intereses y penalizaciones en caso de omitir el pago o retrasarlo. Los descuentos son escasos y bajos porcentualmente. La evasión de impuestos o pagos a las autoridades son muy penalizadas y perseguidos, en cambio los criminales muchas veces están sueltos. Estas tensiones entre ciudadanos y sus autoridades generan descontentos y sinsabores ciudadanos. En el caso mexicano, el Dr. Gerardo Esquivel Hernández, quien es profesor-investigador El Colegio de México, menciona en su investigación de 2015: *Desigualdad Extrema en México. Concentración del Poder Económico y Político*, que sólo “el 10% más rico de México concentra el 64.4% de toda la riqueza del país”. Y añade lo siguiente:

“Nuestro país está inmerso en un ciclo vicioso de desigualdad, falta de crecimiento económico y pobreza. Siendo la decimocuarta economía del mundo, hay 53.3 millones de personas viviendo la pobreza. La desigualdad ha frenado el potencial del capital físico, social y humano de México; haciendo que en un país rico sigan persistiendo millones de pobres. ¿En dónde está esa riqueza mexicana? En términos de renta y capital, se encuentra concentrada en un grupo selecto de personas que se han beneficiado del poco crecimiento económico del que ha gozado México en las últimas dos décadas. Así, mientras el PIB per cápita crece a menos del 1% anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplica por cinco” (Esquivel: 2015, p. 5).

La concentración de la riqueza por parte de unos cuantos como en el caso mexicano, es posibilitado gracias a los apoyos directos de las clases gobernantes, que dan todas las condiciones para que los negocios de un grupo selecto de

personas prosperen en medio de la adversidad económica. Por ello, la percepción de la ciudadanía respecto a sus gobiernos y gobernantes es cada vez más negativa, la decrepitud y falta de voluntad política aparece como la marca del ejercicio de la política una vez que se es gobierno. La teoría política como ciencia del gobierno, requiere actualizarse frente a los abandonos y desgobiernos de autoridades y representantes populares, nos preguntamos ¿dónde quedó el coraje cívico? que promovían los grandes autores de esta disciplina. Si como menciona el politólogo Javier Roiz:

“La teoría política se convertía así de verdad en la ciencia del gobierno —de quién manda y quién obedece— y de cómo desmontar la tiranía, ambos esfuerzos basados en una apuesta por la vida que se apoya en la inteligencia y el coraje cívico” (Roiz: 2014, 133).

Desgobierno, descontento y déficit ciudadano

Hasta aquí, hemos hablado de los procesos sociales que pensamos, están caracterizando a las sociedades-ciudades latinoamericanas, incluidas sus consecuencias construidas como malestares que impactan directamente en las poblaciones más desprotegidas. Estando solos, los habitantes, desatendidos de sus gobiernos locales y políticos de proximidad que ya no representan las necesidades de los ciudadanos, sino, que se distraen en las tramas electorales, las candidaturas partidistas y de corrupción en las que frecuentemente se ven envueltos los políticos.

Por ello, se cree pertinente la pregunta que se formuló hace años el profesor Armando Silva en su libro *Imaginario urbano*; ¿Qué es ser urbano en nuestras sociedades de América Latina? a la que respondió:

“No puede afirmarse que ello corresponde tan solo a una condición material de quienes habitan la ciudad. Si lo anterior es cierto, no es suficiente. Por eso mismo existen razones, que podrían llamarse fundamentales, para buscar otras justificaciones que entreguen demostraciones más convincentes. Con lo dicho quiero resaltar que me propongo estudiar la ciudad como lugar de acontecimiento cultural y como escenario de un efecto imaginario” (Silva: 2006; 55).

Es decir, si nos sumamos a la propuesta de Armando Silva y sus imaginarios urbanos o lo que él llama, urbanismos ciudadanos, nos colocan en la posición de tratar de entender la ciudad no sólo desde nuestra experiencia física y material, sino de imaginarla. Aun así, aunque seamos capaces de imaginar la ciudad, el desánimo de los ciudadanos enfrenta un doble reto como; la autogestión ante el abandono de las instituciones gubernamentales en políticas de salud, educación, cultura, empleo y calidad de vida, es decir, la autogestión sin recursos, sólo contando con la suma de muchas voluntades ciudadanas de vecinos que se reúnen para plantear como reducir su inseguridad ciudadana y marginalidad social y, por otro lado, la protesta y denuncia ciudadana ante la falta de gestión a los asuntos públicos de la ciudad, ésta, que confronta a los ciudadanos con sus autoridades locales y políticos, que puede provocar confrontación y enfrentamiento con los cuerpos policiales y de seguridad de la ciudad y la represión por parte de la misma.

En este contexto de <<política de abandono>> (Herrera: 2007), los ciudadanos frustrados y descontentos pueden subir el tono de sus demandas o autogestiones, todos pierden, sobre todo los habitantes de las zonas urbanas degradadas. Las poblaciones de la ciudad sometidas a estas lógicas de abandono institucional no pueden practicar su ciudadanía de manera plena en lo civil, político-jurídico y lo social. Se genera entonces, un déficit ciudadano, una ciudadanía disfuncional y mediada por las malas gestiones locales y políticas públicas poco claras y efectivas. El déficit ciudadano no abona a la democracia como forma de cultura política íntimamente relacionada con las formas y prácticas de vida urbana.

Se crean zonas urbanas completas dentro de la ciudad o en sus márgenes (la mayoría de las veces) de desgobierno, sin autoridad pública en términos de gestión y administración. La seguridad ciudadana es precaria e insuficiente, las calles mal alumbradas y en muchos casos sin pavimento, dificultan su uso como espacio público seguro y ciudadano. En muchas ciudades de América Latina, más focalizadas en América Central y países como México, las mujeres sufren violaciones y violencia verbal, además de una serie de delitos que pueden ir desde el asalto, el cobro de piso (peaje del barrio o colonia), el hostigamiento sexual, hasta el homicidio. Lo que desde la perspectiva de género se ha trabajado como

feminicidio. Desde donde se escribe este breve ensayo. Los feminicidios han sido uno de los principales problemas sociales desde 1993 a la fecha sin tener los resultados esperados, al menos los que esperaban las organizaciones y los y las familiares de las víctimas.

Así, la ciudadanía está incompleta, los vacíos de autoridad dejados por parte de los gobiernos locales y estatales (provinciales o departamentales) son llenados por pequeños grupos de delincuencia organizada con redes de prostitución, narcotráfico, y otros tipos de delitos que ponen en situación de alto riesgo a las poblaciones de estos espacios geográficos representados en barrios, chabolas, favelas, pueblos jóvenes, barriadas en barrancos, villas miseria, o cinturones de marginalidad en las periferias y zonas suburbanas de las ciudades centrales (Borja). Estos desgobiernos, precarizan aún más la vida de sus habitantes, recrudescen las relaciones sociales entre los ciudadanos de la ciudad y los convierten en víctimas de los peores malestares sociales, económicos y ambientales de las urbanizaciones que especulan con la vida de los trabajadores de bajos ingresos, tratándolos como desecho o un producto descartable.

Los desgobiernos en las ciudades son abundantes y evidentes, los desgobiernos de las ciudades latinoamericanas son parte de las historias de vida de miles de habitantes de las barriadas fuera de toda centralidad urbana, surgen malas experiencias de vida que hablan de robos, homicidios, violaciones, peleas domésticas, enfrentamientos entre pandillas y todo esto sin la presencia de ningún tipo de autoridad gubernamental, que cuando esporádicamente aparecen son como testigos silenciosos de estos desgobiernos que han terminado por sobrepasar la capacidad operativa de sus policías y cuerpos de investigación y administración de justicia.

Los descontentos ciudadanos se han hecho manifiestos en algunas ciudades acosadas por la violencia urbana y social, en Colombia, México, Honduras, Venezuela y otros países de la región, el crimen organizado se apodera de zonas enteras de barriadas empobrecidas y sin futuro, dejando en la delincuencia organizada, los asuntos públicos de barrios enteros. El narcotráfico empieza a gestionar la vida cotidiana de millones de ciudadanos, suple funciones gubernamentales de vigilancia y control de los espacios públicos, comercio informal y formal bajo cuotas de “protección” y permisos de venta y comercialización de todo tipo

de artículos, además de controlar los usos de suelo mediante el hostigamiento y amedrentamiento de los colonos y habitantes de las periferias urbanas.

El narcotráfico ha tendido toda una red alterna de gestión en la ciudad, otorga empleos a miles de jóvenes desescolarizados y desempleados, genera redes de solidaridad y camaradería supliendo las relaciones familiares y de trabajo. En Colombia se ha popularizado la expresión “los descartables”. Estas redes de amistad asumen y sustituyen a la familia como institución micro-social encargada de la socialización primaria de miles de jóvenes precarios y desplazados de los centros de trabajo, la familia y la escuela. Así, la academia latinoamericana comienza a llamarlos “ceros social”, lo que los coloca y declara en una “muerte social”. Que mejor expresión para ejemplificar la situación de estos millones de jóvenes latinoamericanos que habitan las peores urbanizaciones de la región. Tani Marilena Adams lo toma de Henrik Vigh.

“El concepto de muerte social que ofrece Henrik Vigh resulta útil para profundizar nuestra comprensión de la situación que enfrentan los jóvenes —varones jóvenes, en particular— en sus contextos actuales. El autor utilizó el término para describir la situación que encaran los jóvenes en Guinea Bissau, donde un largo período de decaimiento económico hizo que un aspecto central de sus vidas fuera “la ausencia de la posibilidad una vida digna”. Vigh sugirió que en estos casos la muerte no es física, sino social” (Adams: 2013; 35).

Sin espacios culturales, de esparcimiento, faltos de áreas verdes y deportivas, expuestos a la violencia urbana, a la programación de las vidas en los medios de comunicación que generan estereotipos y formas de vida basadas en el consumismo y la compra superflua y volátil. La muerte social aparece como un elemento de las poblaciones de jóvenes en las áreas marginadas, un rasgo que desgraciadamente parecería ser constitutivo de millones de jóvenes latinoamericanos, veamos la siguiente cita:

“En términos de distribución demográfica de Latinoamérica, si bien se ha entrado en una fase de desaceleración de la tasa de nacimiento y defunciones, es decir, en una fase transitiva hacia el envejecimiento de la población, la región aun es y será en el corto plazo una sociedad preponderantemente joven. En Latinoamérica

y el Caribe la población juvenil (entre 15 y 29 años) representa alrededor del 28% del total de habitantes (Tejeda y Vânia, 2008), con aproximadamente 140 millones de jóvenes. Y la edad promedio en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe es aún menor de 20 años (Sen y Kliksberg. 2007)... Una de las consecuencias directas de la falta de integración de los jóvenes al mundo del trabajo es la pobreza. De 140 millones de jóvenes latinoamericanos y Caribeños (entre 15 y 29 años) cerca del 41% (58 millones) vivía bajo la línea de la pobreza en el 2002 e incluso el 15% (21 millones aprox.) se encontraban bajo la línea de la indigencia para ese año (Sen y Kliksberg. 2007). Eso sí con una gran dispersión entre los países de la región que va desde 13,1% de jóvenes pobres y 2,4% de jóvenes indigentes en Chile, a 66,3% y 40,3% respectivamente, en Honduras (CEPAL/OIJ, 2008)” (ONU-HABITAT: 2011; 14-17).

Los jóvenes y los (in)migrantes frente a la ciudadanía

En la actualidad, los inmigrantes aparecen como forasteros amenazadores que llaman a las puertas, las echan abajo o las cruzan a hurtadillas para entrar en sociedades que son más ricas que aquellas de las que proceden. Los países receptores de la inmigración actúan como si no formaran parte del proceso, pero, de hecho, son parte de él. Las migraciones internacionales se sitúan en la intersección de diversos procesos económicos y geopolíticos que vinculan a los países implicados, no son el simple resultado de la búsqueda individual de mejores oportunidades (Sassen: 2013).

El descontento ciudadano (si aún podemos hablar de ciudadanía) se coloca como parte de la agenda pública de los gobiernos y políticos del momento, desconcertados sin saber qué hacer, promueven políticas de seguridad más duras y extremas, los jóvenes y los (in)migrantes son las primeras víctimas de estas prácticas gubernamentales. La criminalización de los jóvenes y los migrantes va en aumento en muchas ciudades del sur global, se modifican las normativas y reglamentos de Ayuntamientos y gobiernos provinciales, departamentales o estatales para incluir nuevas faltas y sanciones administrativas contra la protesta o la lucha social. A los migrantes llegados del campo o áreas rurales, se les observa con recelo ante su permanencia temporal en los lugares de tránsito y cruce hacia las zonas fronterizas o las grandes metrópolis en busca de trabajo y mejores niveles de ingreso y vida.

“Cualquier área urbana del mundo ha visto cómo se inflaba su burbuja inmobiliaria al tiempo que aumentaba sin freno la afluencia de inmigrantes empobrecidos, a medida que el campesinado rural se veía desposeído debido a la industrialización y comercialización de la agricultura” (Harvey: 2013; 31).

Así, los jóvenes sin empleo y escuela, apartados de la sociabilidad que dan

el trabajo y la escuela aprenden otras formas de relacionarse y vivir la ciudad. Las ciudades fronterizas en el norte de México con sus 3,200 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, son espacios de llegada de miles de inmigrantes centroamericanos (500,000) anuales y de migrantes internos que en el mejor de los casos tienen un par de meses de trayectoria buscando el cruce. Llegan a ciudades como Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Agua Prieta, Nuevo Laredo, entre otras, al borde del agotamiento físico y emocional, las violaciones son frecuentes en mujeres y hombres que son víctimas del crimen organizado y las propias autoridades migratorias de todos los países por donde cruzan en su largo viaje. Incluso en los últimos años, se ha extendido la práctica del uso de pastillas anticonceptivos en las mujeres migrantes para no quedar embarazada.

En su mayoría, son jóvenes migrantes, mujeres y hombres buscando un lugar donde trabajar y ganar algo de dinero para reenviar a sus lugares de origen, a su llegada, son subcontratados y subempleados en actividades mal remuneradas y sin ningún tipo de prestación, se convierten ya dentro de los Estados Unidos en extranjeros sin ningún tipo de ciudadanía, es decir, sin derechos. Esta situación, los expone al extremo social de sufrir las peores injusticias que llegan al encarcelamiento por faltas menores o administrativas que se pagarían con cualquier fianza, pero su condición extrema como inmigrantes radicaliza su experiencia siendo sometidos a maltrato y abuso. Lo mismo sucede una vez que son deportados, según datos de Carlos Amador de la Universidad de California:

“Es importante destacar que el número de deportaciones desde 2009 en la administración del presidente Obama ha sido de aproximadamente 400 mil personas al año, dando a la fecha un total de 1.6 millones de personas deportadas de Estados Unidos. Lo anterior nos permite entender que el caso de Steve Lee es una excepción frente a la deportación sistemática” (Amador en Valenzuela: 2015, 318).

Lo mismo sucede con los jóvenes y adultos que sin trabajo, dejan sus comunidades para ir a la “gran ciudad” en busca de mejores ingresos, en toda América Latina los desplazamientos humanos de las áreas rurales a la ciudad se transforman en la sangría poblacional de pueblos y comunidades enteras, surgen comunidades de mujeres y ancianos que sin varones, deben hacer el doble trabajo para la cosecha y cultivo de los campos. Los niños sufren el abandono por

parte de los adultos y en muchos casos, jamás vuelven a ver a los padres, quienes rehacen sus vidas en los lugares de destino y en muchos casos olvidan a sus familias. Una mirada general a las estadísticas de los jóvenes nos dan una idea de sus condiciones adversas y contradictorias, José Manuel Valenzuela Arce, sociólogo del Colegio de la Frontera Norte y especialista en estudios juveniles nos muestra que según:

“La información de la Organización Internacional del Trabajo resulta contundente para ilustrar esta afectación diferenciada, pues tan solo en diez años (1997-2007), fueron excluidos del mercado de trabajo 121.7 millones, pues el número de jóvenes creció en 147 millones, mientras que solo 25.3 millones lograron incorporarse al mercado laboral (CONAPO, 2010, p. 44). De la misma manera, la OIT destaca el mayor incremento del desempleo juvenil frente a otros grupos poblacionales, pues representando 24.7% de la población mundial en edad de trabajar, aporta 40.2% de los desempleados (CONAPO, 2010, p.45), mientras que en 2008, los jóvenes desempleados llegaron a 72.2 millones (CONAPO, 2010, p. 46-47). La ONU, considera que debido a la recesión económica, en 2009, la tasa de desempleo juvenil en el mundo llegó a 81 millones” (Valenzuela: 2015, p. 45).

Aunado a lo que refiere Valenzuela sobre el desempleo juvenil, y en un contexto de alta movilidad poblacional, la ciudadanía no se ejerce, mucho menos los llamados derechos de cuarta generación como los son: a) el derecho a la ciudad y b) el derecho a la seguridad humana, ni los derechos urbanos, ni los derechos de una seguridad ciudadana están al alcance de estas poblaciones flotantes, que debido a su condición migratoria, los precariza y hace vulnerables a la pobreza y exclusión social.

Qué implica pensar los derechos a la ciudad, según Jordi Borja:

“El derecho a la ciudad es de uso reciente en el debate actual sobre la ciudad y su futuro. El término, en su forma actual o con palabras similares, se había empleado a veces como <<ampliación>> del derecho a la vivienda, a lo que se añadían los servicios básicos vinculados a aquella como la red de saneamiento, electricidad, etc. y otros servicios de naturaleza universal (necesarios para todos) como transporte, escuela, puesto sanitario, etc. actualmente, a inicios del siglo XXI, el <<de-

recho a la ciudad>> no se limita a reivindicar elementos básicos para sobrevivir en el entorno urbano. Propone un concepto de ciudadanía para la ciudad de hoy de mañana. Entiende la ciudadanía como igualdad de derechos sociales, políticos, económicos y culturales y los concreta en su relación con la ciudad como marco físico en el que se ofrecen mediante las políticas públicas un conjunto de bienes y servicios” (Borja: 2013; 265).

Por otro lado, el derecho a la seguridad humana, incluye el derecho a la seguridad ciudadana, aquella que no está regida únicamente por la rectoría del estado, sino que es compartida con corresponsabilidad por parte de los ciudadanos. Pero por desgracia, y por lo general, los migrantes/inmigrantes se establecen en zonas marginales y periféricas de las ciudades, forman nuevas colonias o barrios sin servicios públicos ni acceso a ningún tipo de centralidad urbana que los conecte al tejido urbano de la ciudad. También, los expone a los abusos de las autoridades y bandas delictivas ya sea del crimen organizado o delincuencia habitual de las ciudades. Los derechos son algo lejano y extraño para estas comunidades migrantes, son mirados en los centros comerciales y residenciales con desconfianza social y por lo general se les evita amurallando los barrios y fraccionamientos de altos ingresos. Se contratan y trabajan de manera precaria, todo lo anterior, provoca frustraciones y descontentos, el sueño inicial al momento de migrar ha desaparecido o simplemente ya no es el mismo.

Nada de lo escrito anteriormente, abona y nutre a la ciudadanía, se convierte en una latente demanda de derechos ciudadanos y los llamados derechos de cuarta generación. Nunca, como antes en la historia reciente de la historia, la desigualdad social, amenaza la vida de las democracias latinoamericanas. Ejércitos de jóvenes desplazados, descontentos y desahuciados se agolpan en las principales calles y Avenidas de las ciudades de la región; las drogas, el comercio informal, la delincuencia (en todas sus formas sociales y criminales), la desescolarización, la desafiliación (por falta de trabajo) y otras expresiones sociales del malestar, se concatenan en las periferias sin ciudadanía. Para millones de latinoamericanos, la ciudadanía sigue siendo una ficción, una simulación o en el mejor de los casos, un sueño. Son las promesas incumplidas de la tan anunciada Modernidad.

“Ante la implosión de las certezas modernas, los entramados sociales se encuentran marcados por aprehensiones e incertidumbres. En este marco se ubica el incremento en los niveles de desempleo y de empleo precarizado, la atenuación de la educación como recurso certero de movilidad social, la carencia de prestaciones sociales. Por si fuera poco, las y los jóvenes, perciben y resisten respuestas institucionales signadas por fuertes elementos de incomprensión, estereotipamiento, estigmatización y criminalización” (Valenzuela: 2015, 43-44).

De lo citado, se sabe que la más afectada de las instituciones, es quizás, la Democracia. La crisis de representación y de gestión por parte de los que ocupan los cargos de elección popular, es evidente. Los políticos una vez electos, se desprenden literalmente de los votantes, de su electorado y lo peor de todo, de sus ciudadanos. Conocemos de casos de corrupción por parte de la clase política y dirigente en muchas de las ciudades, el caso más reciente y sonado es el del Presidente del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Distrito Federal en México, quien es acusado de dirigir y financiar con recursos públicos, una red de prostitución que usaba al Partido como pantalla, por ahora ha sido cesado temporalmente de su cargo partidista, pero como casi siempre, la cosa no llegará más lejos. Lo mismo sucede con gobernadores de varias entidades federativas en México donde la corrupción y el endeudamiento público son la marca de los últimos gobiernos del PRI.

Entonces, hablamos de una democracia deficitaria por doble vía, por un lado, los representantes populares y dirigentes de los partidos políticos han dejado de representar a la ciudadanía y sus necesidades, por otro, la ciudadanía muestra un desgaste ciudadano y desconfianza ante las instituciones democráticas, es decir, hablamos de un déficit democrático, donde el siglo XXI será su momento histórico de reestructuración, preguntándose por qué tipo de democracia y ciudadanía se quiere refundar la democracia. El reto es monumental si como sabemos, los políticos actuales, no están intelectualmente a la altura de las circunstancias. Aun así, hay cosas por hacer, ya que para esperanzas de todos, la democracia es perfectible.

Sin embargo, los rumores desde algunas ciudades europeas y en Sudamérica, donde algunos municipios y alcaldías hacen énfasis en la necesidad de reconfigurar los intereses para la gestión ciudadana y no para los promotores

inmobiliarios y los especuladores. Autores como Jordi Borja, Mike Davis y David Harvey, han realizado esfuerzos exhaustivos en sus últimas publicaciones describiendo y reflexionando sobre las revoluciones y contrarrevoluciones urbanas y los derechos urbanos materializados en el llamado Derecho a la ciudad. Estos rumores, como lo escribe Harvey en uno de recientes libros, crea <<Espacios de esperanza>>. Desde la antigüedad, la ciudad griega y romana, pasando por las ciudades medievales y barrocas, llegando a las ciudades modernas de corte industrial y posteriormente postindustriales, albergó formas de gobierno democráticas o comunitarias, y desde entonces, la democracia ha sido perfectible, es el reto para las ciudades del siglo XXI.

La democracia perfectible: rumores ciudadanos

La democracia representativa en América está en crisis, la ventaja es que es perfectible, se puede remediar, pero requiere del esfuerzo ciudadano. La ciudadanía es aquella entidad única que puede mejorarla y hacerla funcionar de nuevo (en aquellos lugares donde realmente funcionó) para la cual, se requiere participación, compromiso y como decía Hannah Arendt, una buena dosis de coraje cívico. La democracia como bien común, terminó quedando en manos de unos cuantos políticos corruptos y despilfarradores. ¿En dónde radica entonces realmente el problema, sería tan fácil como pedirles que le regrese la democracia de nuevo a la ciudadanía e iniciar su recomposición?

Los rumores ciudadanos hablan de que en muchas regiones de América Latina, se ha intentado en las últimas décadas recuperar la democracia sin mucho éxito, debido a la respuesta agresiva y violenta de los gobiernos locales y las clases dirigentes que se atrincheran en dichos gobiernos. La recuperación y reapropiación de la democracia no será tarea fácil, pero debe de iniciarse por todos los medios, como lo señala en su último libro David Harvey, *Ciudades rebeldes*. El autor, plantea una nueva revolución urbana que integre el derecho a la ciudad, al parecer la revolución y rebeldía de las ciudades será el único medio disponible para recuperar no solo las ciudades y sus gobiernos locales, sino la democracia en sí. Es en las ciudades donde radica el ejercicio de la ciudadanía y en ellas por su proximidad con las autoridades locales, la representación es directa.

Como se mencionó anteriormente, encontramos un déficit ciudadano que provoca una democracia deficitaria en la que es difícil confiar y creer, cuando los gobiernos y autoridades se enriquecen a costa de los ciudadanos y sus impuestos. El desgaste de las instituciones políticas y sociales es claro en muchos países de la región, el desorden administrativo, la falta de planeación urbana y la ausencia de voluntad política por resolver las necesidades de la población, hace mella en las esperanzas de una verdadera representación política que dé prioridad a los temas de inseguridad, violencia y crisis económica. El desempleo que hemos descrito antes, la precariedad y la pobreza, son una consecuencia inmediata de la crisis brutal de las instituciones políticas y la democracia.

Cómo arreglar un mundo tan complejo que no deja de crecer y demanda nuevas necesidades y servicios. Cuando la democracia ha dejado de ser funcional, al menos para una inmensa mayoría y solo es usada para unos cuantos que aprendieron a vivir de ella apelándola desde la tribuna o el curul. El verdadero riesgo es dejar a la democracia en un estado terminal donde sea imposible recuperarla como forma de gobierno. Si han sido los hombres quienes la han dejado en ese estado de decadencia y descomposición, deben de ser los hombres y mujeres, quienes la recuperen y la pongan al servicio de todos.

Pero habrá resistencias e inercias que vencer, la corrupción y los corruptos, además de los corruptores, los vividores, los que han visto en la democracia una forma de sacar provecho y servirse de ella de mala manera. La tarea no será fácil, ni rápida, llevará tiempo limpiarla y sanearla, drenando desde su interior la escoria que la debilita y corroe. Son políticos, dirigentes, gobernantes, autoridades y por desgracia, muchos servidores públicos que la han desacreditado. La democracia hoy enfrenta adversarios fuertes y poderosos que no están dispuestos a entregarla a los ciudadanos, estos, deberán pelear por ella, como ha sucedido a lo largo de su historia.

Parte 3

Urbanismo y Fronteras

Inseguridad y violencia
en el siglo XXI

En este apartado, se habla sobre las consecuencias de todo lo que se ha discutido en los capítulos anteriores, como; la descomposición social, la degradación urbana, el desgaste y descontento ciudadano y la precarización de la vida en todas sus formas. La violencia en el sur global, irrumpe en las ciudades y barrios desafiados, con baja escolarización y desempleo, donde millones de jóvenes y mujeres, niños y adultos mayores se convierten en las primeras víctimas de la inseguridad pública. La violencia urbana y social, se convierten rápidamente en una problemática de dimensiones extraordinarias, que incluso pone en riesgo el crecimiento económico de la región latinoamericana.

Los costos de la violencia y la inseguridad ciudadana afectan seriamente el tejido social, la cohesión y al ejercicio pleno ciudadanía, así, los gobiernos locales no logran controlar los índices de violencia urbana debido a su incapacidad de entender las nuevas lógicas en las que opera la nueva violencia urbana en el Siglo XXI. El viejo enfoque de la “seguridad pública” y la “seguridad nacional” donde el Estado guardaba la rectoría de la seguridad, y donde solo las autoridades e instituciones de los gobiernos podían actuar sobre la inseguridad, no es suficiente para comprender como actúan las bandas delincuenciales y los grupos del crimen organizado, la postura que asume este ensayo, es la del Enfoque de la seguridad ciudadana, donde la rectoría y responsabilidad de la seguridad es de todos, una seguridad que se construye desde abajo con la participación ciudadana y la inclusión de todos los sectores sociales y económicos de la sociedad.

Sin que esto, signifique quitar la responsabilidad de la seguridad al Estado y a los gobiernos locales, sobre todo en la parte de los presupuestos. La seguridad ciudadana es vista como parte de la Seguridad humana, misma que está integrada en los llamados derechos de 4ta. Generación, es decir, como parte de los Derechos Humanos. El derecho de las personas a la seguridad ciudadana se enlaza con el derecho a la ciudad, en el siglo XXI, estos derechos definirán las nuevas formas de estructuración de la vida urbana de millones de individuos si pensamos que estamos frente a un milenio de ciudades. De ahí la importancia que se dedica y deben dedicar gobiernos y autoridades locales, estatales e internacionales a la seguridad ciudadana como una vía para frenar y disminuir la violencia urbana y social que está asolando a la región latinoamericana.

Por otro lado, estas violencias (social, urbana, estructural, de género, se-

xual, intrafamiliar, etc.), además de todas las consecuencias antes mencionadas, también han provocado un nuevo fenómeno urbano digno de estudio para urbanistas y sociólogos urbanos: el “amurallamiento de la ciudad” o la aparición de “ciudades de muros” como los llama la socióloga brasileña Teresa Pires do Rio Caldeira en un libro recientemente publicado y traducido al español *Ciudad de muros*. El amurallamiento de las ciudades por parte de las clases medias y altas en América Latina, ha dejado a las clases de bajos ingresos en una posición de indefensión frente a la delincuencia organizada y las bandas del crimen organizado, han quedado fuera de los muros, mallas y rejas de los fraccionamientos cerrados y privados que contemplan la incertidumbre de los más pobres y precarios, que de nueva cuenta asumen los platos rotos de las fallas de los sistemas e instituciones encargadas de la seguridad ciudadana.

Este fracaso sobre la seguridad, organizó a las ciudades en nuevos formatos de exclusión social y segregación residencial que pronto se convirtió en segregación social y racial. Las clases bajas devinieron en clases peligrosas, al igual que los in/migrantes y jóvenes precarizados que recorren las ciudades en busca de la subsistencia cotidiana. La segregación espacial partió las ciudades, las segmentó y fragmentó por zonas de ingresos económicos, evitando toda mezcla social y racial. Los pobres en América Latina fueron segregados a los peores rincones urbanos de la región gracias a la complicidad de los gobiernos locales y las elites empresariales de cada país. Aparecieron nuevas ordenanzas públicas que habilitaban la construcción de muros y bardas de concreto y piedra, instalando mallas y rejas metálicas que excluyeran a los más pobres y “peligrosos”, las ciudades fueron cambiando su fisonomía y adaptando los servicios públicos de recolección de limpieza, alumbrado y drenaje a los tiempos y seguridad de los fraccionamientos cerrados al estilo norteamericano.

Así, para la última parte de este apartado, se hace una reflexión sobre la aparición de fronteras interurbanas como consecuencia del amurallamiento de las ciudades. Las fronteras que surgen de esta nueva espacialidad urbana, de esta nueva geografía urbana, no son otra cosa que prácticas de exclusión urbana que vuelven a reabrir el viejo debate sobre “el problema del otro”, ahora, el “otro”, no es un otro antropológico y extra urbano, es el otro que vive en la ciudad, es el migrante recién llegado o los pobres urbanos de tercera y cuarta generación

que sistemáticamente han sido excluidos y dejados fuera de los aparatos productivo-económicos de las ciudades. Son los pobres, los marginados y los desafiados de las colonias periféricas de la América Latina que tiene muchos frentes sociales, económicos y políticos abiertos por atender. Sumados a los problemas medioambientales que generan incertidumbre en la población.

En este ensayo, nos solo se habla de las fronteras interurbanas, sino de las fronteras interestatales que no dividen solo países, sino que también dividen culturas y proyectos civilizatorios con contenidos y sustancias distintas, con una serie de configuraciones culturales y sociales que incluyen identidades, nacionalidades e historias diferenciadas estructuralmente. Se hace énfasis de manera especial sobre la frontera de 3,200 kms. entre México y los Estados Unidos. Ahí, se analizan las nuevas tecnologías políticas de vigilancia usadas por parte de los Estados Unidos como prácticas de exclusión del otro no estadounidense, sobre el inmigrante mexicano y centroamericano, además de una variedad de nacionalidades que cruzan la frontera buscando el sueño americano. Estas fronteras (las urbanas y las internacionales) son tema de amplios debates y seminarios académicos, policiales y militares que tratan de descifrar qué uso político, económico y social harán de ellas en las ciudades con altos índices de violencia urbana e inseguridad.

Ciudad y violencia en el Sur global la inseguridad ciudadana

El 2010 el Hemisferio Occidental tuvo el segundo mayor número de homicidios en el mundo (144 mil) después de África (170 mil), y muy por encima de Asia (128 mil), Europa (25 mil) y Oceanía (1200). Si se toma en cuenta la población, también ocupó el segundo lugar con una tasa de 15.6 homicidios por 100 mil habitantes frente a 17.4 de África y un promedio mundial de 6.9 (Costa: 2012; 1).

El modelo actualmente vigente de ciudad produce clases de violencias nunca antes vistas (sicariato, coches bomba) (Carrión: 2010).

Aún y cuando —siguiendo la tesis de Fernando Carrión— las tasas de urbanización han tenido una disminución en la región latinoamericana, pero las tasas de homicidios se han incrementado significativamente¹ en los últimos años, todo apunta, según datos estadísticos de Organismos Internacionales (ONU: PNUD, OMS, OIT, FAO, OEA, CEPAL, OCDE, BM, FMI, BID, y otros) reportes e informes de Organismos No Gubernamentales y gobiernos Estatales y locales, que América Latina ha entrado en un largo ciclo de violencia urbana. Provocado por las tensiones y contradicciones estructurales del Sistema-Mundo capitalista. Estas contradicciones estructurales del sistema global se convirtieron desde las dos últimas décadas en una fábrica de pobres. La desigualdad social y marginación de amplios sectores de la población los ha metido en un ciclo de pobreza urbana acompañada de precarización laboral, exclusión y descomposición social. Así, pobreza urbana y violencia urbana, cada vez son dos fenómenos que debemos analizar en conjunto, obteniendo de ello, algunas de las pautas que están posibi-

¹ Fernando Carrión aconseja el no plantear mecánicamente que mientras mayor sea la urbanización, mayor será la violencia. Por ello, es importante destacar que a la disminución de las tasas de urbanización, le ha seguido el incremento de la violencia con estadísticas nunca vistas en la historia reciente de América Latina.

litando semejante sangría para la región latinoamericana. Ya Fernando Carrión lo advertía desde los inicios de este milenio.

“Según el BID (2001), la información sobre violencia en América Latina arroja resultados francamente alarmantes: cada año cerca de 140,000 latinoamericanos son asesinados; 54 familias son robadas por minuto, 28 millones al año. La destrucción y transferencia de recursos aproximadamente del 14.2% del PIB latinoamericano. Estas cifras significan que “la violencia es, medida por cualquiera de estos indicadores, cinco veces más alta en esta Región que en el resto del mundo”. Por tanto, América Latina se ha convertido en el continente más violento del mundo. Y, adicionalmente, se señala que” la violencia es en la actualidad —sin duda— la principal limitante del desarrollo económico en América Latina” (Carrión: s/d; 13 y 14).

La violencia en el sur global, causa inmediatamente inseguridad ciudadana, las calles, espacios públicos (plazas, parques, monumentos, zócalos, etc.) barrios, colonias y ciudades enteras, son sometidas a la delincuencia común, que puede ir desde un asalto a transeúnte, robo de automotor, hasta la violación o asalto a casa-habitación con lujo de violencia extrema. Sin dejar de pensar la delincuencia que viene de las bandas del crimen organizado dedicadas al narcotráfico, o la trata de blancas, y otros ilícitos como el tráfico de órganos, armas y de seres humanos, casi siempre migrantes que intentan moverse de un país a otro para buscar mayores ingresos o seguridad. Así, la lógica de la inseguridad ciudadana instaló un miedo social que se extiende de ciudad a ciudad latinoamericana, inhabilitando la acción ciudadana y el coraje cívico para combatirla y erradicarla. En sus estudios, el sociólogo Enrique Oviedo, quien trabaja en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) evidencia como opera la lógica del miedo y el temor que instala la violencia urbana, en un artículo del autor publicado como Santiago, una ciudad con temor nos explica lo siguiente:

“Santiago es una ciudad con temor...Actualmente existe una alta percepción de inseguridad relacionada con la violencia delictiva que no se sustenta en las tasas de victimización. La percepción de inseguridad es mucho mayor que la victimización directa e indirecta. En los 12 meses que precedieron la realización de la

encuesta de este estudio, un 23 por ciento de los habitantes de Santiago había sido víctimas directas o indirectas de una acción de violencia, y alrededor de un 77 por ciento de los no victimizados manifestó sentirse inseguro en su casa, en su vecindario, en los medios de transporte colectivo o en el centro de la ciudad” (Oviedo: 1999; 4).

La violencia urbana, deja comunidades y barrios pobres desolados, donde la sangría de jóvenes varones y mujeres no cesa en la estadística de homicidios, muchos de ellos relacionados con delitos contra la salud, es decir, el narcotráfico. La muerte violenta, aquella que es inducida y provocada por ajustes de cuentas, cobros de piso, cuotas o comercialización de drogas es el tipo de muertes que aparecen en las estadísticas gubernamentales. Se suman por desgracia a estas, las relacionadas a los homicidios de mujeres, vinculados a los delitos sexuales y los conocidos feminicidios. La muerte física de cientos de miles jóvenes latinoamericanos es la peor de las vergüenzas de los encargados de la seguridad ciudadana. Aunada a la muerte social de los jóvenes, mencionada en la segunda parte de este ensayo.

La “doble muerte” —física y social— de miles de jóvenes los convierte en una población objetivo de las políticas públicas más urgentes de países y ciudades, por desgracia, muy poco gobiernos locales están realizando un esfuerzo real por frenar y controlar este problema. Lo que se impone es todo lo contrario, es la criminalización de estas poblaciones, se cambian y modifican ordenanzas públicas, criminalizando a los jóvenes y culpando a las mujeres de la violencia sexual debido a sus hábitos, prácticas y usos de los espacios públicos, horarios y estilos de vida que incluyen las formas de vestir y aparecer en estos espacios. Estas posturas conservadoras de gobiernos tanto de derecha como de izquierda, somete a las mujeres a un doble ataque, el de los criminales violadores y el de las autoridades que en vez de protegerlas, las criminalizan y tratan como delincuentes.

Además de estos ataques institucionalizados, también sufren de la violencia estructural que los y las constriñe económicamente a niveles de pobreza inimaginables. El trabajo mal remunerado, precario y temporal no les permite estructurar en otro sentido sus vidas, sus bajos ingresos y accesos a la educación,

seguridad ciudadana y la salud radicaliza su vulnerabilidad social. En muchos casos, estos contextos económico-sociales los acerca a la informalidad y la ilegalidad. Es mucho más fácil incorporarse a un trabajo informal que a uno formal, sin pagar impuestos y ser sistemáticamente fiscalizado. El dinero fácil promovido por parte del crimen organizado a miles de jóvenes, principalmente varones, les seduce y convierte en delincuentes con infinidad de funciones y tareas, las más conocidas además del narcomenudeo es la del sicariato. Esta actividad es una de las deseadas por los jóvenes debido a su alta rentabilidad y pago. Un joven en América Latina que ha entrado a este tipo de actividades tiene un promedio de vida muy corto que según varios estudios, ronda de los 25 a los 30 años. El peruano Gino Costa, experto en violencia urbana comenta lo siguiente:

“Las víctimas mayoritarias de los homicidios en América son hombres (90%), lo que supera la tendencia global (82%). México tiene un ratio de 6 víctimas masculinas a 1 femenina. Chile de 7 a 1 y Brasil y Colombia de 13 a 1, mientras que ratios igualmente elevados corresponden a los países centroamericanos, que fluctúan entre 7 a 1 en Costa Rica y 15 a 1 en Panamá (PNUD 2009-2010: 129). Los jóvenes son un grupo espacialmente vulnerable” (Costa: 2012; 3).

Todos los días, la prensa escrita y digital anuncia en sus encabezados de las secciones policiales y rojas, la estadística desagradable de los homicidios de cientos de jóvenes involucrados en este tipo de actividades ilícitas. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el Latinobarómetro y el Barómetro de las Américas reportan cifras alarmantes sin lograr movilizar a las clases políticas y dirigentes de las grandes ciudades e intermedias donde este fenómeno está causando los peores estragos. Alcaldes improvisados, con encargados improvisados en los asuntos de la seguridad pública y ciudadana se quedan atónitos frente semejantes estadísticas y evolución de la violencia urbana. La violencia urbana, también es social, se representa en todo tipo de clases y relaciones de intercambio, ya sean productivas o culturales.

Las relaciones entre vecinos medran la confianza social, no solo de los ciudadanos respecto a sus gobernantes, sino de ciudadanos respecto a otros ciudadanos, la conflictividad vecinal aparece en los barrios en pequeñas disputas por el espacio para estacionar sus vehículos, los asuntos de la recogida de

la basura calientan el ambiente, los animales de compañía salen del espacio doméstico dejando sus excrementos en el parque o la casa del vecino, algunos vecinos festejan cumpleaños, partidos de fútbol, básquetbol u otros como las peleas estelares de box, dejando las latas y botellas de la cerveza regados en los espacios comunes, además de subir a todo volumen la música que sale de sus aparatos de reproducción.

Una larga lista a cualquier tipo de acción que irrita a los más templados vecinos. Aun así, en muchas ocasiones, el miedo detiene a los ciudadanos más cautos y prudentes que sospechan de sus vecinos relacionados con cualquier tipo de banda delinencial o criminal, y en cadena, se van imponiendo los vecinos más fuertes, violentos, irracionales y furtivos. Sin criminalizar estas acciones, por parte de algunos ciudadanos, se parte de pensar que pequeñas acciones o actitudes que dañan a la mayoría, se quedan sin la sanción o reclamo debido al miedo social existente que tiende a naturalizar las malas actitudes que en otro contexto social sin violencia, serían rechazadas de inmediato por la mayoría sin temor a represalias.

Entonces, es la violencia social, donde los menos controlan a la mayoría. Sin caer en un determinismo social o darwinismo social, se acepta que en muchos de los barrios marginales de América Latina, los violentos asumen tareas de mando y control sobre los habitantes de amplios sectores urbanos, en algunos casos de urbanizaciones enteras. Las mafias y sus estructuras criminales generan redes de protección que les permiten acceder a los cobros de piso, a las cuotas para las pequeñas tiendas y abarrotes de barrio, en los cobros de peaje a los transeúntes que atraviesan los barrios, y una serie de ilícitos mirco-sociales que van encareciendo y precarizando aún más sus vidas en la comuna, chabola, favela o pueblo joven. Las autoridades locales encargadas de la seguridad ciudadana brillan por su ausencia o están comprometidas con estas estructuras criminales.

Sin embargo, existen buenas experiencias de autogestión y organización comunal, muchos habitantes hartos o desilusionados, arremeten con entusiasmo al desencanto de la ciudadanía. Se organizan comités de vecinos que se encargan de parte de la vigilancia de los barrios, o en otros casos según ingresos, se paga por la seguridad, estos comités gestionan las necesidades más apremiantes del barrio y la comunidad, se previenen de enfermedades y arman fiestas o

celebraciones para recaudar fondos y pagar ciertos servicios comunitarios como la construcción de una caseta comunitaria de vigilancia, el alquiler de maquinaria para reparar la infraestructura y el equipamiento urbano dañado por el mal tiempo o que ha sido vandalizado por pandillas o ladrones que sustraen el cobre del cableado eléctrico o doméstico dejando sin electricidad a barrios completos.

Se sabe de experiencias novedosas y atractivas que surgen entre mujeres de escasos recursos que se organizan para el cuidado colectivo de sus hijos mientras salen a trabajar, o para reparar alguna casa o construir algún cuarto o extensión en la casa. Se hacen rifas de artículos, celulares o aparatos domésticos y se reúne el dinero para el pago de alguna fianza o factura de hospital de vecinos detenidos u hospitalizados. Los colectivos pueden ser parte de la solución a un problema de amplias dimensiones. Pero de nuevo la lógica de la violencia urbana les inhibe o reprime en este tipo de esfuerzos comunes, muchas veces los grupos del crimen organizado no toleran este tipo de muestras de solidaridad y suelen castigarlas de manera extrema. Sin el gobierno a cargo, sufriendo la política del abandono y por otro lado, la amenaza constante de la violencia social, la autogestión sufre clausura y pronto son desarticuladas toda forma de organización comunitaria.

Más aún, se debe tener cuidado de no criminalizar la ciudad (incluidos los jóvenes y la pobreza), si bien, la urbanización de la violencia se da en el espacio físico de la ciudad, eso no quiere decir que la ciudad en sí misma es productora de violencia, en este ensayo, se cree en la responsabilidad que deben asumir los gobiernos locales (y autoridades de otros niveles de gobierno) debido a las malas políticas de seguridad pública y seguridad ciudadana, las fallidas intervenciones en programas de prevención y persecución del delito se han limitado a más compra de equipamiento, armas, entrenamiento, contratación de más policías, endurecimiento de las penas y de una serie de políticas y ordenanzas que parten de la cero tolerancia y de un estado castigador y punitivo.

“Existe una visión dominante, que es sostenida por la irresistible tentación metodológica de encontrar causalidad de la violencia en la ciudad, mediante un anti-urbanismo insostenible, que lleva a creer que la violencia urbana es sinónimo de violencia y que la ciudad —per se— es el origen de la violencia, con lo cual la ciudad termina criminalizada. Esto es, que la violencia es urbana y lo urbano la determina” (Carrión 2010; 292).

Este determinismo metodológico institucionalizado por muchos investigadores y funcionarios públicos no permite atajar el problema de manera objetiva y frontal. Así, en muchos casos las ONGs se convierten en los únicos intermediarios de los barrios, urbanizaciones y comunidades y las autoridades locales que usan sus estructuras organizacionales para solventar pequeños problemas comunitarios: se organizan comedores infantiles, talleres de artes (pintura, escultura, dibujo) y oficios (carpintería, cerámica, herrería, electromecánica), talleres sobre nutrición y salud que les previenen de enfermedades de transmisión sexual y adicciones a todo tipo de drogas. Hay ONGs de todo tipo, algunas gestionan la pobreza alimentaria, otras la patrimonial, hay aquellas que gestionan la pobreza de habilidades y competencias y algunas que se dedican solo al tema del género y la sexualidad. Además de las ONGs, trabajan las fundaciones transnacionales y las hay de todas, y para todos los temas.

Últimamente los temas de juventud y género gobernaban la lógica de las inversiones sociales en los barrios de la región latinoamericana. USAID es quizás de las más cuestionadas por imponer la agenda de los problemas sociales y económicos, además del burocratismo y administración de los recursos otorgados condicionados al llenado de cientos de formularios electrónicos y formatos en papel. De algo habrán servido, no para resolver el problema de fondo pero sí para aminorar la pobreza, el hambre y la desnutrición. No todos los proyectos que se acercan a USAID son financiados o reciben el mismo techo financiero, depende de la región, el contexto político y las prioridades de las fundaciones. Como se sabe, USAID es una fundación de origen estadounidense, por lo cual, recibe el rechazo de países o autoridades locales por cuestiones ideológicas, se sabe que en ocasiones estas Fundaciones se comportan como agencias de inteligencia que tratan de formar cuadros afines a las políticas norteamericanas, ganando terreno en las preferencias pro-americanas y formando resistencias a los gobiernos en turno. El caso reciente de USAID en Cuba es ideal para representar lo dicho.

Más aún, las alcaldías y municipios reciben préstamos y créditos de instituciones bancarias y Organismos Internacionales, el Banco Interamericano del Desarrollo ha otorgado cuantiosas sumas a gobiernos de casi toda América Latina y el Caribe para combatir la pobreza y el hambre, además de techos financieros para mejorar la escolarización de los niños excluidos de los sistemas de

educación básica. También los créditos se etiquetan para la recuperación urbana de los viejos centros históricos y barrios. Mucho de este dinero prestado termina en la corrupción de muchas de las tramas urbanas que coludidos los encargados de los proyectos urbanos con autoridades locales, bajan la calidad de los productos urbanos y el material de construcción. Puentes, plazas, calles, parques, aeropuertos, entre muchos otros espacios urbanos, son parte de esta trama de corrupción urbana que salpica desde funcionarios de menor rango hasta alcaldes y gobiernos provinciales o departamentales.

La especulación del suelo es quizás la antesala de la violencia urbana, es decir, comunidades o barrios enteros son desplazados de sus zonas urbanas por medio de la violencia social y urbana que termina doblando a los más fuertes. Habitantes de los centros históricos deshabilitados y desconectados de las nuevas centralidades urbanas, fuera de toda red de servicios modernos y del tejido urbano son desplazados a las periferias después de mal vender sus casas o terrenos, lo primero que pierden son la poca centralidad y movilidad de la que gozaban, ahora tardarán más tiempo para desplazarse a sus centros de trabajo, y gastarán más en combustible para sus automóviles, tendrán que desplazarse el doble para hacer la compra de la despensa y finalmente los barrios donde fueron instalados sufren de violencia crónica de todos los tipos de violencias. Jordi Borja, explica este fenómeno de gentrificación que siempre, termina por afectar a los más pobres:

“Las actuales pautas de urbanización acentúan, sin embargo, las diferencias y exclusiones sociales. En la ciudad central y compacta mediante la especialización terciaria y la gentrificación de lo que antes fueron centros multclasistas y barrios populares se tiende a expulsar a la población de bajos ingresos o a recluirla en áreas degradadas, marginales, incluso criminalizadas. En las periferias es aún peor. En el pasado reciente fueron chabolas (barranques) y los polígonos de vivienda social separados por muros o por el alejamiento del tejido urbano” (Borja: 2013; 105 y106).

Se exponen así a estas poblaciones desplazadas, gentrificadas, a los asaltos, violaciones, desabasto y lejanía de la fábrica o el lugar de trabajo. En muchas ocasiones no cuentan con drenaje, alumbrado público y la seguridad

ciudadana es muy mala. Por el contrario, los nuevos propietarios de los grandes corporativos y promotoras inmobiliarias, hacen su negocio revendiendo o comercializando el suelo comprado vendiéndolo hasta 10 veces el valor de compra. La inversión no es considerable si se piensa que estos centros urbanos ya cuentan con pavimentación, servicios públicos básicos, incluido el transporte público (de mala calidad pero ahí está), alumbrado y drenaje, sobre todo agua potable entubada. La injusticia social aparece a manos de estas promotoras inmobiliarias y los especuladores de la ciudad en contubernio con los gobiernos locales que dan los permisos y licencias de todo tipo de negocios y transacciones que aprovechan al máximo.

Entonces, aparece la gentrificación como forma de desplazamiento de las poblaciones de bajos ingresos a mano de los especuladores y promotoras inmobiliarias, la centralidad perdida y sus casas de materiales de construcción de calidad es sustituida por pequeñas casas de interés social con problemas estructurales debido a la mala calidad de los materiales de construcción, aparecen pronto cuarteaduras, goteras, humedad, hundimientos y una serie de problemas en las “nuevas casas” de interés social que prometían una vida mejor. A toda la problemática de la vivienda y la pérdida de centralidad urbana, aparece la plaga de la violencia urbana, pronto la tranquilidad se desvanece en cuanto el líder o representante de la pandilla o grupo criminal se acerca al domicilio a negociar la protección de la familia, en caso contrario y de no aceptar dicha protección, la familia se expone a una serie de castigos y sanciones en el barrio.

La violencia en todas sus manifestaciones urbanas y sociales agudiza la pobreza y la marginación. No basta estar excluidos socialmente, sino desconectados en términos de acceso a las nuevas tecnologías. Los accesos al consumo, los bienes, la distracción, la salud, la educación, la vivienda digna, y el trabajo bien remunerado los convierte en los nuevos pobres de la ciudad. Se integran a un enorme sector urbano sin calidad de vida y precario que solo subsiste en economías informales e ilícitas. Desafortunadamente, muchas de las familias recién llegadas a los cinturones de pobreza observan con angustia como sus hijos adolescentes son absorbido por estructuras sociales fuera de la familia, el trabajo y la escuela, incluida la Iglesia, las pandillas y grupos criminales sustituyen las redes de solidaridad, amistad y una serie de sentimientos de reciprocidad que habitualmente sucedían en la casa, el trabajo o la escuela. La relación entre ciudad

y violencia es notoria, en un acertado texto que apareció bajo el nombre: De la violencia urbana a la convivencia ciudadana, Fernando Carrión nos pregunta:

“Cómo pueden estar influyendo en las tendencias de la violencia los factores típicamente urbanos, como la alta densidad residencial, la carencia de espacios cívicos la escasez de bienes y servicios públicos, y la segregación urbana. En este último caso, por el prejuicio existente de que los pobres son delincuentes, la segregación residencial actúa como un factor adicional de incremento de violencia: el movimiento de los pobres por la ciudad los convierte en posibles delincuentes o, al menos, sospechosos, porque su extraterritorialidad los delata” (Carrión: 1993; 25).

Entonces, los valores de la familia, la disciplina laboral y las tareas y actividades escolares son pronto remplazados por otro sistema de valores, disciplina grupal y tareas y actividades ilícitas relacionadas con el crimen organizado. La figura paterna es desincorporada y trasladada al poder dominante del líder o jefe del barrio, en muchas ocasiones los jóvenes son usados para la venta de drogas al menudeo en sus antiguas escuelas, centros de trabajo e incluso familia. Este fatalismo puede ser evidenciado en imágenes cotidianas de homicidios de estos jóvenes que son las víctimas más comunes de las drogas. El sicariato se convierte en la regla y no la excepción. El prestigio y el ingreso que genera esta actividad, deslumbra a los jóvenes que lo toman como forma y estilo de vida. La ciudad segregada y fragmentada produce violencia, pero también la violencia produce segregación urbana y residencial.

“Una realidad tan heterogénea e inequitativa como la existente en el espacio urbano (segregación urbana), lleva a incrementar la inseguridad por desigualdad e inequidad, debido a que induce a la violencia: vandalismo, revancha social, percepción de inseguridad, estereotipos, estigmas (que se hacen emblemas) y búsqueda, por fuera del mercado, de lo que otros tienen (invasiones). La segregación residencial crea barreras de diferenciación que conduce a la desigualdad y, por tanto —también— a la violencia” (Carrión: 2010; 301).

En sí, la violencia urbana y social en el sur global, trastocan la seguridad ciudadana. Las calles como el lugar público por excelencia se hace el espacio

más peligroso y en muchos sitios se convierten en espacios en disputa por parte de bandas juveniles, pandillas y carteles de la droga. El control de las calles es vital para la vida comunitaria, recuperarlas es tarea urgente de autoridades y ciudadanos. Su reconquista y reapropiación debe ser parte importante de una agenda ciudadana, las calles, en plural, son los espacios interacción, intercambio, convivencia, relajamiento, desplazamiento, ejercitamiento físico y todo tipo de actividades destinadas para hacer ciudad. Los costos de no recuperar las calles y espacios públicos serán altos, considerando el penoso avance de la delincuencia y el crimen a plena luz del día, con ciudadanos encerrados como presos en sus casas, mientras los delincuentes hacen uso de la ciudad de manera libre. Es el miedo social, el enemigo a vencer y erradicar.

Amurallamiento de las ciudades y segregación residencial

Allí están las transformaciones en el urbanismo (amurallamiento de la ciudad, nuevas formas de segregación residencial), en los comportamientos de la población (angustia, desamparo), en la interacción social (reducción de la ciudadanía, nuevas formas de socialización) y en la militarización de las ciudades; amén de la reducción de la calidad de vida de la población (Carrión: 1993).

Ante la creciente sensación de peligro de las grandes ciudades aparece cada vez más claramente la solución de inventar un nuevo entorno donde se segreguen los iguales, guetos deseados de felicidad (Borja: 2003).

Si la ciudad es de todos, y el aire libre de las ciudades hace ciudadanos libres, según un proverbio alemán, qué hace falta para liberar a las ciudades de todo aquello que la fragmenta, la segmenta y la degrada. Aceptar la segregación residencial, después social y racial, es condenar a las ciudades a una larga lista de malestares que solo unos pocos adinerados podrán evadir comprando comodidades, seguridad y consumo cultural. Recientemente, urbanistas, geógrafos y antropólogos y sociólogos urbanos han evidenciado un fenómeno nuevo en las ciudades contemporáneas, es el amurallamiento de las ciudades convirtiendo a estas en espacios de segregación social y racial, Teresa Pires do Rio Caldeira dice lo siguiente:

“La violencia y el miedo se combinan con procesos de cambio social en las ciudades contemporáneas, generando nuevas formas de segregación espacial y discriminación social. En las dos últimas décadas, en ciudades tan diversas como São Paulo, Los Ángeles, Johannesburgo, Buenos Aires, Budapest, Ciudad de México y Miami, diferentes grupos sociales —especialmente las clases más altas— han utilizado el miedo a la violencia y el crimen para justificar nuevas tecnologías de exclusión social como el alejamiento de los barrios tradicionales de esas ciuda-

des. En general, los grupos que se sienten amenazados por el orden social que toma cuerpo en esas ciudades construyen enclaves fortificados para su residencia, trabajo, ocio y consumo (Pires do Rio Caldeira: 2007; 11)”.

Las ciudades de muros como dice Pires do Rio Caldeira, aparecen de la nada en las últimas décadas, grandes y pequeñas ciudades transforman su fisonomía y paisaje urbano creando amplias zonas urbanas en pequeños guetos de resguardo donde se protegen de la violencia e inseguridad ciudadana. Miles de fraccionamientos cerrados son registrados en los ayuntamientos y municipalidades, los más acomodados, los de mejores ingresos, se aíslan de las llamadas clases peligrosas, se alejan de los otros ciudadanos con menores ingresos. La felicidad perdida ante los nuevos desafíos y peligros urbanos de la violencia “se materializa con la realización de barrios cerrados, donde el espacio público y el privado se enlazan sin solución de continuidad, donde los peligros de la ciudad quedan exorcizados gracias a los medios de control. Sistemas de seguridad que van desde los meramente físicos, como una muralla, cerco o reja, hasta sofisticados controles con videocámaras o infrarrojos y por descontado el adecuado servicio privado de seguridad” (Borja: 2003; 190).

Si bien, como dice Pires do Rio Caldeira, los muros aparecen de la nada, también sabemos por el economista estadounidense Jeremy Rifkin, que los fraccionamientos cerrados que él refiere como comunidades exclusivas o *common interest developments* aparecen en América Latina como imitación del modelo de vivienda de la clase alta y media estadounidense. Haciendo del acceso todo un estilo de vida. De hecho, suele afirmar que hemos entrado a una Era del acceso.

“Las comunidades residenciales, conocidas como <<urbanizaciones de interés común>> han brotado a lo largo y ancho de todo el territorio estadounidense. Muchas de ellas se han diseñado expresamente con muros, cercas y puertas de entrada para restringir el acceso. Los guardias de seguridad de la entrada principal para cuidar a los residentes, a sus invitados y para restringir la entrada de visitas o vendedores solamente a quienes tengan autorizado el acceso a la urbanización” (Rifkin: 2002, 160).

Y de los Estados Unidos al resto del mundo, las zonas residenciales que

privatizan las vías públicas, gozan de los permisos de las dependencias encargadas de la planeación urbana, las arcas del erario público se llenan del pago de este tipo de permisos de cierres de calles y todo tipo de espacios antes públicos, dentro de estas zonas fraccionadas y resguardadas por muros se quedan escuelas, parques, centros comunitarios, instalaciones deportivas y demás equipamiento urbano de uso público que de un momento a otro es privatizado. Estamos ante el fenómeno inédito de la privatización de lo público y el cambio del valor de la libertad por el nuevo valor de la seguridad. Seguridad que requiere de constante vigilancia para que sea efectiva, así lo deja saber la socióloga brasileña Teresa Pires do Rio Caldeira:

“Esta es la necesidad de vigilar los límites de una comunidad que se mantiene unida sobre la base de “actitudes” y que tiene poca tolerancia por la diferencia. Esta tarea de patrullaje es fácil en relación con los obvios “otros”, pero se convierte en un hecho engorroso cuando tiene que separar a los que son “iguales pero no tanto”” (Pires do Rio Caldeira: 2010, 83).

Por ello, como dice Bauman “todo comenzó en Estados Unidos, pero se filtró en Europa y hoy se ha extendido por la mayoría de los países del Viejo Continente” (Bauman: 2011). Y continúa diciendo sobre este fenómeno en Estados Unidos: “Donde todo es posible pero poco y nada es predecible, hacia “comunidades cerradas”, es decir, recintos amurallados con ingreso estrictamente selectivo, rodeados de guardias armados y provistos de circuitos cerrados de televisión y alarmas contra intrusos” (Bauman: 2011). Estos espacios que se cierran a los extraños, extranjeros o las clases peligrosas, han proliferado en las regiones del sur global, sobre todo en las ciudades intermedias y metrópolis. Se presentan como nuevos servicios de seguridad que a su vez, forman parte de las llamadas sociedades postindustriales. Aparecen en una oferta más amplia de servicios de comida a domicilio (y para eventos especiales), seguros de vida, servicios funerarios, servicios de alarmas, servicios de tecnologías y dispositivos móviles, entre muchos otros.

“Estos escasos afortunados que han adquirido el ingreso a una “comunidad cerrada”, celosamente custodiada, pagan un ojo de la cara por “servicios de se-

guridad”: en otras palabras, por el destierro de toda mezcla. Las “comunidades” cerradas son acumulaciones de pequeños capullos privados suspendidos en un vacío social” (Bauman: 2011; 93).

Así, la video-vigilancia irrumpe en este tipo de espacios para observar a los extraños e invasores, las malas conductas o actividades sospechosas son el blanco de los comités de vigilancia y seguridad de estos fraccionamientos privados. Todo es registrado al detalle, entradas y salidas de cada vecino, las visitas de los amigos y familiares es expuesta a una escrupulosa entrevista de entrada por parte de guardias e inspectores privados, el dispositivo de vigilancia cuenta con el apoyo de las policías locales y diferentes cuerpos de seguridad. Las alarmas en los domicilios (compañías como ADT), en los automóviles y demás patrimonios de las clases medias y adineradas son activadas ante el temor a la invasión del otro no residente. Prolifera la venta de seguros de vida, de daños a terceros y por robo y daños en propiedad, la seguridad privada se integra como parte de los servicios públicos de uso doméstico. De nuevo, es la privatización de lo público, quizás el daño más grave es el de la privatización de miles de calles, millones de kilómetros de vía pública privatizados en América Latina.

“Las nuevas regiones metropolitanas cuestionan nuestra idea de ciudad: son vastos territorios de urbanización discontinua, fragmentada en unos casos, difusa en otros, sin límites precisos, con escasos referentes físicos y simbólicos que marquen el territorio, de espacios públicos pobres sometidos a potentes dinámicas privatizadoras, caracterizadas por la segregación social y la especialización funcional a gran escala y por centralidades gentrificadas (clasisistas) o <<museificadas>>, convertidas en parques temáticos o estratificadas por las ofertas de consumo” (Borja: 2013; 323).

Entonces, aparece la segregación residencial y social como consecuencia de estos cierres y privatizaciones. La experiencia es aún reciente y por ello apenas han aparecido las primeras reflexiones, casi todas ellas parten del antecedente de las ciudades medievales amurallas, se habla de un regreso a este tipo de ciudades constantemente amenazadas de los peligros externos y la inseguridad del extrarradio urbano. Como antecedente es interesante esta relación,

pero en realidad la ciudad medieval dista en muchos aspectos de las ciudades contemporáneas, a lo que asistimos es al surgimiento de ciudades dentro de las ciudades, es decir, estas zonas y urbanizaciones cerradas se proveen todos los servicios necesarios para no requerir prácticamente nada del exterior, exceptuando quizás el problema del abastecimiento alimenticio y otros servicios, el resto lo pueden gestionar desde el interior.

Recientemente, en libro *Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana* de Davis Harvey, el geógrafo y urbanista evidencia la relación directa entre por un lado, los fenómenos del amurallamiento y la privatización de lo público y, por otro lado, la pérdida del sentido de comunidad. Lo plantea de la siguiente manera:

“El reciente resurgimiento de la insistencia en la supuesta pérdida de la comunalidad urbana refleja el impacto aparentemente profundo de la reciente oleada de privatizaciones, cercamientos, controles espaciales, actuaciones policiales y redes de vigilancia sobre las cualidades de la vida urbana en general, y en particular sobre la posibilidad de construir o inhibir nuevas relaciones sociales (nuevos bienes comunales) en el seno de un proceso urbano influido, si no dominado, por los intereses de clase capitalistas” (Harvey: 2013; 107).

Y continúa insistiendo en la configuración del llamado nuevo urbanismo que, apoyado por empresarios, gobiernos y promotores inmobiliarios, construyen y edifican espacios cerrados y cercados que prometen un nuevo estilo de vida urbana basada en la seguridad.

“El desarrollo suburbano incoherente, anodino y monótono que sigue dominando en muchas partes del mundo encuentra ahora un revulsivo en el <<nuevo urbanismo>> que proclama las excelencias de la vida en comunidades apartadas (supuestamente íntimas y seguras, a menudo valladas y cerradas al exterior) en las que los promotores inmobiliarios prometen un estilo de vida refinado supuestamente capaz de cumplir todos los sueños urbanos” (Harvey: 2013; 35).

Como sabemos, las ciudades latinoamericanas sin contar con amplias capas de clase media, ni con grupos sociales extendidos de clase alta como algu-

nas zonas de los Estados Unidos o Europa, ha reproducido en algunas regiones y ciudades, sectores sociales de ingresos intermedios que los equiparan a las clases medias de países occidentales, sus formas de vida urbana, accesos a una serie de servicios públicos y tipos de consumo cultural, son estos estratos de la población de clase media latinoamericana los que están imitando y emulando las formas de vida cerrada y alejada de las clases de bajos recursos, pero con una variable diferente a los países europeos y las ciudades estadounidenses: la violencia urbana y social.

La violencia es usada como la justificación ideal de las clases políticas y las elites empresariales latinoamericanas, de sus compañías y promotoras inmobiliarias, de los especuladores del uso del suelo que montan compañías constructoras y urbanizan todo lo que encuentran a su paso si es de su interés y, les significa beneficios a corto plazo sin hacer una inversión compleja. Las tramas urbanas de corrupción en muchas ciudades, en las últimas décadas, han estado bajo esta lógica de la especulación y explotación del suelo urbano, especulación que forma parte de un amplio sistema-mundo capitalista que se gobierna desde la premisa neoliberal de la acumulación por la acumulación. Ya David Harvey, lo denunciaba de manera temprana en su libro *Urbanismo y desigualdad social*.

“La experiencia de las ciudades americanas contemporáneas sugiere que la dinámica del cambio del uso del suelo permanece constante bajo el modo de producción capitalista. El excedente del consumidor de los grupos más pobres es disminuido por los proveedores de servicios de alojamiento transformándolo en excedente del proveedor a través de sus prácticas casi monopolistas. Asimismo, los grupos más pobres viven generalmente en emplazamientos sometidos a enormes presiones especulativas derivadas del cambio de uso del suelo” (Harvey: 1977; 182).

Finalmente, el amurallamiento de las ciudades será una especie de testigo arqueológico de la humanidad, que como hace siglos, la ciudad medieval se amuralló para sortear los peligros de las invasiones, las pestes, los desastres naturales y de la piratería, entre otros, hoy los enemigos que asechan a las ciudades contemporáneas son las violencias que se materializan en una variedad de delitos y hechos ilegales. Todo este fenómeno del encierro ciudadano por parte de

las clases con mayores ingresos, ha generado incluso una subrama o subcampo de estudio dentro de las Ciencias Sociales.

“El subcampo resulta del estudio de las prácticas asociadas al miedo y la búsqueda de la seguridad, básicamente las que conllevan la reclusión domiciliaria, así como los imaginarios que resultan a la luz de la construcción material de las denominadas urbanizaciones cerradas o barrios cerrados, que incluso a veces se designan con una expresión de fuerte carga simbólica, “barrios amurallados”, recurriendo al símbolo de la muralla medieval” (Silva: 2007).

El encierro, parece ser la respuesta a la violencia urbana e inseguridad que recorre toda América Latina. Dejando a su paso incertidumbre y desconfianza social, alejando de los espacios públicos a los ciudadanos, dejándolos en el ostracismo y la reclusión domiciliaria. El confinamiento de la ciudad es el confinamiento de sus ciudadanos y la pérdida del ejercicio de la ciudadanía que debilita las democracias latinoamericanas. En muchos de los encuentros con ciudadanos comunes y corrientes, se hace manifiesta la misma idea: “mientras los ciudadanos estamos presos y reclusos en nuestras casas, enrejadas y con alarmas y sistemas especiales de seguridad, los ladrones andan sueltos haciendo de las suyas”.

Parte 4

Reflexiones Finales

En un milenio
urbano de ciudades

La ciudad no es el problema, es la solución

La ciudad dejó, desde hace mucho, de ser concebida como un problema, porque es el lugar donde se construyó la ciudadanía, es el espacio en donde se han producido las mayores innovaciones, es el ámbito productivo por excelencia, es la instancia en donde se pueden satisfacer de mejor manera los servicios elementales, es el escenario en donde el empleo crece y la pobreza se reduce, así como también, donde la mujer se hace pública, el joven se expresa, la política se construye (Carrión: 2010).

<<The Hell is the City>> (La ciudad es el infierno). Jaime Lerner acuñó una respuesta afortunada: la ciudad no es el problema, es la solución, es desde donde se pueden afrontar los problemas más directamente (Borja: 2013).

Como reflexiones finales, podemos pensar la ciudad posible, como aquella donde la ciudad no es el problema, sino la solución. Si bien, hemos enlistado y enunciado una serie de malestares que viven actualmente las ciudades latinoamericanas, es factible colocar a la ciudad como aquello que posibilita una mejor vida para los millones de ciudadanos latinoamericanos. A pesar de las adversidades actuales que enfrentan las ciudades y sus gobiernos locales, con bajos presupuestos y una epidemia de corrupción que corroe sus estructuras institucionales y financieras, aun así, se puede pensar en un golpe de timón que organice a las ciudades y sus habitantes. Para ello, será necesario habilitarles de coraje cívico y una extraordinaria dosis de participación ciudadana.

La crisis urbana actual en la que están metidas las ciudades del hemisferio latinoamericano, requiere que los encargados de tomar las decisiones sobre el gobierno de la ciudad, permitan a los urbanistas y planeadores realizar políticas urbanas y sociales bajo la nueva realidad urbana que rompa con los viejos modelos urbanos basados en la expansión periférica del pasado siglo y asimilar los nuevos modelos de ciudad basados en la introspección cosmopolita que plantea

Fernando Carrión en sus investigaciones. Este continente de ciudades, ciudades de pobres por desgracia, necesita de buenas dosis de voluntad política, grandes presupuestos, buenas gestiones y planeación urbana, pero sobre todo, mucha imaginación urbana para pensar cómo salir de la crisis actual. Al actual fatalismo urbano se debe anteponer el optimismo ciudadano.

“De esta comparación inicial entre urbanización y pobreza se puede concluir que la urbanización no fue una fuente de pobreza sino, por el contrario, un medio para reducirla, a través del acceso de la población a los bienes y servicios de manera más generalizada que en el campo. En otras palabras: la urbanización no es la causa de la pobreza, sino por el contrario, la posibilidad para atenuarla, lo que nos lleva a pensar que la ciudad es menos un problema y más una solución” (Carrión: 2010; 362).

Así, los retos más inmediatos, por lo que se ha discutido en este ensayo a partir de otros autores y desde un punto de vista personal, es; la violencia y la pobreza urbana, sumados a un contexto de degradación urbana y descomposición social que provoca exclusión y desigualdades estructurales nunca antes vistas en este continente de ciudades. La segregación y la fragmentación urbana ensanchan la brecha social y urbana que aleja a los ciudadanos de los derechos a la ciudad que ven cómo se aleja de su vida cotidiana: la accesibilidad universal, la conectividad, la habitabilidad, la iluminación, los espacios públicos y las nuevas centralidades urbanas. Los derechos urbanos, como lo comenta en sus últimas publicaciones el profesor Jordi Borja (2012, 2013) deberán ser las próximas batallas por parte de los ciudadanos que intenten reivindicar su derecho a la ciudad como el gran espacio público o dicho de otro modo “el espacio público es la ciudad” (Borja: 2013).

La ciudadanía no es algo que se conserve sin sufrir los estragos del tiempo y los cambios y contradicciones de los sistemas políticos y urbanos, por ello: “La ciudadanía nunca se consigue del todo, el progreso genera nuevas contradicciones y desigualdades, pero también las fuerzas para enfrentarse a ellas. La ciudadanía es una conquista permanente” (Borja: 2013; 215). La ciudadanía en el contexto latinoamericano sufre de un ejercicio parcial de la misma, que es atravesado por el género, la clase y el grupo étnico al cual se pertenece, sumados los

grupos étnicos a los que se pertenece o si se sufre de algún tipo de discapacidad o minusvalía física o emocional. En muchas ciudades latinoamericanas es muy difícil ser pobre, indígena y mujer. Al igual que los afrodescendientes, que al igual que los indígenas, siempre están en los indicadores de algún tipo de pobreza y que se enfrentan a la discriminación como forma persistente de un racismo que se pensaba desaparecido. Qué ciudad debemos pensar para todos los ciudadanos.

Si como dice Roiz en su reciente libro *El mundo interno y la política*:

“Las instituciones y tendencias en donde confluyen las fuerzas morales, psicológicas y religiosas muestran la fortaleza de la represión. Es el caso de la familia, el machismo, el clasismo, la homofobia, el racismo o, en general, los prejuicios drásticos. Para empezar, casi todas ellas se rigen por el principio de jefatura. Su actuación puede ser muy brutal y sus efectos visibles” (Roiz: 2013, 193).

Regresando a la ciudad que debemos de pensar, seguimos las recomendaciones de algunos urbanistas como Carrión y Borja, los nuevos proyecto de ciudad, deberán partir de sus centros históricos, que poseen una doble centralidad, la centralidad urbana, pero también una centralidad histórica que forma parte de una larga memoria colectiva de la ciudad y sus habitantes. Es el trabajar los nuevos modelos urbanos a partir de la llamada ciudad existente, la ciudad construida, que implica no crecer más, sino reurbanizar la ciudad recuperando los viejos espacios públicos y centralidades urbanas abandonadas o que han perdido importancia debido a su depreciación o renta baja del suelo donde todo se ha precarizado. Evitando la gentrificación y el desplazamiento de los más pobres de la ciudad a otras zonas del extrarradio urbano que les alejen de las centralidades urbanas.

Sin embargo, si se intentan las políticas de igualdad desde una perspectiva urbana, estas, deberán partir de la igualdad basadas en la diferencia, es decir, pensar la igualdad respetando las diferencias étnicas, de clase, género (en el caso de las minorías sexuales), religiosas y culturales. Una política urbana que piense la igualdad sin que esto implique la homogenización de la cultura y la estandarización de su población, que respete las memorias colectivas y la vida comunitaria de las poblaciones migradas y de los recién llegados. Se sabe de los proyectos que en el pasado intentaron uniformar a la población con desastrosas

consecuencias humanas. Darle la vuelta al pensamiento único que quiere imponer el neoliberalismo con un urbanismo capitalista y un capitalismo de amigos que en países como México ya muestra sus nefastas consecuencias sociales y económicas para una amplia mayoría de la población acorralada en la pobreza urbana. Evitar estos modelos, es evitar la anti-ciudad.

Cabe señalar, que otra de las propuestas para salir de la actual crisis urbana es la aportada por el profesor-investigador colombiano Armando Silva, quien sugiere un “urbanismo de los ciudadanos”; mismo donde se pone mayor énfasis en la cultura que en la arquitectura, así como mayor atención a los ciudadanos que a los edificios:

“Si el desborde de las ciudades como hecho físico o social, hace que se pierdan sus límites geográficos y por efecto de los medios y las tecnologías se construyan otras unidades de estudio que atiendan a nuevas realidades, lo urbano antes que las ciudades, como lo hemos registrado, urbanismos sin ciudades. Esto querría decir que el nuevo énfasis se pone en la cultura y no en la arquitectura y que pasamos de una ciudad de los edificios a un urbanismo de los ciudadanos. Es acá donde los imaginarios urbanos expresan su potencia estética y política” (Silva: 2006; 55).

En sí, otro de los grandes retos para las ciudades del siglo XXI es pensar cómo hacer ciudad en contextos de inseguridad ciudadana y violencia urbana. En este caso, la idea ha sido la de modificar el modelo de seguridad pública bajo la rectoría única del Estado y las autoridades locales a un modelo de seguridad ciudadana, donde los ciudadanos sean coparticipes de la seguridad y gobierno de la ciudad. El problema de no hacer nada, implica consecuencias que terminarían con la muerte paulatina de la ciudad, de eso que Carrión ha llamado urbicidio. A la crisis urbana en países como Colombia, los planeadores respondieron con un urbanismo social que contemplaba intervenciones urbanas en las zonas más pobres y marginales, tratando de crear nuevas centralidades que rompieran con la lógica de mercado de solo crear centralidades urbanas comerciales, financieras e industriales. Muchas veces estas centralidades les son prohibidas a los habitantes pobres y se les ve como forasteros en su propia ciudad.

Por lo anterior, no toda centralidad es buena en sí misma, en muchas oca-

siones favorece la segregación urbana y social, fragmentando la ciudad y excluyendo a los pobres urbanos. El acceso a las centralidades es vigilado y se activan mecanismos y tecnologías políticas para la vigilancia de las clases peligrosas, las nuevas centralidades urbanas deberán pensar en una inclusión ciudadana que fomente la convivencia y la mixtura social entre los habitantes de diferentes clases sociales. Los viejos encuentros de los pobres y los ricos en la ciudad cada vez son más esporádicos. Las panaderías, carnicerías, zapaterías, cines y abarrotes del barrio sucumben ante el capitalismo que intenta imponer ciudades de mercado en vez de ciudades con mercado. Por ello, se insiste en que cualquier política urbana o modelo urbano de ciudad, debe tener como enfoque de partida, el derecho a la ciudad, mismo enfoque que garantiza la inclusión y participación de todos los ciudadanos.

A la resistencia de los políticos y malos funcionarios, se debe contraponer la fuerza ciudadana y la reivindicación del derecho a la ciudad como el mejor de los consensos entre gobiernos y ciudadanos. El derecho a la ciudad como algo que irrumpe recientemente en el contexto latinoamericano, debe de parecer ajeno a las políticas urbanas, pero es todo lo contrario, la relación entre el derecho a la ciudad y las políticas urbanas ya ha dado enormes resultados en algunas ciudades que se apegan a sus preceptos, y aunque América Latina no es Europa, esto no implica la imposibilidad de pensarlos en nuestra realidad latinoamericana que actualmente tiene una urbanización del 80% de su territorio. Siendo hoy día la región más urbanizada del planeta. Según el informe del Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012. Rumbo a una transición urbana publicado por ONU-HABITAT, se estima que el Cono sur alcanzará el 90% de urbanización para el cercano 2020 y que países como México y la región Andina ya alcanzaron el 85%, incluso Centroamérica llegará pronto a una urbanización del 75%.

Al temor y miedo que ha generado la violencia urbana y social, que produce inmovilismo, ostracismo y paralización que pronto se convierte en desmovilización social y despolitización ciudadana, se debe actuar con la participación ciudadana, reconquistando los espacios públicos y volviendo a usar la ciudad el mayor tiempo posible, de día y de noche. Además de ocupar la mayor cantidad de espacios urbanos en la medida de lo posible, con presencia de actividades y

prácticas ciudadanas y culturales que promuevan la convivencia. Participación que deberá incluir la exigencia de los ciudadanos a sus gobiernos locales a ejercer de manera transparente los recursos públicos sin caer en las tramas de corrupción urbana que tanto dañan a la ciudad y sus habitantes. Si como se piensa, la ciudad es la solución y no el problema, la reconquista de la ciudad será una de las prioridades ciudadanas del presente siglo XXI.

Pensar para actuar y actuar pensando ¿Sociedad o barbarie?

El pensar de verdad significa la creación de abstracciones para promover la expansión de la experiencia humana, engrandecer el uso de capacidades intelectuales, evitar la liquidación mental y la muerte física, y llevar a cabo la recreación de la vida en la ciudad (Roiz: 2013).

Como en ocasiones anteriores, la ciudad(es) está siendo víctima de las malas ordenaciones urbanas y planeaciones que obedecen al capitalismo de amigos (Borja: 2013). Aun así, y como lo destaca Silva:

“En América Latina, los estudios urbanos constituyen un campo destacado, con trayectorias académicas intensas que superan las tres décadas. Este interés por lo urbano encuentra su razón de ser en los acelerados procesos de urbanización de casi todos los países de la región, las conocidas macrocefalias, la extensión desmesurada de las periferias y otros fenómenos urbanos que han generado una honda preocupación en los pensadores latinoamericanos” (Silva: 2007; 160).

Como lo enuncia la cita anterior, en la región latinoamericana, los Estudios Urbanos constituyen desde hace décadas, una fuente de optimismo de donde autoridades y gobiernos pueden nutrirse de ideas, iniciativas, planes y proyectos que desemboquen en buenas acciones públicas en beneficio de los ciudadanos. Sobre todo, de aquellos llamados “ciudadanos de a pie” que son los que más sufren los estragos de las malas administraciones y gestiones por parte de los gobiernos. Se cree que son estas iniciativas y estudios urbanos a cargo de un buen número de planeadores e investigadores del tema urbano y político las que mejoren a mediano y largo plazo la vida de los individuos dentro de las ciudades.

Como se está pudiendo evidenciar actualmente, muchas ciudades en distintas partes y por distintos motivos, están siendo aquejadas por una serie de

malestares que como se mencionó durante el presente ensayo, atentan contra la dignidad y la vida humana. Por ello, debe existir el momento propicio para la reflexión sobre estos malestares preguntándonos si lo que se prefiere es la sociedad o la barbarie. Es decir, si se apuesta de manera conjunta (investigadores, organizaciones no gubernamentales, ciudadanos, autoridades e iniciativa privada) a un proyecto de ciudad que privilegie la continuidad de la sociedad como aquello que genera intercambios e interacciones, —pero también interdependencias— o, si se apuesta a la barbarie, como aquello que genera violencia, precariedad y pobreza urbana.

El presente inmediato, el que se vive de manera cotidiana en muchas de las ciudades, es un presente donde la violencia y el crimen organizado, aunado a la corrupción generalizada de las clases políticas y gobernantes, se han apoderado de los espacios tradicionales de la convivencia ciudadana y de aquellos lugares donde la familia, el trabajo y los estudios se estructuraban socialmente sin los malestares que hoy merman las formas de vida urbana. Por ende, se debe de dar respuesta a la interrogante de si lo que quieres es: sociedad o barbarie.

La intención es la de recuperar ese “humanismo cívico” que propone el politólogo Javier Roiz en su libro *Sociedad vigilante y mundo judío en la concepción del Estado*. Es apostarle a un urbanismo y una ciencia política que privilegie la participación y la creatividad de los individuos, pero que a su vez, cuide la sociedad como el conjunto o la suma de esa creatividad y participación individual. Asumir los retos y oportunidades que brinda el urbanismo ciudadano que centra su atención en el derecho a la ciudad y a una ciencia política que “ha de estudiar la vida de lo público, es decir, el asunto de quién manda y quién obedece, y de cómo desmontar la corrupción [...] en la ciudad o en la nación” (Roiz: 2008, 53).

El apostar a la sociedad y no a la barbarie, es apostar por la vida de la ciudad, a su vitalidad y participación ciudadana. Es pensar para actuar y actuar pensando, poniendo en práctica los derechos a la ciudad como derechos urbanos. Es como se mencionó antes con Carrión, pensar la ciudad posible como aquella ciudad construida, la ciudad ya existente. No se trata de inventarse otras ciudades (sin historia), sino de recuperar las existentes llenas de memoria histórica que a su vez, son memoria colectiva y ciudadana. Es con tiempo, letargia y una buena dosis de voluntad política y coraje cívico: “pararse a pensar” como nos

invita en sus seminarios el Dr. Roiz.

Asimismo, es poner en juego todos los elementos favorables que se tienen al alcance y sacar el mayor de los provechos para una vida urbana mejor, con gobiernos ciudadanos donde la inclusión sea automática y no como un servicio a pagar como usuario. Es, el que los encargados de los asuntos públicos de las ciudades gobiernen a los ciudadanos y no solo los administren como meros usuarios y consumidores. Es el poner en marcha una serie de políticas públicas de orden redistributivas donde la riqueza de las ciudades se distribuya y ponga al servicio de las mayorías y no solo al alcance de unos cuantos. Es tratar de evitar la imagen cotidiana de los pobres urbanos y su vida precaria, es el desarrollar políticas urbanas, sociales y económicas que garanticen el derecho al lugar (Ramírez: 2013) a todos y todas en la ciudad. Esto significa revalorar lo público como el espacio ideal para hacer ciudad, la Dra. Patricia Ramírez Kuri lo enuncia así:

“Lo público es el espacio donde aparecen relaciones interpersonales, formas de expresión y de construcción de lo colectivo que definen el mundo común entre miembros diferentes de la sociedad” (Ramírez, 2013, 287).

En fin, se debe acudir a la recomendación de Alicia Ziccardi, Isabel Vázquez y Arturo Mier y Terán cuando dicen que:

“Acceder a los espacios públicos de calidad para realizar actividades colectivas (deportivas, culturales, sociales) favorece la convivencia ciudadana, el fortalecimiento de la identidad local y la cohesión social. Por ello, en los contextos urbanos en los que prevalecen condiciones de pobreza las acciones gubernamentales del ámbito local se orientan actualmente no sólo a modificar las condiciones materiales de los espacios públicos degradados sino a favorecer la organización de la vida comunitaria” (Ziccardi, Vázquez y Mier y Terán: 2010, 689).

Por todo lo anterior, las verdaderas agendas de gobierno, son las agendas ciudadanas que obedecen a las necesidades de quienes habitan la ciudad, de quienes al caminarla y vivirla conocen de primer orden los miedos y angustias de la inseguridad, la violencia, la pobreza y la precariedad como consecuencia directa de la descomposición social y la degradación urbana. Las autoridades

cuentan con los recursos (financieros, materiales y humanos) para preguntar de manera directa a los habitantes sobre las necesidades más apremiantes sobre las cuales es necesario intervenir en el corto, mediano y largo plazo. Es superar la novedad de los presupuestos participativos nacidos en Porto Alegre, Brasil y ampliar la idea para constituir verdaderos Municipios participativos.

Finalmente, este ensayo aún y cuando es pensado y escrito en el norte de México, en su región fronteriza con los Estados Unidos, intenta dar una mirada que partiendo de lo local, reconoce la conformación de lo transnacional y lo global como un componente importante para la reflexión de las ciudades y sociedades contemporáneas. Es pensar de manera transfronteriza y translocal. Es pensar que al final de la discusión, las ciudades de buena parte de América Latina, guardan esos parecidos de familia que nos hacen semejantes, pero con sus acentos locales propios de cada región y contexto socio-histórico. Que debemos dejar de creer que la violencia y la pobreza urbana, incluido el narcotráfico, son problemas que actúan sobre unas cuantas localidades y territorios, al igual que la corrosión de los sistemas políticos y de partidos que hacen de la corrupción su expresión más funesta.

Se deja hasta aquí este breve ensayo para compartir con colegas y amigos, además de ciudadanos de a pie y políticos profesionales para que reflexionen sobre estos temas e ideas. Se espera la retroalimentación y el intercambio de ideas para poner sobre la mesa las estrategias que de alguna manera u otra den una salida al terrible laberinto del abandono en el que han entrado las ciudades contemporáneas y del cual, es cada vez más angustiante y difícil salir ileso. Es importante darse cuenta que, al defender la ciudad, se defiende la ciudadanía y los derechos a ella.

Bibliografía

Adams, Tani Marilena (2012). *La violencia crónica y su reproducción: Tendencias perversas en las relaciones sociales, la ciudadanía y la democracia en América Latina*, Woodrow International Wilson Center for Scholars, Estados Unidos.

Bauman, Zygmunt (2011). *Daños colaterales. Desigualdades sociales en la era de la globalización*, Fondo de Cultura Económica, México.

Bauman, Zygmunt (2014). *¿La riqueza de unos pocos nos beneficia a todos?* Editorial Paidós, Barcelona.

Bauman, Zygmunt (2006). *Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias*, Editorial Paidós, Barcelona.

Bauman, Zygmunt (2005). *Trabajo, consumismo y nuevos pobres*, Gedisa, Barcelona.

Beck, Ulrich (2003). *Un nuevo mundo feliz. La precarización del trabajo en la era de la globalización*, Paidós, Barcelona.

Borja, Jordi (2013). *Revolución urbana y derechos ciudadanos*, Alianza Editorial, Madrid.

Borja, Jordi (2010). *Luces y sombras del urbanismo de Barcelona*, Editorial UOC, Barcelona.

Borja, Jordi (2003). *La ciudad conquistada*, Alianza Editorial, Madrid.

Borja, Jordi; Mireia Belil y Marcelo Corti (Editores) (2012). *Ciudades, una ecuación imposible*, Editorial Icaria, Barcelona.

Carrión Mena, Fernando. (2010). *Ciudad, memoria y proyecto*, OLACCHI-Municipio Distrito Metropolitano de Quito, Quito.

Carrión Mena, Fernando. *De la violencia urbana a la convivencia ciudadana*. PGU. Serie Gestión Urbana 2. Ciudad y violencias en América Latina, 1993, pp. 5-22.

Carrión Mena, Fernando y Manuel Dammert Guardia (Compiladores) (2009). *Economía política de la seguridad ciudadana*, FLACSO-Municipio Metropolitano de Quito, Quito.

Carrión Mena, Fernando y Johanna Espín (Compiladores). (2009). *Un lenguaje en construcción: el diagnóstico de la violencia*, FLACSO-Municipio Metropolitano de Quito, Quito.

Colomer Viadel, Antonio (2015). *Comunidad y ciudades, Constituciones y solidaridades*, Ciudad Nueva-INAUCO, Buenos Aires.

Colomer Viadel, Antonio. *Contra la conspiración universal de la infamia, el desafío de la alianza de los justos*, en Revista Iberoamericana de Autogestión y Acción Comunal, Universidad Politécnica de Valencia, No. 61-63, Valencia, España, pp. 11-20.

Costa, Gino (2012). *La situación de la seguridad ciudadana en América Latina*, INTERAMERICAN DIALOGUE, Lima.

Chueca, Fernando (2013). *Breve historia del urbanismo*, Alianza Editorial, Madrid.

Davis, Mike (2007). *Planeta de ciudades miseria*, FOCA, Madrid.

Esquivel Hernández, Gerardo (2015). *Desigualdad Extrema en México*. Concentración del Poder Económico y Político, OXFAM México, México.

Harvey, David (1985). *Urbanismo y desigualdad social*. Siglo XXI editores, Madrid.

Harvey, David (2013). *Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana*, Akal, Madrid.

Herrera Robles, Luis Alfonso (2007). *Juárez. El desgobierno de la ciudad y la política de abandono. Miradas desde la frontera norte de México*, UACJ, México.

Herrera Robles, Luis Alfonso (2010). *La sociedad del abandono: Ensayo sobre la vigilancia anticipada en las sociedades contemporáneas*, COLECH, México.

Jacobs, Jane (1975). *La economía de las ciudades*, Ediciones Península, Barcelona.

Jacobs, Jane (2011). *Muerte y vida de las grandes ciudades*, Capitán Swing Libros, Salamanca.

Lozano, Wilfredo (1997). *La urbanización de la pobreza. Urbanización, Trabajo y Desigualdad social en Santo Domingo*, FLACSO, Santo Domingo.

Oviedo, Enrique. *Santiago, una ciudad con temor en Revista Temas Sociales*, Núm. 26, Julio-Agosto, 1999, Santiago, Chile.

Pires do Rio Caldeira, Teresa (2007). *Ciudad de muros*, Editorial Gedisa, Barcelona.

Pires do Rio Caldeira, Teresa (2010). *Espacio, segregación y arte urbano en el Brasil*, Katz-CCCB, Madrid.

Ramírez Kuri, Patricia (2013). *Las disputas por la ciudad. Espacio social y espacio público en contextos de Latinoamérica y Europa*, UNAM-Porrúa, México.

Rifkin, Jeremy (2002). La era del acceso. *La revolución de la nueva economía*, Paidós, Barcelona.

Roiz, Javier (2013). *El mundo interno y la política*, Plaza y Valdez Editores, México.

Roiz, Javier (2008). *Sociedad vigilante y mundo judío en la concepción del Estado*, Editorial Complutense, Madrid.

Sassen, Saskia (2013). *Inmigrantes y ciudadanos. De las migraciones masivas a la Europa fortaleza*, Siglo XXI España, Madrid.

Silva, Armando (2013). *Atmósferas ciudadanas. Grafiti, arte público, nichos estéticos*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá.

Silva, Armando (2013). *Imaginario, el asombro de los social*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá.

Silva, Armando (2007). *Imaginario urbano en América Latina: urbanismos ciudadanos*, Fundació Antoni Tapies, Barcelona.

Silva, Armando (2006). *Imaginario urbano*, Arango Editores, Bogotá.

Silva, Armando (2005). *Polvos de ciudad*, Editorial La Balsa, Bogotá.

Valenzuela Arce, José Manuel (Coordinador) (2015). *El sistema es antinosotros. Culturas, movimientos y resistencias juveniles*, Gedisa-COLEF-UAM, México.

Ziccardi, Alicia (Compiladora) (2008). *Procesos de urbanización de la pobreza y nuevas formas de exclusión social*, CLACSO-Siglo del Hombre Editores, Bogotá.

Ziccardi, Alicia (Coordinadora) (2012). *Ciudades del 2010: entre la sociedad del conocimiento y la desigualdad social*, UNAM, México.

Otras Referencias

Atlas de la globalización 2008, Universidad de Valencia. Valencia, España.

Atlas Geopolítico 2010, de Le Monde Diplomatique en Español, Madrid, España.

Guía para la prevención con jóvenes. Hacia políticas de cohesión social y seguridad ciudadana. ONU-HABITAT- Universidad Alberto Hurtado, 2011, Santiago, Chile.

Informe de la UNFPA 2007, Estado de la población mundial 2007. Liberar el potencial del crecimiento urbano.

Informe: *Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012*. Rumbo a una transición urbana, ONU-HABITAT. www.onuhabitat.org

Informe: *Panorama Temático Laboral. Transición a la formalidad en América Latina y el Caribe*, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, OIT, 2014.



